

Paz, posconflicto y reconciliación 2019

Facultad
Ciencias Sociales

Departamento
Ciencia Política

Dirección

-Miguel García Sánchez, Ph.D.
Universidad de los Andes, Colombia
-Juan Carlos Rodríguez Raga, Ph.D.
Universidad de los Andes, Colombia

Consejo Editorial

-Catalina Barragán Lizarazo
Universidad de los Andes, Colombia
-Juan Camilo Plata Caviedes, Ph.D.
Universidad de los Andes, Colombia

Colaboradores (asistentes graduados)

Adriana Gaviria Dugand
Ana Villalba Castro
Carlos Arturo Ávila García
Daniel Alejandro Socha Castelblanco
Daniela Jaime Peña
Fanny Melissa Medina Ariza
Juan Andrés Calderón Herrera
Juan Camilo Núñez
Laura Fernanda Merchán Rincón
María Carolina Mesa Mendoza
Pedro Juan Mejía Aguilar
Wilson Forero Mesa

Corrector de estilo

Juan Camilo Bierman López

Redes sociales

  @ObsDemocracia
 @obsdemocracia_uniandes
www.obsdemocracia.org

Diseño

Toquica. Estudio de Diseño

ISSN: 2539-0465

Imagen de Portada

Pedro Juan Mejía Aguilar

Julio 2020, Edición 01

Tabla de Contenido

06	Presentación	025	1.3. Victimización en el último año	037	2.1. Introducción
08	Descripción de la muestra	027	1.4. Tipos de hechos y severidad de la victimización	038	2.2. Apoyo a la salida negociada al conflicto
016	Introducción	032	1.5. Principales victimarios del conflicto armado	040	2.3. Apoyo al Acuerdo de Paz y a las políticas de posconflicto
020	1. Victimización	034	1.6. Conclusiones	048	2.4. Opiniones sobre la implementación del Acuerdo y confianza en FARC
021	1.1. Introducción	036	2. Salida negociada y Acuerdo de Paz con Las FARC-EP	055	2.5. Conocimiento sobre el Acuerdo de Paz
023	1.2. Victimización histórica por el conflicto armado				

058

2.6. Conclusiones

060

3. Reconciliación

061

3.1 Introducción

063

3.2. Actitudes hacia el perdón
y la reconciliación

065

3.3. Contribución de
componentes del Acuerdo de
Paz a la reconciliación

068

3.4. Convivencia con
excombatientes

071

3.5. Salud Mental
y actitudes de
reconciliación

089

3.6. Conclusiones

092

**4. Desempeño estatal
y posacuerdo**

093

4.1 Introducción

094

4.2. Seguridad

095

4.3. Resolución de
conflictos y justicia

105

4.4. Derechos humanos
y líderes sociales

115

4.5. Conclusiones

118

**Conclusiones
generales**

130

Referencias

136

Anexos

148

**Cuestionario Colombia,
un país más allá del
conflicto**

Presentación

El Observatorio de la Democracia es el centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y social del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Desde hace más de una década se ha encargado de realizar, en Colombia, el principal estudio de opinión pública del continente americano: el Barómetro de las Américas. A través de este riguroso estudio de opinión pública en Colombia, con comparabilidad histórica para los últimos 16 años y comparabilidad entre países del continente, el Observatorio de la Democracia interpreta y analiza las opiniones, creencias, actitudes y percepciones de los colombianos frente a temas estructurales y coyunturales, informando a Gobierno, autoridades, academia y población en general, con el fin de contribuir de esta manera a la generación de políticas públicas, iniciativas, acciones y debates frente a temas clave para el desarrollo del país.

En la actualidad, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes desarrolla este estudio con el apoyo y financiación de USAID, lo que posibilita que el país cuente con información actualizada anualmente, a través de muestras nacionales en los años pares y muestras especiales en años impares.

En el caso del estudio correspondiente a 2019, se desarrolló una muestra especial denominada ***Colombia, un país más allá del conflicto***. Una muestra que evidencia que los municipios colombianos no se pueden entender solo en función de la dualidad afectados por el conflicto vs. municipios no afectados por este, sino que dentro de ellos hay gran diversidad: no todos los municipios que han recibido el impacto de la guerra directamente lo han sufrido de la misma manera e intensidad ni a todos los caracteriza el mismo nivel de presencia estatal.

Se podrá acceder a los informes estratégicos: Paz, Posconflicto y Reconciliación, Democracia e Instituciones, y Actitudes y opiniones de la mujer en Colombia. Todos ellos estarán disponibles en versión impresa y digital en la página web del Observatorio de la Democracia: <http://www.obsdemocracia.org>.

La realización del estudio 2019 *Colombia, un país más allá del conflicto* fue posible gracias a la colaboración de varias instituciones. Se destaca la labor en conjunto del Observatorio de la Democracia, la Universidad de los Andes y USAID, así como el apoyo de la firma Ipsos y la Universidad de California en Berkeley. A esto debe sumarse la labor del equipo de gestores y de asistentes graduados del Observatorio de la Democracia, compuesto por Juan Camilo Plata Caviedes, Carlos Arturo Ávila García, Adriana Gaviria Dugand, Juan Andrés Calderón Herrera, Daniela Jaime Peña, Juan Camilo Núñez, Daniel Alejandro Socha Castelblanco, Laura Fernanda Merchán Rincón, Pedro Juan Mejía Aguilar, Wilson Forero Mesa, Ana Villalba Castro, Fanny Melissa Medina Ariza y María Carolina Mesa Mendoza.

Descripción de la muestra

Colombia ha afrontado múltiples retos a lo largo de su historia. Uno de ellos es el largo conflicto armado que ha enfrentado a los colombianos y afectado amplias regiones del país. Aunque la violencia derivada del conflicto ha disminuido en los últimos años, como consecuencia de las políticas de seguridad y del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, algunas regiones del país siguen conviviendo con la inseguridad y los grupos armados ilegales.

Más allá de la violencia política, desde el inicio de la república el Estado colombiano ha tenido grandes dificultades para instalarse y consolidarse en la totalidad del territorio nacional, esto ha redundado en que la capacidad de las instituciones estatales, para proveer servicios básicos, varíe significativamente entre algunas capitales y las zonas rurales más apartadas, para mencionar apenas un ejemplo. Esto es lo que algunos autores han denominado presencia diferenciada del Estado (González 2014).

Teniendo como punto de partida estas dos particularidades del caso colombiano, el estudio especial 2019 del Observatorio de la Democracia, Colombia, un país más allá del conflicto, tiene como objetivo analizar hasta qué punto las variaciones en los niveles de violencia política y de capacidad estatal inciden sobre las opiniones y comportamientos políticos y sociales de los colombianos.

Para abordar este interrogante, el Observatorio de la Democracia, junto con sus aliados del departamento de Ciencia Política de la Universidad de California en Berkeley,¹ desarrolló un innovador un diseño muestral que captura los distintos escenarios que se desprenden de intersectar la incidencia del conflicto y la capacidad estatal. Para articular esa muestra tomamos como punto de referencia los 170 municipios que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

1. Para el diseño y ejecución de esta muestra contamos con el apoyo académico de la profesora Aila Matanock departamento ciencia política de la Universidad de California Berkeley, y de Natalia Garbiras estudiante doctoral de la misma universidad. Igualmente la profesora Matanock apoyo financieramente una parte de este estudio. Estos recursos provinieron del "University of California Multicampus-National Lab Collaborative Research and Training award LFR-18-547591" y de la Folke Bernadotte Academy.

Los PDET hacen parte del primer punto del Acuerdo de Paz, que se refiere a la Reforma Rural Integral. En general, esta reforma pretende lograr una transformación estructural del campo y generar condiciones de bienestar para los campesinos del país. De ahí que los PDET se formularán como instrumentos de planeación y administración especiales que contarán con la participación de los ciudadanos a nivel comunitario, municipal, y regional. Después de la firma del Acuerdo de Paz, el gobierno decidió que los PDET se implementarían en 170 municipios distribuidos en 16 subregiones. Los criterios utilizados para identificar esas poblaciones fueron: altos niveles de violencia relacionadas con el conflicto, altos niveles de pobreza, alta presencia de economías ilícitas, y debilidad institucional.

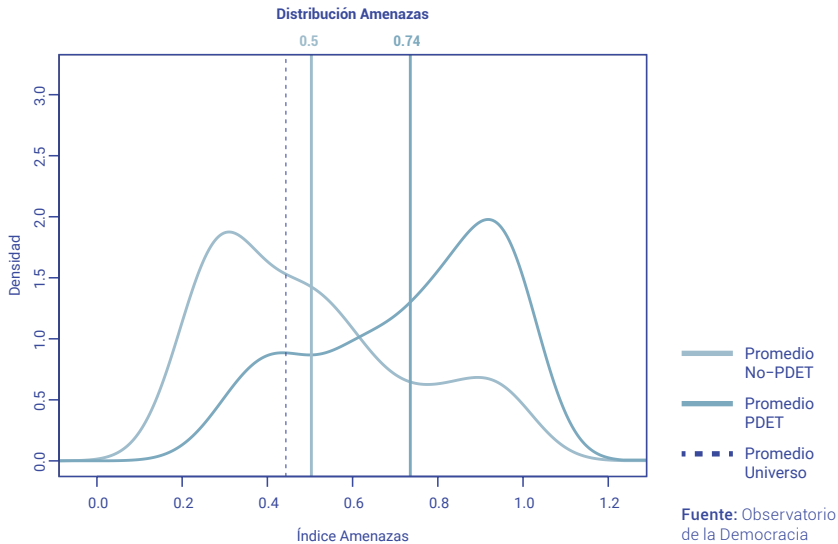
Dado que los municipios PDET han sido muy afectados por el conflicto armado y que este grupo de municipios cuenta con niveles variables de capacidad estatal; para poder establecer hasta qué punto las variaciones en los niveles de exposición al conflicto y de capacidad estatal tienen un impacto en las opiniones y comportamientos políticos y sociales de los colombianos, era necesario identificar un grupo de municipios parecidos a los PDET, menos en su nivel de violencia. Para lograr este objetivo usamos un procedimiento de emparejamiento donde el tratamiento es la asignación de un municipio como PDET. Las variables utilizadas para hacer dicho emparejamiento fueron las siguientes: apoyo hacia los acuerdos de paz, población, capacidad estatal, área cultivada con coca, nivel de desarrollo municipal, índice de ruralidad y la distancia a Bogotá medida en kilómetros.

Así, se estimó la probabilidad de que un municipio fuera PDET condicional a la serie de covariables mencionadas anteriormente. Luego, a partir de esta probabilidad, tratamos de emparejar todos los municipios PDET con municipios NO-PDET. A partir de este procedimiento, logramos formar parejas con municipios NO-PDET para 95 de los 170 municipios PDET.² Después, verificamos que estas 95 parejas de municipios fueran muy similares en términos de las características municipales descritas anteriormente. Los resultados de esta comparación se describen en la Tabla 3 donde vemos que no hay diferencias significativas, entre cada grupo de municipios, en el promedio de cada una de las covariables que se usaron para hacer el emparejamiento.

2. Los restantes 67 municipios tienen características muy particulares para las que no se encuentran casos comparables entre los municipios NO-PDET. Con el fin de garantizar la comparabilidad, se establece que dos municipios son comparables si la diferencia entre sus probabilidades estimadas de ser PDET es menor a un cuarto de una desviación estándar.

Como se mencionó anteriormente, uno de los criterios de selección de los municipios PDET fue una alta exposición a la violencia relacionada con el conflicto armado. Por lo tanto, en el diseño de la Muestra Especial 2019, el hecho de que un municipio sea PDET se usa como una forma de capturar la exposición de una población a la violencia política. Para verificar que esta medida fuera apropiada usamos como segundo indicador de la cercanía de un municipio al conflicto el “Índice de Riesgo”. Esta medida, desarrollada por la Unidad de Víctimas de Colombia (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas – UARIV), captura la incidencia de la violencia en el 2017, y toma valores entre 0 (sin riesgo) y 1 (alto riesgo). A partir de este análisis, encontramos que la distribución del riesgo en los municipios es consistente con la división administrativa de los municipios PDET y los municipios NO-PDET. Es decir, los municipios PDET presentan puntajes más altos en el “Índice de Riesgo” que el resto de los municipios del país (Gráfica 1).

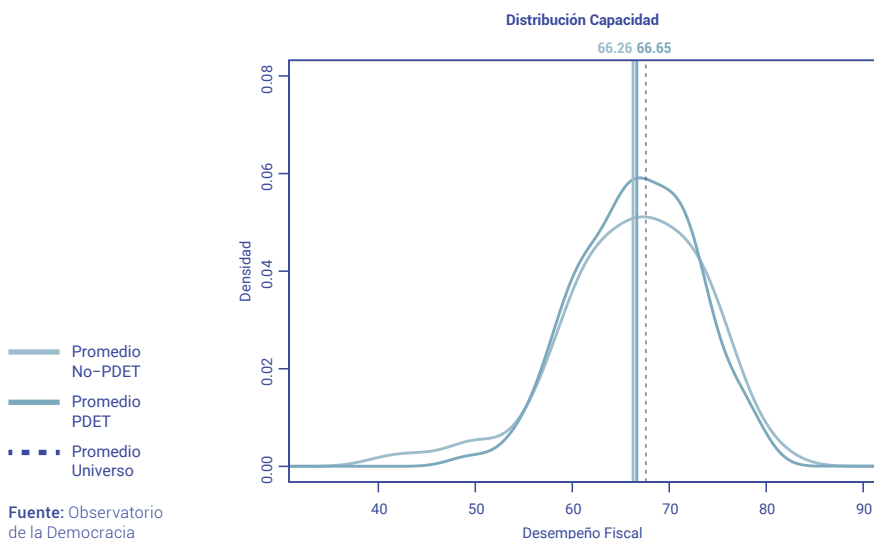
Gráfica 1. Incidencia del conflicto armado. Municipios PDET y NO-PDET (después del emparejamiento)



Para incorporar la dimensión de capacidad estatal en el diseño de la muestra especial 2019, usamos el Indicador de Desempeño Fiscal del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Aunque la definición de las zonas PDET tuvo en cuenta la vulnerabilidad institucional, lo que significa que estos municipios tienen niveles de capacidad estatal relativamente bajos, si se los pone en perspectiva con el promedio nacional, una vez realizado el emparejamiento

el resultado de este ejercicio nos mostró que dentro de las poblaciones PDET existe una importante variación en esta medida. Es decir, en las zonas del país más afectadas por el conflicto, algunos municipios tienen niveles de capacidad estatal muy bajos, mientras otros cuentan con mayores niveles de capacidad. Adicionalmente, como lo muestra la Gráfica 2, la distribución de la capacidad estatal en los municipios PDET es idéntica a la de los NO PDET.

Gráfica 2. Distribución de la capacidad estatal. Municipios PDET y NO-PDET (después del emparejamiento)



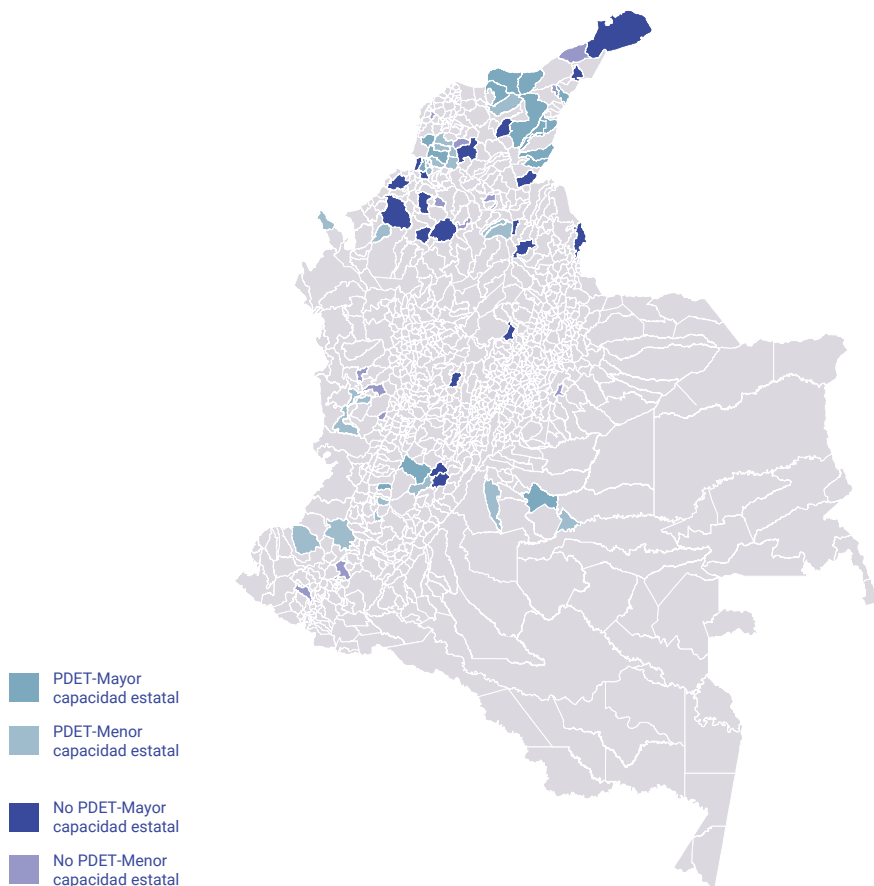
Fuente: Observatorio de la Democracia

Adicionalmente, al comparar otras variables entre los municipios PDET y NO-PDET emparejados encontramos que son idénticos en todas las dimensiones consideradas.

Tabla 3. Balance antes y después del emparejamiento.

Variable	ANTES DEL EMPAREJAMIENTO			DESPUÉS DEL EMPAREJAMIENTO		
	NO-PDET	PDET	P-valor	NO-PDET	PDET	P-valor
Índice de amenaza	0.372	0.829	0.00	0.503	0.735	0.00
Votó Sí Plebiscito	48.9	65.9	0.00	62.2	62.1	0.95
Población	46125	40655	0.63	52603	45098	0.54
Desempeño Fiscal	68.85	66.35	0.00	66.26	66.65	0.69
Cultivos de Coca	10.1	958.8	0.00	80.5	174.2	0.10
Índice de Pobreza Multidimensional	66.6	81.3	0.00	78.8	77.9	0.59
Capacidad Institucional	0.515	0.661	0.00	0.628	0.618	0.64
Distancia de Bogotá	289	430	0.00	469	442	0.19
Ruralidad	0.549	0.556	0.72	0.494	0.512	0.72

Gracias a este método de emparejamiento llegamos a un universo muestral compuesto por 190 municipios (95 PDET y 95 NO PDET) del cual seleccionamos aleatoriamente 40 parejas, es decir, 80 municipios. En el mapa se muestra la distribución geográfica de los municipios que componen esta muestra.³ El número total de municipios seleccionados por región es proporcional a la población en la muestra emparejada que habita en esa región. Así, en la región Caribe se seleccionan 48 municipios, en la Central 12, en la Oriental 6 municipios y en la Pacífica 14.



3. Dado que los municipios PDET en la región Amazonía-Orinoquía se concentran en las zonas más habitadas y abarcan la totalidad de departamentos como Putumayo, Caquetá y Guaviare, no es posible identificar municipios NO-PDET de esta región del país que se ajusten a los criterios de emparejamiento que usamos. Por lo anterior, en la muestra especial se excluye la región Amazonía-Orinoquía.

Dentro de cada grupo de municipios (PDET y NO-PDET) tenemos variaciones de capacidad estatal, de modo que en este estudio hablaremos de municipios de mayor y menor capacidad estatal. Los 80 municipios en la muestra se distribuyen así.

	MENOR CAPACIDAD ESTATAL	MAYOR CAPACIDAD ESTATAL
PDET	21	19
NO PDET	19	21

En cada municipio se pretendía llevar a cabo 48 encuestas para un total de 3,840 encuestas. En realidad, se hicieron 4006 encuestas. Por lo anterior, las encuestas fueron ponderadas para que correspondan al número de encuestas en el diseño original, sin perder información.

Notas



Introducción

En 2019 se cumplieron tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC, y su implementación sigue progresando. De acuerdo con el tercer informe sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz (Instituto Kroc, 2019), más de dos tercios de los compromisos en el Acuerdo están en proceso de implementación, mostrando así la responsabilidad de los firmantes del Acuerdo, la sociedad colombiana, sus comunidades y la comunidad internacional.

Hasta la fecha, el principal logro del Acuerdo de Paz tiene que ver con el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las FARC-EP y la transformación de este grupo guerrillero en un partido político. Siendo los comicios del 27 de octubre las primeras elecciones locales y departamentales en las que participó el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). No obstante, la FARC obtuvo un resultado electoral precario, con menos del 1% de los votos emitidos en la jornada y solo dos concejales electos. Otro logro para resaltar es la puesta en funcionamiento de varios de los mecanismos de verificación, monitoreo y resolución de conflictos.

A pesar de esto, el Instituto Kroc advierte que es de suma relevancia acelerar el ritmo de implementación del Acuerdo, pues para inicios de 2019 el 31% del total de compromisos del Acuerdo no habían iniciado implementación, estando especialmente rezagados los puntos de Reforma Rural Integral y de solución al problema de las drogas ilícitas. De no implementar plenamente el Acuerdo, el país corre el riesgo de retroceder en la construcción de una paz estable y duradera, más aún si se tiene en cuenta que los excomandantes y negociadores del Acuerdo de Paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, justificaron su retorno a las armas alegando inseguridad jurídica e incumplimiento del Acuerdo por parte de los gobiernos Santos y Duque. Por esto, es fundamental que se avance en la implementación de lo pactado de tal forma que los colombianos más desprotegidos y los excombatientes desmovilizados de la guerrilla sientan que la paz vale la pena.

Es fundamental que se avance en la implementación de lo pactado de tal forma que los colombianos más desprotegidos y los excombatientes desmovilizados de la guerrilla sientan que la paz vale la pena

Otro aspecto particularmente preocupante, señalado por el informe del Instituto Kroc, es la creciente inseguridad de la Colombia del posacuerdo. Para el periodo entre noviembre de 2016 y julio de 2019, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ, 2019) registró 623 casos de asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Del mismo modo, 137 exguerrilleros de las FARC-EP fueron asesinados durante el mismo periodo de tiempo. Reflejando así el (re)surgimiento de conflictos locales entre nuevos y viejos actores armados que disputan el control sobre las economías ilícitas y los territorios históricamente ocupados por la guerrilla.

En este contexto, el país enfrenta un panorama de incertidumbre, en el que los avances de corto plazo en la implementación del Acuerdo de Paz contrastan con desafíos que ponen en duda su efectiva implementación en el mediano y largo plazo. Esta incertidumbre agudiza el clima de polarización política que caracteriza la opinión de los colombianos frente a la paz, cuya manifestación más clara fue el resultado del Plebiscito en 2016, donde triunfó el No con el 50.21% de los votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Dada la coyuntura que vive actualmente el país, resulta indispensable estudiar y entender las opiniones y actitudes de los ciudadanos, especialmente los más afectados por el conflicto, frente al Acuerdo de Paz y el posconflicto.

El país enfrenta un panorama de incertidumbre, en el que los avances de corto plazo en la implementación del Acuerdo de Paz contrastan con desafíos que ponen en duda su efectiva implementación en el mediano y largo plazo

Desde 2013, el Barómetro de las Américas-LAPOP, realizado en Colombia por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, ha incluido un módulo de preguntas que se relacionan con el Proceso de Paz y el posacuerdo. Además, el Observatorio de la Democracia ha realizado algunos estudios “especiales”, que

hacen énfasis en regiones o poblaciones específicas, con el fin de complementar la información recolectada en encuestas de alcance nacional y poder contrastar sus opiniones y actitudes políticas con aquellas del país en general.

Así, el estudio *Colombia, un país más allá del conflicto*, realizado entre septiembre y diciembre de 2019, tiene como propósito hacer una presentación detallada de las actitudes, opiniones y experiencias de los habitantes de municipios con distintos niveles de exposición a la violencia y de capacidad estatal. Esto con el fin de establecer hasta qué punto las variaciones en estas dos dimensiones tienen un efecto en el comportamiento político y las opiniones de los ciudadanos sobre los diversos temas abordados por este estudio. Para plantear una respuesta a esta pregunta el informe presentará los resultados, de manera comparativa, para los cuatro escenarios que se desprenden de cruzar exposición al conflicto (PDET – NO-PDET) y capacidad estatal. Esos escenarios o tipos de municipio son: PDET de menor capacidad, PDET de mayor capacidad, NO-PDET de menor capacidad y NO-PDET de mayor capacidad.

Los temas de estudio que se abordan en este informe tienen que ver con las opiniones y actitudes de los entrevistados respecto al conflicto armado, el Acuerdo de Paz, la participación política de excombatientes, la justicia transicional, la reincorporación de los excombatientes a la vida en sociedad, la reconciliación entre los ciudadanos y los exmiembros de grupos armados, las percepciones de los ciudadanos sobre la capacidad estatal, particularmente respecto a temas de seguridad de los ciudadanos y de los líderes sociales.

Este informe está dividido de la siguiente manera. Después de esta introducción, se presenta la información sobre la victimización por el conflicto armado. En el segundo capítulo se aborda todo lo relacionado con la salida negociada a la guerra, las percepciones sobre el Acuerdo de Paz con las FARC y el estado de su implementación, las expectativas de los colombianos respecto al impacto de la implementación del Acuerdo y el conocimiento de los ciudadanos acerca del mismo. En el tercer capítulo se analizan las actitudes ciudadanas hacia la reconciliación y la convivencia con antiguos combatientes de las FARC. En el cuarto capítulo se exploran las percepciones sobre la capacidad estatal, particularmente en materia de seguridad, justicia, derechos humanos y la situación de los líderes sociales. Finalmente, el último capítulo está dedicado a las conclusiones del estudio.

1. Victimización

1.1. Introducción

La construcción de una paz estable y duradera depende de la capacidad del Estado para garantizar los derechos de la población y, en el contexto del posconflicto, esto significa reconocer a las víctimas y planear y ejecutar estrategias efectivas de reparación. El reconocimiento y la reparación de las víctimas son medidas que deberían proteger a la población de futuros hechos victimizantes, garantizar un sistema de justicia efectivo y equitativo en el país, y ayudar a cerrar las brechas de desconfianza al interior de la sociedad (Comisión Colombiana de Juristas, 2007).

Este capítulo presenta información sobre los niveles de victimización por el conflicto armado en la muestra especial 2019. Se exponen dos dimensiones de victimización; la primera hace referencia a la ocurrencia de algún tipo de hecho victimizante en el contexto del conflicto armado sin un límite o referente temporal (victimización histórica); y la segunda está relacionada con casos ocurridos en el año inmediatamente anterior a la realización de la encuesta (victimización en el último año). Este capítulo también describe los principales responsables de los hechos victimizantes, así como los tipos de hechos y la severidad de la victimización que ha sufrido la población.

Es importante señalar que la medida de victimización que se presenta en este estudio es imprecisa en dos sentidos. En primer lugar, la encuesta tan sólo pregunta por 5 hechos de victimización, posiblemente dejando por fuera aspectos de las experiencias de violencia que otro tipo de estudios más comprensivos sí capturan, como por ejemplo la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV),⁴ que pregunta por 15 tipos de hechos victimizantes. Por esta razón, es posible que la medida de victimización del Observatorio de la Democracia subestime la exposición de los entrevistados al conflicto armado. Otra fuente de imprecisión en la medida de victimización del estudio tiene que ver con el hecho de que el cuestionario captura

4. Los 15 tipos de hechos victimizantes incluidos en la RNI son: abandono o despojo forzado de tierras, acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos, amenaza, confinamiento, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, lesiones personales psicológicas, minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro, tortura, vinculación de niños niñas y adolescentes.

la ocurrencia de estos hechos de manera indirecta, debido a que se le pregunta a los entrevistados respecto a experiencias personales o de algún familiar. En este sentido, la medida del estudio sería más comprensiva que la de la RNI porque la unidad de análisis es la familia y no el individuo. Por los motivos anteriores, la información que se presenta en este capítulo debe interpretarse como una aproximación, a nivel familiar, a la exposición a la violencia generada por el conflicto.

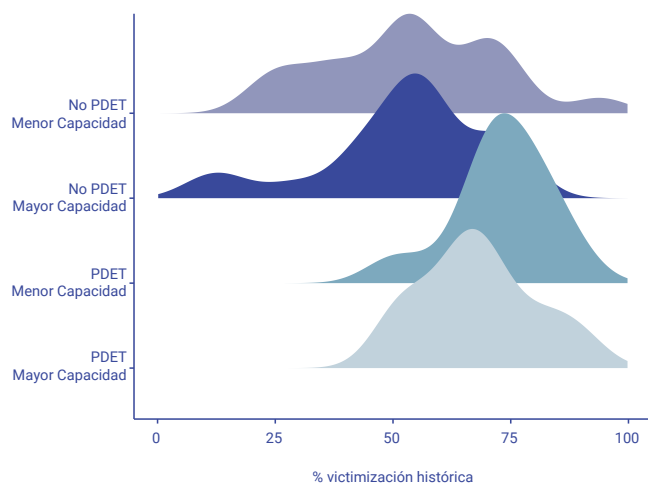
1.2. Victimización histórica por el conflicto armado

Para entender la dinámica de victimización histórica por el conflicto armado, desde 2014 el Observatorio de la Democracia ha preguntado a los encuestados si en sus familias se han presentado hechos de victimización a causa del conflicto armado, tales como: pérdida y/o desaparición de algún familiar, despojo de tierra, secuestro y exilio del país. Un primer resultado importante sobre este tema es que la mayoría de los entrevistados del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto* (6 de cada 10) respondieron haber sufrido al menos un hecho victimizante en sus familias. Esto quiere decir que, en términos generales, esta muestra especial está compuesta por colombianos que son distintos al promedio nacional en términos de exposición a la violencia. Como se describe en el estudio del Barómetro de las Américas de 2018, la tendencia histórica del índice de victimización en las muestras nacionales se ha mantenido estable desde 2004 hasta 2018, y es considerablemente más baja que la de este estudio: 4 de cada 10 entrevistados. Esta diferencia entre los datos derivados de las muestras nacionales y el estudio especial 2019 no es sorprendente si se tiene en cuenta que la mitad de las entrevistas del estudio especial se hicieron en municipios PDET.

No obstante, al comparar los niveles de victimización por tipo de municipio se observa una heterogeneidad importante en el estudio. Como es de esperar, los niveles de victimización por el conflicto armado son mayores en los municipios PDET, sin importar su nivel de capacidad estatal. Mientras que en los municipios NO-PDET 5 de cada 10 entrevistados dijeron haber sido víctimas de alguno de los hechos por los que indagó la encuesta, en los municipios PDET, tanto de mayor como de menor capacidad estatal, en promedio 7 de cada 10 entrevistados dijeron lo mismo (Gráfica 1). Por otra parte, en comparación con el estudio Barómetro de las Américas 2018, se encuentra que en las zonas analizadas por el estudio hay un nivel de victimización histórica significativamente mayor (61.7%) en comparación al identificado por la Muestra Nacional de 2018 (40.8%).

Mientras que en los municipios **NO-PDET 5 de cada 10** entrevistados dijeron haber sido víctimas de alguno de los hechos por los que indagó la encuesta, en los municipios **PDET, en promedio 7 de cada 10** entrevistados dijeron lo mismo

Gráfica 1. Victimización histórica por conflicto armado



WC1. ¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?

WC3. ¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia tuvo que irse del país?

WC2. ¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto?

COLWC8. ¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?

COLWC9. ¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?

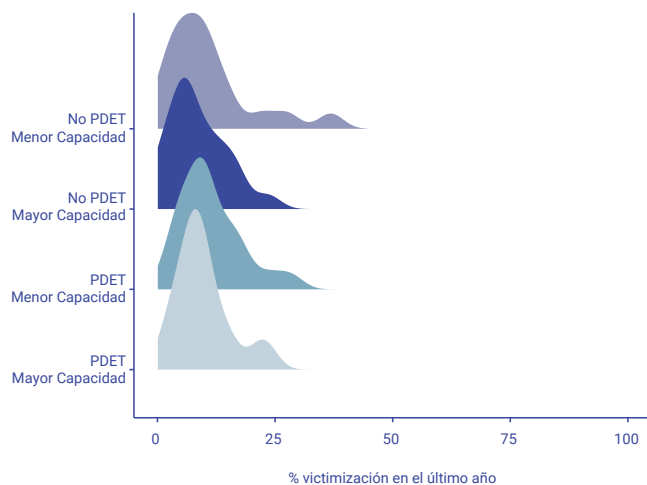
1.3. Victimización en el último año

Con el fin de analizar la intensidad de la victimización por el conflicto armado en distintos momentos del tiempo, el estudio especial 2019 identifica una dimensión reciente de la victimización, preguntando a aquellos que han sido víctimas si el hecho ocurrió durante los 12 meses previos a la realización del estudio. Como lo muestra la Gráfica 2, en promedio 1 de cada 10 entrevistados en todos los tipos de municipio experimentó un hecho victimizante durante el último año. A diferencia de lo que se observa en el caso de la victimización histórica, donde los niveles de exposición a la violencia son significativamente más altos en los municipios PDET (Gráfica 1), en la Gráfica 2 es evidente que no hay diferencias en los niveles de victimización en el último año por tipo de municipio. Este resultado sugiere que la firma del Acuerdo de Paz tuvo un efecto importante en los municipios PDET, al disminuir e igualar los niveles de victimización con los de los municipios NO-PDET.⁵ Sin embargo, no deja de ser preocupante que, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz, 10% de los ciudadanos en los municipios de la Muestra Especial 2019 sigan estando expuestos a la violencia. Esta proporción es significativamente más alta que en el estudio Barómetro de las Américas de 2018, donde el 6.8% de entrevistados reportó haber sido víctima en el último año, lo cual refleja la mayor vulnerabilidad de los entrevistados en la Muestra Especial 2019, en comparación con los de la muestra nacional de 2018.

La firma del Acuerdo de Paz tuvo un efecto importante en los municipios PDET, al disminuir e igualar los niveles de victimización con los de los municipios NO-PDET

5. Incluso, en comparación con el estudio Colombia Rural del Posconflicto de 2017, donde todos los municipios eran PDET, existe una disminución en la proporción de entrevistados que reportaron ser víctimas en el último año (15.7%).

Gráfica 2. Victimización por conflicto armado en el último año



WC1T. ¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto? ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?

WC3T. ¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país? ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?

WC2T. ¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto? ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?

COLWC8T. ¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro? ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?

COLWC9T. ¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?

1.4. Tipos de hechos y severidad de la victimización

A partir de los diferentes hechos de victimización por los que indaga el estudio, es posible tipificar la dinámica del conflicto armado, particularmente respecto a las diferentes formas de victimización y la severidad de la exposición a la violencia, medida como la cantidad de hechos que reportan los entrevistados. La Gráfica 3 compara la proporción de entrevistados que reportaron haber sufrido distintos hechos victimizantes en cada tipo de municipio. La gráfica tiene cinco filas, una por cada hecho victimizante. En cada fila se presenta la proporción de entrevistados que reportó ese hecho victimizante en cada tipo de municipio. El tamaño de los círculos indica la capacidad estatal del municipio, de manera que los círculos más grandes presentan los resultados de los municipios de mayor capacidad estatal, y los más pequeños los municipios de menor capacidad estatal. A su vez, el color de los círculos diferencia los municipios PDET (azul claro) de los municipios NO-PDET (azul oscuro). Por último, la gráfica presenta de manera simultánea los intervalos de confianza al 83% y al 95%, mediante las líneas que están a ambos lados de los círculos, siendo las líneas más gruesas los intervalos al 83%, y las más delgadas al 95%.⁶

A excepción del secuestro de un familiar (evento que, independientemente del escenario, es reportado por 1 de cada 10 entrevistados), tiende a haber un mayor reporte de hechos victimizantes en los municipios PDET. Por ejemplo, sin importar los niveles de capacidad estatal, en los municipios PDET 2 de cada 10 entrevistados reportaron tener un familiar exiliado, frente a 1 de cada 10 entrevistados que reportaron este hecho en municipios NO-PDET. De igual forma, 4 de

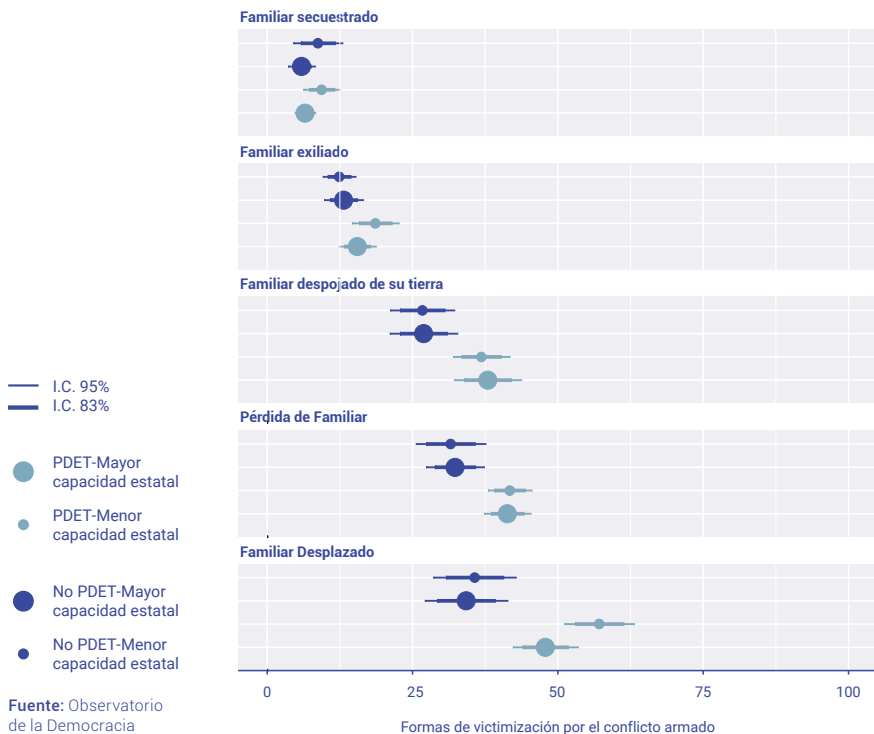
6. Con el propósito de ampliar las herramientas que permitan la interpretación de los resultados presentados en este informe, el Observatorio de la Democracia incorporó un tipo de gráficas donde se incluye, además de la representación convencional del intervalo de confianza del 95%, un intervalo de confianza al 83%. De esta manera, se podrán observar diferencias estadísticamente significativas, que no siempre son perceptibles con el convencional intervalo de 95%, en la medida en que la superposición de estos intervalos no implica necesariamente la no existencia de estas diferencias (para ampliar la explicación véase Knezevic (2008)). Al respecto, Goldstein y Healy (1995) señalan que la construcción de un intervalo de confianza al 83% permite evaluar diferencias estadísticamente significativas con un nivel de significancia del 0,5% en lo que a representación gráfica se refiere, sin ser una herramienta que reemplace el riguroso análisis estadístico que se realiza para la elaboración de este informe.

cada 10 entrevistados en municipios PDET reportaron ser víctimas de despojo y haber perdido un familiar, mientras que en los municipios NO-PDET 3 de cada 10 entrevistados reportaron lo mismo.

Por otra parte, la Gráfica 3 muestra que, incluso en municipios con niveles de exposición a la violencia similares, la dinámica del conflicto era diferente. En particular, vemos que la menor capacidad estatal aumenta la vulnerabilidad de la población, especialmente frente al desplazamiento forzado. Al comparar la proporción de entrevistados que han sufrido desplazamiento en sus familias, encontramos que hay mayor vulnerabilidad en los municipios PDET de menor capacidad estatal, en los que la mayoría de entrevistados (6 de cada 10) reportaron ser víctimas de desplazamiento, frente a 5 de cada 10 en municipios PDET con mayor capacidad estatal y 3 de cada 10 en municipios NO-PDET. Este resultado muestra que los municipios más expuestos a la violencia y con menor capacidad estatal fueron más vulnerables al desplazamiento forzado durante el conflicto armado.

En los municipios PDET 2 de cada 10 entrevistados reportaron tener un familiar exiliado, frente a 1 de cada 10 entrevistados que reportaron este hecho en municipios NO-PDET

Gráfica 3. Formas de victimización por el conflicto armado, 2019

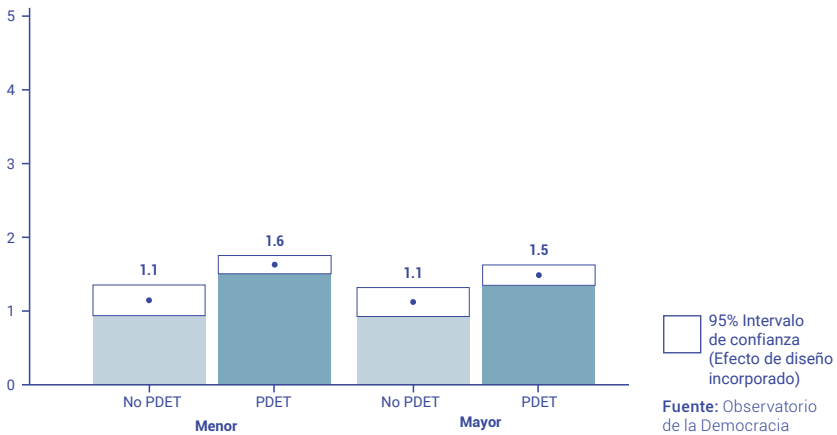


Una dimensión importante del conflicto armado en Colombia es la severidad con la que las víctimas han experimentado la violencia. Para analizar esta dimensión, el Observatorio de la Democracia calculó la cantidad de hechos victimizantes reportados por un mismo entrevistado en cada tipo de municipio, entendiendo como una experiencia de violencia más severa aquella que involucra una mayor cantidad de hechos. La Gráfica 4 muestra el promedio de hechos victimizantes reportados en cada tipo de municipio. Se observa que en los municipios PDET la cantidad promedio de hechos victimizantes reportados (1.6) es significativamente mayor a la de los municipios NO-PDET (1.1). Otra forma de comparar nivel de severidad de la violencia a la que han estado expuestos los entrevistados en los distintos tipos de municipio es observar la proporción de entrevistados que reportaron 2 o más hechos victimizantes en cada tipo de municipio. Al hacerlo, encontramos que en los municipios PDET aproximadamente la mitad de los entrevistados experimentó más de un hecho victimizante en sus familias, mientras que en los municipios NO-PDET esta

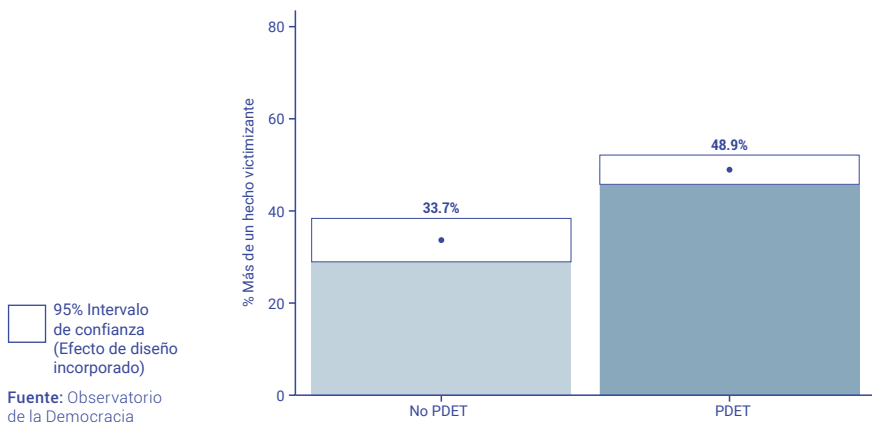
proporción desciende a la tercera parte (Gráfica 4). En este caso, no se encontraron diferencias en la severidad de la violencia entre municipios de mayor y menor capacidad estatal.

En los municipios PDET aproximadamente la mitad de los entrevistados experimentó más de un hecho victimizante en sus familias, mientras que en los municipios NO-PDET esta proporción desciende a la tercera parte

Gráfica 4. Cantidad promedio de hechos victimizantes reportados, 2019



Gráfica 5. Reporte de dos o más hechos victimizantes, 2019



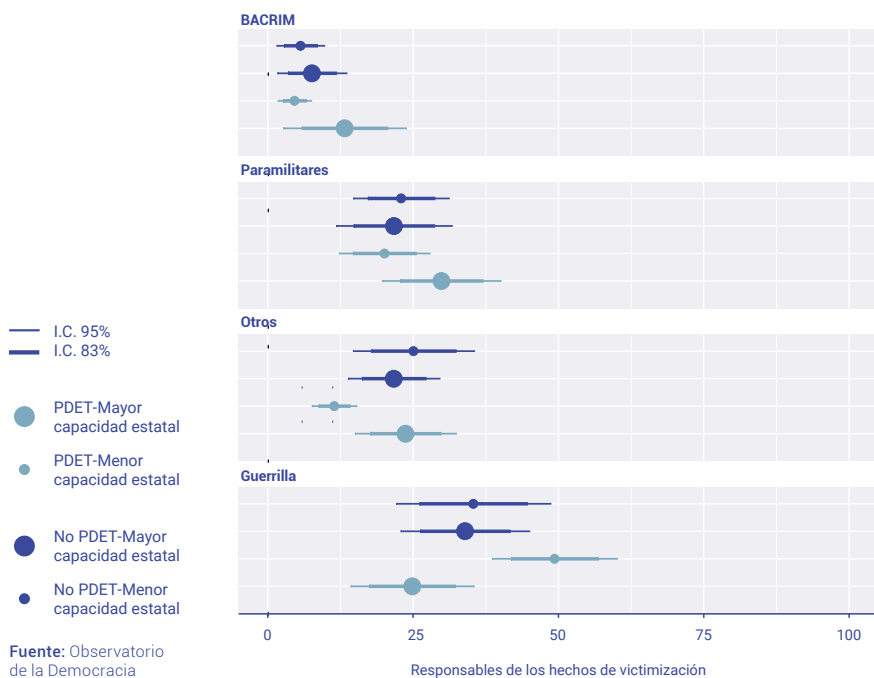
1.5. Principales victimarios del conflicto armado

El conflicto armado en Colombia ha sido particularmente dinámico, pues la variedad de factores económicos y políticos que se entrecruzan y alientan la guerra devino en una multiplicidad de actores armados legales e ilegales (Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2013). Para analizar la complejidad del conflicto colombiano, el Observatorio de la Democracia ha indagado desde 2005 por los responsables de los hechos victimizantes mencionados en la sección anterior.

La Gráfica 6 muestra que no hay diferencias significativas en la proporción de entrevistados que ha sido víctima de la guerrilla y de los paramilitares en los cuatro tipos de municipio. En cambio, la presencia de la guerrilla sí varía entre los municipios. En los municipios PDET con menor capacidad estatal es significativamente mayor la proporción de entrevistados que ha sido víctima de la guerrilla (49.3%), en comparación con los municipios de mayor capacidad estatal, tanto PDET como NO-PDET (25% y 34%, respectivamente). Asimismo, no hay diferencias significativas en la proporción de entrevistados que ha sido víctima de la guerrilla entre los municipios PDET con menor capacidad estatal y los municipios que tienen la misma capacidad estatal pero que son NO-PDET. Este patrón podría estar reflejando que la menor capacidad estatal se relaciona con un mayor nivel de presencia y control territorial de la guerrilla. Incluso, la presencia más fuerte de la guerrilla en municipios de menor capacidad estatal posiblemente explique los niveles más altos de desplazamiento en los municipios PDET con menor capacidad estatal, pues en zonas de mayor presencia guerrillera el desplazamiento fue la principal estrategia de los paramilitares para debilitar a la insurgencia. Por esta misma razón, las víctimas de otros grupos armados son significativamente menores en los municipios PDET de menor capacidad estatal (10%) a diferencia del resto de municipios (20%). Por último, no hay diferencias significativas en la proporción de entrevistados que ha sido víctima de los paramilitares y las bandas criminales (BACRIM) en los cuatro tipos de municipio.

La menor capacidad estatal se relaciona con un mayor nivel de presencia y control territorial de la guerrilla

Gráfica 6. Responsables de los hechos de victimización, 2019



¿Qué grupo o grupos fueron responsables de estos hechos?
COLWC4A. La guerrilla; **COLWC4B.** Los paramilitares;
COLWC4D. El ejército; **COLWC4E.** La policía; **COLWC4G.**
 BACRIM (Bandas criminales); **COLWC4C.** Ex paramilitares
 que se han reagrupado; **COLWC4F.** Otro

1.6. Conclusiones

Este capítulo mostró, desde distintas dimensiones, que los municipios PDET tienen mayores niveles de exposición a la violencia. En términos de victimización histórica, una mayor proporción de entrevistados en los municipios PDET ha sido víctima del conflicto en algún momento de su vida (7 de cada 10), en comparación a la proporción de víctimas en los municipios NO-PDET (5 de cada 10). En cuanto a la severidad del conflicto armado, se observa que los habitantes de los municipios PDET experimentaron una violencia más severa que los habitantes de los NO-PDET. En promedio, la mitad de entrevistados en los municipios PDET reportó haber sido víctima de dos o más hechos victimizantes durante el conflicto armado, mientras que en los municipios NO-PDET esta proporción desciende a la tercera parte.

Los resultados presentados en este capítulo validan empíricamente el diseño de la Muestra Especial 2019. Como se mencionó en la descripción del diseño del estudio, se seleccionaron municipios con distintos niveles de capacidad estatal y de exposición a la violencia con el objetivo analizar de qué manera las variaciones en los niveles de violencia política y de capacidad estatal inciden sobre las opiniones y comportamientos políticos y sociales de los colombianos. De esta forma, el hecho de que un municipio sea PDET fue usado en el diseño del estudio como una forma de capturar la exposición de la población a la violencia política. Por lo tanto, al evidenciar que tanto la victimización histórica como la severidad de la victimización es más alta en los municipios PDET de este estudio, se valida este atributo del diseño muestral.

Por otro lado, para analizar la incidencia de la capacidad estatal sobre las opiniones y comportamientos políticos y sociales de los colombianos, el diseño muestral captura los distintos escenarios que se desprenden de intersectar la incidencia del conflicto y la capacidad estatal. En esta dirección, este capítulo evidenció que la dinámica del conflicto armado en Colombia también variaba dependiendo de la capacidad estatal de cada municipio. Aunque la guerrilla tenía presencia en todos los tipos de municipio, la intensidad de su control disminuía en los municipios con mayor capacidad estatal, tanto PDET como NO-PDET. Por lo tanto, en los municipios PDET con menor capacidad estatal la proporción de entrevistados que reportó

ser víctima de la guerrilla (49.3%) es mayor que en el resto de los municipios y que en la muestra nacional de 2018 (44.9%). En este orden de ideas, es posible pensar que la convergencia entre hacer parte de los municipios PDET y tener menor capacidad estatal hacía que el territorio fuera más vulnerable ante la presencia regional y las acciones de la guerrilla.

Por último, los resultados de este capítulo ofrecen evidencia sobre el impacto del Acuerdo de Paz sobre la violencia, que aquí se manifiesta con un cierre de la brecha de victimización entre municipios PDET y NO-PDET, llegando al 10% en todos los tipos de municipio de la muestra. Sin embargo, no deja de ser preocupante que la población en los municipios del estudio siga estando expuesta a la violencia del conflicto armado.

Aunque la guerrilla tenía presencia en todos los tipos de municipio, la intensidad de su control disminuía en los municipios con mayor capacidad estatal, tanto PDET como NO-PDET

2. Salida negociada y Acuerdo de Paz con las FARC-EP

2.1. Introducción

El apoyo ciudadano al Acuerdo de Paz es un factor determinante para su implementación. Tres años después de su firma y después del triunfo del No en el Plebiscito de 2016 y el inicio de la implementación de lo acordado en un escenario político altamente polarizado, éste enfrenta evidentes desafíos. El objetivo general de este capítulo es analizar las opiniones de los ciudadanos sobre el Acuerdo de Paz y su implementación. Los temas que se exploran aquí son los siguientes: apoyo ciudadano a una salida negociada al conflicto con la guerrilla, al Acuerdo de Paz y a las políticas más visibles del posconflicto; opiniones ciudadanas sobre los beneficios de la implementación del Acuerdo; percepciones sobre el cumplimiento de lo pactado; actores (individuales o colectivos) que contribuyen a la implementación de lo acordado; conocimiento general del Acuerdo de Paz; y confianza en el partido político FARC.

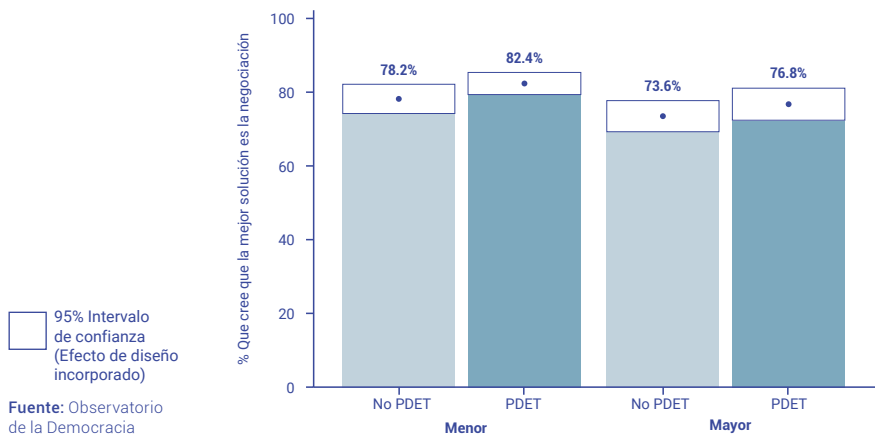
2.2. Apoyo a la salida negociada al conflicto

En promedio, 8 de cada 10 entrevistados en el estudio especial 2019 apoyan la salida negociada al conflicto con las guerrillas. Si bien en todos los tipos de municipio el apoyo a la negociación es superior al 70%, la Gráfica 7 muestra que el apoyo a la salida negociada es significativamente más alto (82.4%) en los municipios más expuesto a la violencia y de menor capacidad estatal, en comparación con los municipios con mayor capacidad estatal, sin importar el nivel de exposición a la violencia (75% en promedio).

Los niveles más altos de apoyo a la salida negociada en los municipios PDET de menor capacidad podría deberse a que, en estos municipios, los ciudadanos han sido más vulnerables a la violencia y por eso buscan superar esta situación. En informes de años anteriores se ha argumentado que la mayor exposición a la violencia se traduce en actitudes más favorables frente a las medidas que conducen a una paz negociada, posiblemente debido a la necesidad de terminar con el riesgo permanente de ser víctimas del conflicto (ver: Ávila *et al.* 2017). Este razonamiento podría explicar por qué en los municipios PDET de menor capacidad estatal hay un mayor apoyo a la salida negociada. Como se describió en el capítulo anterior, la convergencia entre la exposición a la violencia y la menor capacidad estatal acentúa el grado de vulnerabilidad de la población. En este tipo de municipios no solo es más alta la proporción de la violencia y la severidad de la victimización experimentada, sino que también hay una mayor proporción de víctimas de la guerrilla, reflejando una presencia más fuerte de estos actores en los municipios PDET de menor capacidad.

Los niveles más altos de apoyo a la salida negociada en los municipios PDET de menor capacidad podría deberse a que, en estos municipios, los ciudadanos han sido más vulnerables a la violencia y por eso buscan superar esta situación

Gráfica 7. Apoyo a una salida negociada al conflicto con guerrilla



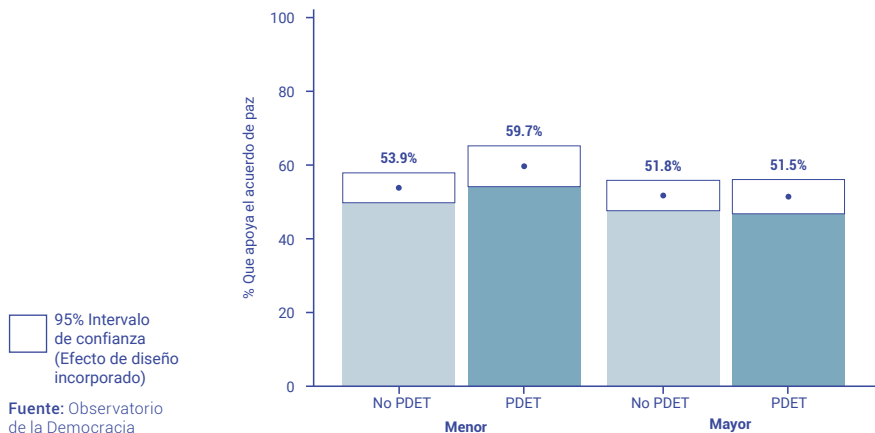
COLPAZIA. De las siguientes opciones para solucionar el conflicto con la guerrilla, ¿cuál cree que es la mejor? Negociación, Uso de la fuerza militar, Ambas, No sabe / No responde

2.3. Apoyo al Acuerdo de Paz y a las políticas del posconflicto

El Observatorio de la Democracia también indagó por el apoyo al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Llama la atención que, aunque el apoyo a una salida negociada con la guerrilla supera el 70% en todos los municipios del estudio especial 2019, el apoyo al Acuerdo de Paz es significativamente menor, oscilando entre el 51% y el 60% (Gráfica 8). A excepción de los municipios PDET de menor capacidad, en los que la mayoría de los entrevistados (6 de cada 10) apoya el Acuerdo de Paz, en el resto de los municipios apenas poco más de la mitad de los entrevistados lo apoya.

A excepción de los municipios PDET de menor capacidad, en los que 6 de cada 10 apoyan el Acuerdo de Paz, en el resto de los municipios apenas poco más de la mitad de los entrevistados lo apoya

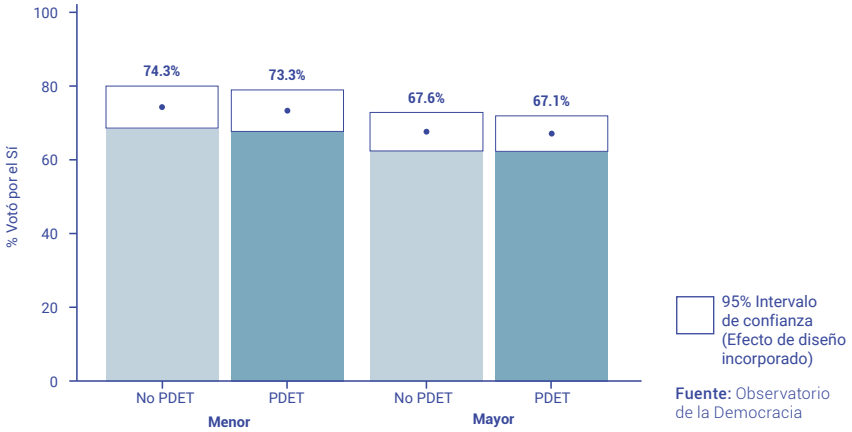
Gráfica 8. Apoyo al Acuerdo de Paz



COLPROPAZ1B. El gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo de paz. ¿Hasta qué punto apoya usted este acuerdo de paz?

El siguiente tema por el que indagó el Observatorio de la Democracia fue el Plebiscito de 2016. Sólo el 41% de los entrevistados en la Muestra Especial reportó haber votado en el Plebiscito. De quienes participaron en la consulta, como lo muestra la Gráfica 9, 7 de cada 10 lo hizo por el Sí, independientemente del tipo de municipio.

Gráfica 9. Porcentaje que votó por el Sí en el Plebiscito



COLPROPAZ16. El 2 de octubre de 2016 se realizó un plebiscito para ratificar los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Qué hizo usted ese día?

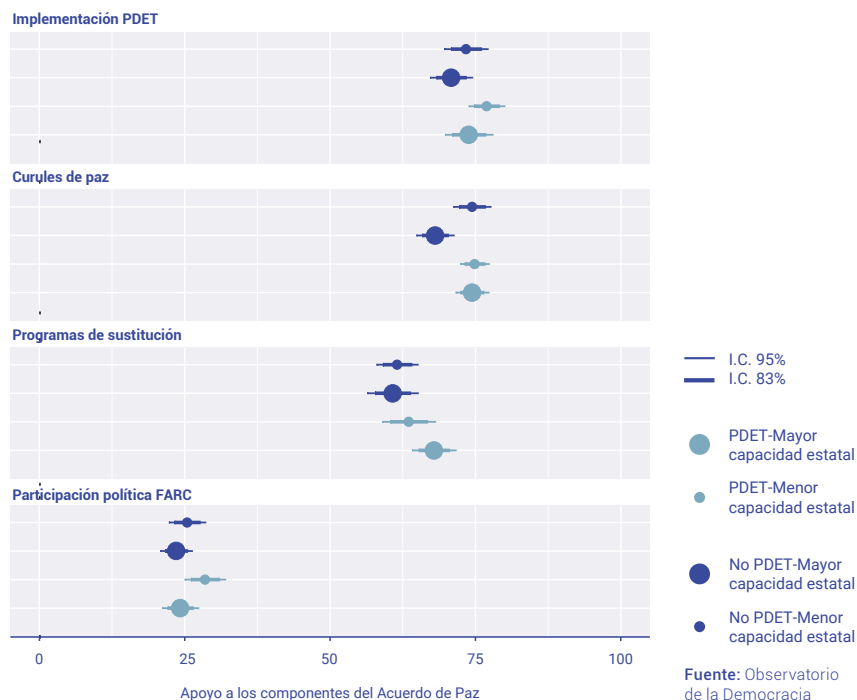
El Observatorio de la Democracia también preguntó por las opiniones de los entrevistados con respecto a los principales aspectos del Acuerdo de Paz. Como lo muestra la Gráfica 10, los componentes del Acuerdo que tienen mayor apoyo entre los entrevistados de la Muestra Especial 2019 son la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las curules especiales reservadas en el Congreso para las regiones más afectadas por el conflicto.⁷ Estos aspectos son apoyados por aproximadamente 7 de cada 10 entrevistados. Por su parte, los programas de sustitución de cultivos ilícitos son apoyados por cerca del 60% de los entrevistados. En cambio, el apoyo a la participación de excombatientes de las FARC en elecciones es sustancialmente más bajo, pues apenas 2 de cada 10 entrevistados dice apoyar esta medida del Acuerdo de Paz.

7. A pesar de ser uno de los componentes más visibles del Acuerdo, las curules de paz no fueron aprobadas por el Congreso de la República a finales de 2017. Como lo documentó La Silla Vacía, los sectores conservadores, en cabeza del Centro Democrático, se opusieron al proyecto por posibles inconvenientes que veían en la norma, especialmente por los lugares a los que se reservarían las curules y los actores ilegales que controlaban estos mismos (Duque, 2017).

El apoyo a estos aspectos contenidos en el Acuerdo de Paz no es homogéneo en los diferentes tipos de municipio. Por ejemplo, los municipios más expuestos a la violencia y de menor capacidad estatal apoyan más la implementación de los PDET (77%) que los municipios menos expuestos a la violencia y con mayor capacidad estatal (71%). Asimismo, en el caso de las curules para las regiones más afectadas por el conflicto, los entrevistados de los municipios NO-PDET con mayor capacidad estatal apoyan significativamente menos esta política (68%), en comparación con los entrevistados en el resto de los municipios (75%). En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, la proporción de entrevistados que la apoya en los municipios PDET y de mayor capacidad estatal es mayor (67.8%), con respecto al resto de municipios, aunque esta diferencia no es significativa con respecto a los municipios PDET de menor capacidad estatal. Finalmente, vemos que en los municipios PDET de menor capacidad estatal hay un apoyo significativamente más alto —aunque no mayoritario— a la participación política de las FARC (28%) que en los otros tipos de municipio.

Los municipios más expuestos a la violencia y de menor capacidad estatal apoyan más la implementación de los PDET [77%] que los municipios menos expuestos a la violencia y con mayor capacidad estatal [71%]

Gráfica 10. Apoyo a los componentes del Acuerdo de Paz



COLPACT22. Que se implementen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las regiones más afectadas por el conflicto. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPACT8. Que se reserven curules del Congreso para las regiones más afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor representación en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPACT19N. Que se desarrollen programas de sustitución de cultivos para enfrentar la producción de drogas en el país ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLESPA2AN. Que los excombatientes desmovilizados de las FARC presenten candidatas a elecciones. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

De los componentes del Acuerdo de Paz, la incorporación política de los antiguos insurgentes, a pesar de su bajo apoyo popular, es uno de los aspectos más importantes pues los acuerdos de paz buscan justamente ofrecer un espacio político a los grupos que se oponían violentamente al Estado. Para entender los factores asociados con este aspecto del Acuerdo, presentamos un modelo de regresión donde la variable dependiente es apoyar o no la participación en política de las FARC y las variables independientes de interés son: el haber sido víctima del conflicto, la cercanía con el Centro Democrático, la tolerancia política, el apoyo a la democracia, la edad, el género, el nivel educativo y la zona de residencia de los entrevistados. También se incluyeron variables dicotómicas que capturan si la persona reside en un municipio PDET y si el municipio es de mayor capacidad estatal. La Tabla 1 muestra una síntesis de los resultados del análisis estadístico, el modelo completo se presenta en el apéndice de este informe.

Tabla 1. Determinantes del apoyo a la participación política de las FARC (modelo logit)

Variables	Apoyo a la participación política de las farc
Víctima	
Cercanía al Centro Democrático	-
Tolerancia política	+
Apoyo a la democracia	+
Edad	+
Mujer	-
Nivel educativo	+
Zona urbana	
PDET	
Mayor capacidad estatal	-
N	3,666

En primer lugar, llama la atención que las variables que capturan las experiencias de victimización y si el entrevistado vive en un municipio PDET no son significativas. Es decir, el haber sido víctima del conflicto o vivir en municipios con altos niveles de exposición a la violencia no afecta los niveles de apoyo a la participación política de las FARC. Estos resultados podrían parecer contraintuitivos, pues en la literatura comparada se ha argumentado que las experiencias de guerra podrían reforzar las divisiones entre grupos y promover sentimientos de rechazo hacia individuos que hicieron parte de experiencias pasadas de violencia (Bauer *et al.*, 2016; Balcells, 2012; Grossman *et al.*, 2015). No obstante, en el caso colombiano esta relación no parece darse pues las experiencias de guerra no se relacionan con un menor o mayor apoyo a la participación política de los antiguos combatientes (García-Sánchez y Plata, 2020).

En cambio, la variable que captura si el entrevistado reside en un municipio con mayor capacidad estatal es significativa y tiene signo negativo. Aunque se requieren análisis más profundos para entender de qué manera la capacidad estatal afecta las opiniones de los entrevistados frente a la participación política de un grupo armado, este resultado muestra que en municipios donde la presencia del Estado ha sido más fuerte es menos probable que los entrevistados apoyen la participación política del partido FARC, mientras que, en municipios donde la presencia del Estado ha sido históricamente menor, la población está más dispuesta a aceptar las concesiones derivadas del Acuerdo de Paz, como lo es la participación política de un grupo armado.

Otras variables correlacionadas con el apoyo a la participación política de la FARC son la tolerancia política y el apoyo a la democracia, ambas con signo positivo y significativo. Estos resultados coinciden con los hallazgos de García-Sánchez y Plata (s.f), quienes encuentran que los ciudadanos más comprometidos con la democracia tienen una mayor probabilidad de apoyar la participación política del antiguo grupo armado FARC. El nivel educativo y la edad también están asociadas positivamente con el apoyo a la participación política de la FARC. Posiblemente, el resultado de la variable edad muestra que las personas más viejas han vivido la guerra en Colombia durante un periodo más largo de tiempo, en comparación con la población joven, y por esta razón creen que es más conveniente tener a las FARC participando en política que como una guerrilla. A su vez, la cercanía al Centro Democrático afecta negativamente la probabilidad de que los entrevistados estén de acuerdo con que los excombatientes desmovilizados de las FARC presenten candidatos a elecciones. Este resultado no es sorprendente, dado que este partido ha protagonizado, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe,

una férrea oposición al Acuerdo de Paz y a su implementación, y un rechazo a los miembros de la antigua guerrilla. Este último resultado va en la línea de investigaciones recientes que muestran la influencia de las élites políticas en las actitudes hacia la paz en Colombia (Matanock y García-Sánchez, 2017).

Los ciudadanos más comprometidos con la democracia tienen una mayor probabilidad de apoyar la participación política del antiguo grupo armado FARC

2.4. Opiniones sobre la implementación del Acuerdo y confianza en FARC

Teniendo en cuenta que han pasado tres años desde la firma del Acuerdo de Paz, el Observatorio de la Democracia indagó por las opiniones de los ciudadanos respecto a su implementación. Específicamente indagamos por: las expectativas de los entrevistados respecto a la implementación del Acuerdo, las opiniones sobre su cumplimiento, las percepciones de los entrevistados sobre los actores (individuales o colectivos) que contribuyen al cumplimiento del Acuerdo de Paz, y finalmente exploramos la confianza en el partido FARC.

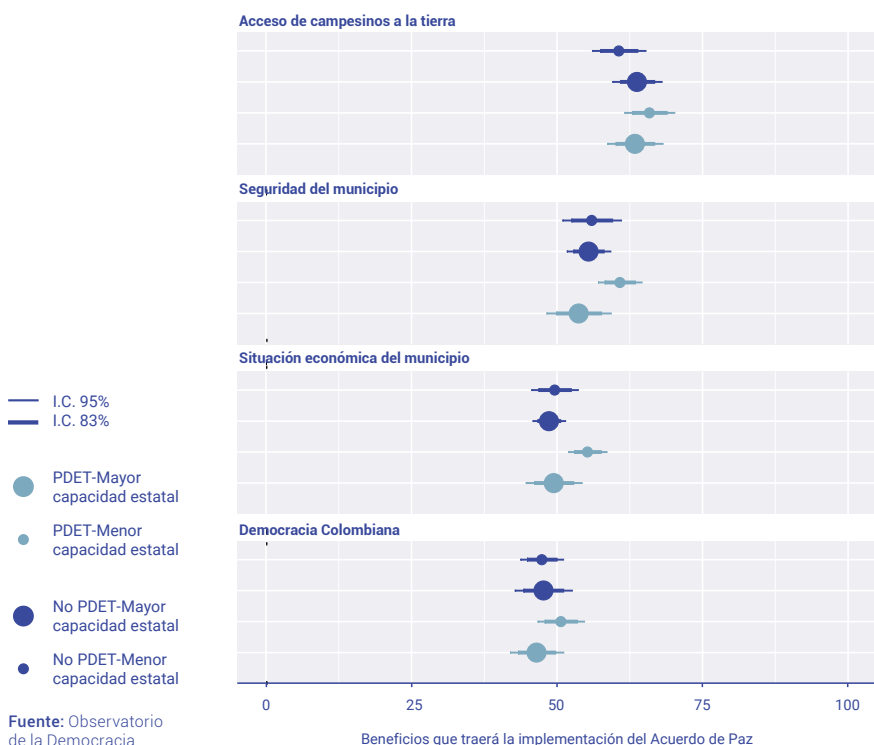
La implementación del Acuerdo de Paz ha generado expectativas en la mayoría de los entrevistados del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto*, particularmente respecto a los temas de acceso a la tierra por parte de los campesinos y la seguridad a nivel local. El 64% de los entrevistados espera que con el Acuerdo haya acceso a la tierra y el 57% espera mejoras en materia de seguridad. Por su parte, más o menos la mitad de los entrevistados tiene expectativas respecto a mejoras en la situación económica del municipio y en la calidad de la democracia colombiana (Gráfica 11). Este contraste en las opiniones de los entrevistados indica que los temas que generan más expectativas en la población son aquellos que impactan de manera más directa sus condiciones de vida, como lo son en este caso el acceso a la tierra y la seguridad del municipio, en contraposición a la democracia colombiana, cuyos beneficios podrían ser percibidos por los entrevistados como más indirectos o menos vinculados con la vida cotidiana.

Al comparar las expectativas de los entrevistados entre los distintos tipos de municipio del estudio, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los municipios PDET con menor capacidad estatal y el resto de los municipios, particularmente respecto a los temas de seguridad y situación económica del municipio. Como lo muestra la Gráfica 11, mientras que en los municipios PDET de menor capacidad estatal el 61% de entrevistados espera que la implementación del Acuerdo mejore la seguridad y el 55% espera que mejore la situación económica, en el resto de los municipios una menor proporción de entrevistados esperan lo mismo frente a

estos dos temas (55% y 49%, respectivamente). Por su parte, no hay diferencias estadísticamente significativas, entre tipos de municipio, en los temas de democracia y acceso de los campesinos a la tierra.

Los temas que generan más expectativas en la población son aquellos que impactan de manera más directa sus condiciones de vida, como lo son en este caso el acceso a la tierra y la seguridad del municipio

Gráfica 11. Expectativas sobre la implementación del Acuerdo de Paz



COLPROPAZ13C. La implementación del acuerdo fortalecerá la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

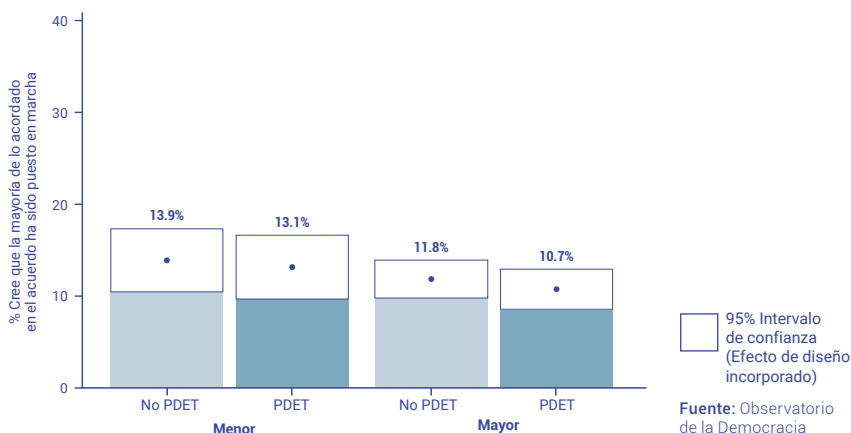
COLPROPAZ13J. La implementación del acuerdo mejorará la seguridad en su municipio. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPROPAZ13K. La implementación del acuerdo mejorará la situación económica de su municipio. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPROPAZ13M. La implementación del acuerdo mejorará el acceso de los campesinos a la tierra. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

Las altas expectativas de los entrevistados sobre los beneficios que traerá la implementación del Acuerdo de Paz contrastan con la opinión de los entrevistados respecto al avance de dicho proceso. Como lo muestra la Gráfica 12, la percepción de que la mayoría de lo acordado con las FARC ha sido puesto en marcha es bastante baja. Aproximadamente 1 de cada 10 entrevistados considera que se ha avanzado en la implementación de la mayoría de los puntos del Acuerdo, sin importar el tipo de municipio.

Gráfica 12. Percepción acerca de la implementación del Acuerdo de Paz



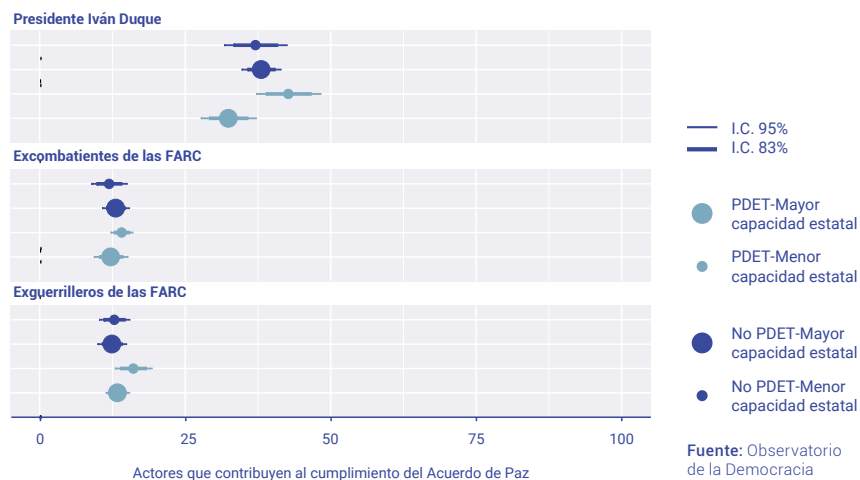
COLPACTPR. Desde su punto de vista ¿qué tanto de lo acordado entre el gobierno y las FARC en el acuerdo de paz ha sido puesto en marcha?

Otro aspecto que exploró el estudio especial 2019 del Observatorio de la Democracia tiene que ver con las percepciones de los entrevistados sobre el grado de contribución al cumplimiento del Acuerdo de Paz de algunos actores individuales o colectivos. Específicamente indagamos por la contribución del Presidente Duque y los miembros de la FARC (excomandantes y exguerrilleros rasos). La Gráfica 13 muestra que, en términos generales, un porcentaje pequeño de entrevistados cree que estos actores han contribuido al cumplimiento del Acuerdo. Sin embargo, al comparar las percepciones de los entrevistados por cada tipo de actor, se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Las percepciones respecto a la contribución de los excomandantes y de los exguerrilleros rasos de las FARC son significativamente más bajas (13% y 14%, respectivamente, sin importar el tipo de municipio), en comparación con la percepción acerca de la contribución del Presidente Duque (38%).

Es importante destacar que la percepción acerca de la contribución del Presidente varía entre los diferentes tipos de municipio del estudio. Como lo muestra la Gráfica 13, mientras que en los municipios PDET de menor capacidad estatal 4 de cada 10 entrevistados percibe que el Presidente Iván Duque contribuye al cumplimiento de lo pactado, en los municipios PDET de mayor capacidad estatal 3 de cada 10 así lo perciben. Esta diferencia entre municipios PDET de mayor y menor capacidad estatal podría interpretarse de dos maneras. Por un lado, posiblemente porque el Gobierno nacional ha concentrado sus esfuerzos en priorizar la implementación del Acuerdo de Paz en los municipios con mayor debilidad estatal, y por este motivo la población en los municipios PDET de menor capacidad estatal perciben una mayor contribución del Presidente Duque. También es posible que, dadas las condiciones más precarias en los municipios de menor capacidad estatal, los entrevistados en estos municipios perciban cambios más pronunciados como resultado de la implementación del Acuerdo.

Mientras que en los municipios PDET de menor capacidad estatal 4 de cada 10 entrevistados perciben que el **Presidente Iván Duque** contribuye al cumplimiento de lo pactado, en los municipios PDET de mayor capacidad estatal 3 de cada 10 así lo perciben

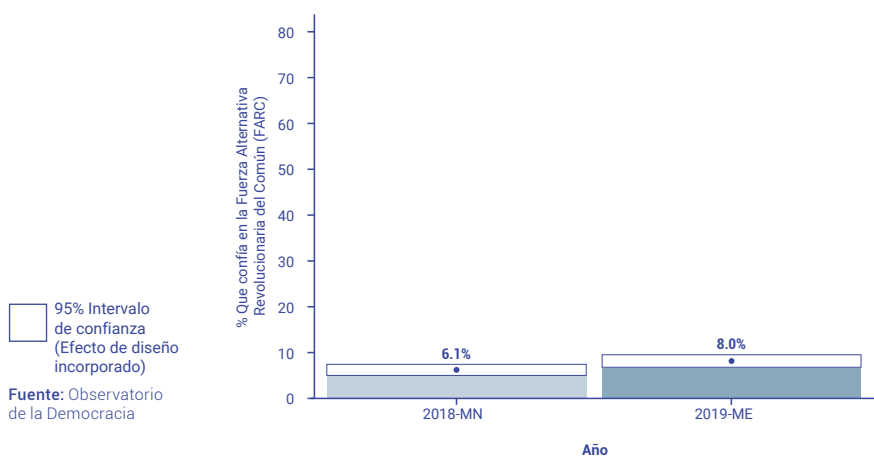
Gráfica 13. Percepciones con respecto a la contribución al cumplimiento del Acuerdo de Paz



COLPAZ30. Quisiera que me dijera qué tanto están contribuyendo los siguientes actores al cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC.

Por último, el Observatorio de la Democracia indagó por la confianza en el partido político fundado tras la desmovilización de la guerrilla: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Como lo muestra la Gráfica 14, el 8% de los entrevistados en el estudio especial 2019 confía en este partido. Este porcentaje es mayor, aunque no estadísticamente diferente, al que se registró en la Muestra Nacional de 2018 (6.1%). Estos resultados dan cuenta de la baja confianza de los ciudadanos en la FARC, incluso después de la firma del Acuerdo y la reincorporación a la vida civil de la mayoría de los miembros de la antigua guerrilla.

Gráfica 14. Confianza en la FARC



COLB60N. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)?

En síntesis, los resultados presentados en esta sección sugieren que la percepción de los entrevistados de que los excomandantes y exguerrilleros de las FARC están contribuyendo poco al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo puede estar asociada a los bajos niveles de confianza en esta organización. Desconfianza que, según la información cualitativa presentada en el informe Paz, Posconflicto y Reconciliación, publicado por el Observatorio de la Democracia en 2018, obedece al hecho de que los ciudadanos manifiestan inconformidad y temor frente a la posibilidad de ser gobernados por miembros de la antigua guerrilla. Además, varios participantes de los grupos focales de 2018 expresaron que fue un desacierto haber conservado las siglas del antiguo grupo armado luego de

su transformación política, pues esto hace que los ciudadanos no perciban diferencias entre las FARC como grupo armado y como actor político.

La percepción de los entrevistados de que los excomandantes y exguerrilleros de las FARC están contribuyendo poco al cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo puede estar asociada a los bajos niveles de confianza en esta organización

2.5. Conocimiento sobre el Acuerdo de Paz

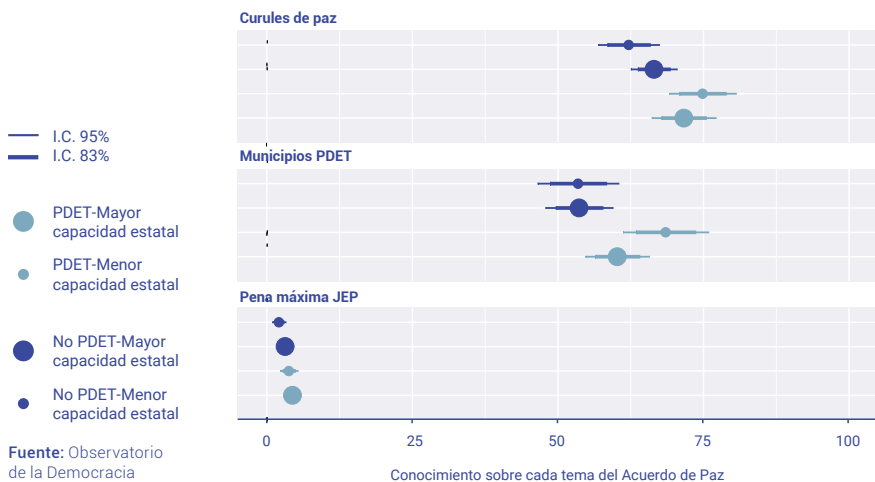
En el contexto de implementación del Acuerdo de Paz es importante tener una perspectiva sobre qué tan familiarizados están los ciudadanos con los componentes de lo acordado. Por esto, el Observatorio de la Democracia también exploró el nivel de conocimiento de los entrevistados sobre temas relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el desarrollo integral y la participación política. Preguntamos por la pena máxima para quienes se acojan a la justicia transicional, si el municipio del encuestado es parte de los PDET y si las curules de paz hacían parte de lo acordado en La Habana. En primer lugar, hay mucho desconocimiento respecto a la justicia transicional, dado que un porcentaje muy bajo de entrevistados conoce la duración de pena máxima, en años, a la que está sujeto un excombatiente que se acoja a la JEP (4%). Aún si se amplía el intervalo de respuestas acertadas en la pregunta sobre la JEP, esto es, entre 6 y 10 años (siendo 8 la respuesta correcta), el porcentaje de entrevistados que tiene conocimiento sobre la pena máxima en la JEP sigue siendo bajo (8%). En contraste, hay mayor conocimiento sobre las curules de paz y los municipios PDET. Aproximadamente el 70% sabe que las curules de paz fueron incluidas en el Acuerdo, a pesar de que no se implementaron, y el 60% está al tanto si su municipio es o no parte de los PDET. Esta diferencia no es sorprendente debido a que la pregunta sobre justicia transicional era claramente más puntual y hasta cierto punto especializada. Adicionalmente, los ciudadanos pueden estar más al tanto de las curules de paz y de los PDET debido a que estos elementos los afectan de manera más directa.

Como lo muestra la Gráfica 15, hay diferencias significativas en el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre el Acuerdo entre los distintos tipos de municipio en los que se llevó a cabo el estudio. En general, los residentes en municipios PDET están más informados sobre lo acordado que los de los NO-PDET, particularmente los ciudadanos residentes en los PDET de menor capacidad estatal. Por ejemplo, el 73% de los residentes en los PDET sabe que las curules de paz hacen parte de lo acordado con las FARC; este porcentaje cae al 65% en los NO-PDET. En cuanto a la pertenencia o no del municipio a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, en los municipios PDET de menor capacidad 7 de cada 10 entrevistado

está al tanto de que el municipio pertenece a los PDET; en los PDET de mayor capacidad menos ciudadanos (60.2%) están al tanto de esta pertenencia. En los municipios NO-PDET solo la mitad de los entrevistados tiene claro que su municipio no hace parte de éstos. Este resultado revela que en las zonas que se ven directamente beneficiadas por algunos de los componentes del Acuerdo, los ciudadanos tienen un mayor incentivo para informarse sobre el mismo. El impacto de la implementación de los compromisos del Acuerdo tiene mucho más efecto en la vida cotidiana de los PDET de menor capacidad, tal vez eso lleva a que los ciudadanos de esas zonas estén más informados sobre estos compromisos.

Hay mucho desconocimiento respecto a la justicia transicional, dado que un porcentaje muy bajo de entrevistados conoce la duración de pena máxima, en años, a la que está sujeto un excombatiente que se acoja a la JEP [4%]

Gráfica 15. Conocimiento sobre el Acuerdo de Paz



COLG11. ¿La creación de 16 curules para las zonas más afectadas por el conflicto hace parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz con las FARC?

COLG10. ¿Su municipio hace parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, también conocidos como PDETS?

COLG8. ¿Cuál es la pena máxima en años para un excombatiente desmovilizado de las FARC que se acoja a la Justicia Especial de Paz?

2.6. Conclusiones

Este capítulo permite concluir que la mayoría de los habitantes en los municipios de la Muestra Especial 2019 apoya la salida negociada al conflicto con las guerrillas, pero apoyan menos las manifestaciones específicas de una salida negociada: el Acuerdo de Paz con las FARC y los componentes de este mismo. Sin embargo, se encontró que la mayoría de entrevistados tiene altas expectativas con respecto a las mejoras que traerá la implementación del Acuerdo, siendo el acceso a la tierra por parte de los campesinos (64%) y la seguridad local (57%) los temas que más expectativas generan entre los entrevistados. También es importante destacar la heterogeneidad en las opiniones de los entrevistados al comparar distintos tipos de municipio. Por un lado, el apoyo de los entrevistados, tanto a la salida negociada como al Acuerdo de Paz, es mayor en los municipios con niveles más altos de exposición a la violencia y con menor capacidad estatal, en comparación al resto de los municipios del estudio. Igualmente, en estos municipios una mayor proporción de entrevistados espera que la implementación del Acuerdo mejore la seguridad y la situación económica de su municipio.

El estudio también encontró una importante variación en los niveles de conocimiento de los entrevistados sobre el contenido del Acuerdo de Paz. El aspecto del Acuerdo sobre el que hay mayor desconocimiento es la justicia transicional, independientemente del tipo de municipio. Hay mucho más conocimiento sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y sobre las curules de paz, siendo los residentes de los municipios PDET de menor capacidad estatal los más informados sobre estos temas.

En cuanto a la participación política de exmiembros desmovilizados de las FARC, aspecto del Acuerdo que tiene menores niveles de apoyo entre la ciudadanía, a través de un análisis de regresión se encontró que, en comparación con municipios de mayor capacidad estatal, hay mayores niveles de aceptación a la participación política de la FARC en municipios de menor capacidad estatal. En cambio, las experiencias de victimización de los entrevistados y el hecho de residir en un municipio PDET no tienen ningún efecto sobre la probabilidad de apoyar la participación política del antiguo grupo armado.

Finalmente, la información presentada en el capítulo respecto a la percepción de los ciudadanos sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Paz permite concluir que las expectativas que generó el Acuerdo en la mayoría de los entrevistados, particularmente frente a los temas de acceso a la tierra y seguridad, se están viendo frustradas. Esto último porque las altas expectativas frente a estos temas contrastan con la opinión de los entrevistados acerca del estado del cumplimiento del Acuerdo, dado que solo 1 de cada 10 entrevistados considera que se están cumpliendo la mayoría de los puntos acordados. Además, aunque la proporción de entrevistados que considera que el presidente Duque contribuye a la implementación del Acuerdo es baja (4 de cada 10), la percepción de cumplimiento por parte de las FARC, tanto excomandantes como exguerrilleros, es aún más baja (1 de cada 10). Posiblemente, esta percepción negativa acerca del rol de las FARC en el posconflicto es afectada por la desconfianza que despierta, pues apenas el 8% de los entrevistados confían en esta organización.

El apoyo de los entrevistados, tanto a la salida negociada como al Acuerdo de Paz, es mayor en los municipios con niveles más altos de exposición a la violencia y con menor capacidad estatal, en comparación al resto de los municipios del estudio

3. Reconciliación

3.1. Introducción

En el actual contexto del país y con el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, es importante tener en cuenta las actitudes de los entrevistados de la Muestra Especial frente a la reconciliación. Por esta razón, el Observatorio de la Democracia indagó sobre temas de perdón y reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes desmovilizados de grupos armados.

Para este propósito, se adoptó una conceptualización de reconciliación proveniente del campo de la psicología social. De acuerdo con Nadler y Shnabel (2015), una sociedad reconciliada se caracteriza por la existencia de relaciones positivas y confiables entre antiguos adversarios, quienes gozan de identidades sociales seguras e interactúan en un ambiente social equitativo. Para alcanzar este estado, es necesario que una sociedad avance en tres ámbitos que son interdependientes: estructural, relacional e identitario. La dimensión estructural se refiere a la evolución hacia una sociedad equitativa. Esta dimensión es especialmente relevante en situaciones donde las partes del conflicto pertenecen a un mismo grupo social, como en el caso colombiano. La dimensión relacional está enfocada en la confianza interpersonal y en las relaciones positivas entre los ciudadanos, como elemento clave para la reconciliación. Por último, la dimensión de reconciliación asociada a la identidad tiene que ver con la superación de las etiquetas y los estigmas poblacionales derivados de la guerra, tales como la condición de víctima o la de victimario.

Este capítulo del informe indaga por la disposición de los entrevistados en los municipios del estudio hacia el perdón y la reconciliación. En la segunda sección, se explora la dimensión estructural de la reconciliación, a partir del análisis de la percepción ciudadana sobre las acciones que contribuyen a la reconciliación en el marco del posconflicto. En particular, se estudian las opiniones de los entrevistados acerca de la contribución de distintos componentes del Acuerdo a la reconciliación, como la indemnización de las víctimas, el establecimiento de la verdad y que los responsables de crímenes atroces pidan perdón. La siguiente sección profundiza acerca de la dimensión relacional de la reconciliación, particularmente en la disposición de los entrevistados a convivir con desmovilizados de las FARC. La dimensión identitaria no se aborda en este informe, pero los interesados pueden indagar por las etiquetas positivas

y negativas que los ciudadanos atribuyen a los excombatientes de grupos armados en pasados informes del Observatorio de la Democracia.⁸

Por último, en la quinta sección se presentan los resultados de un ejercicio especial que desarrolló el Observatorio de la Democracia como parte del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto*, con el objetivo de entender los efectos psicológicos de la guerra y su incidencia sobre las actitudes de reconciliación. Esto último porque la salud mental de la población afectada por el conflicto es un tema de interés tanto en el campo de la política pública (INS, 2018) como en la academia (Moya, 2018; Moya y Carter, 2019). Además, recientemente se ha dado una discusión académica acerca del impacto de la salud mental en las actitudes de reconciliación y las preferencias políticas de las víctimas.

Se estudian las opiniones de los entrevistados acerca de la contribución de distintos componentes del Acuerdo a la reconciliación, como la indemnización de las víctimas, el establecimiento de la verdad y que los responsables de crímenes atroces pidan perdón

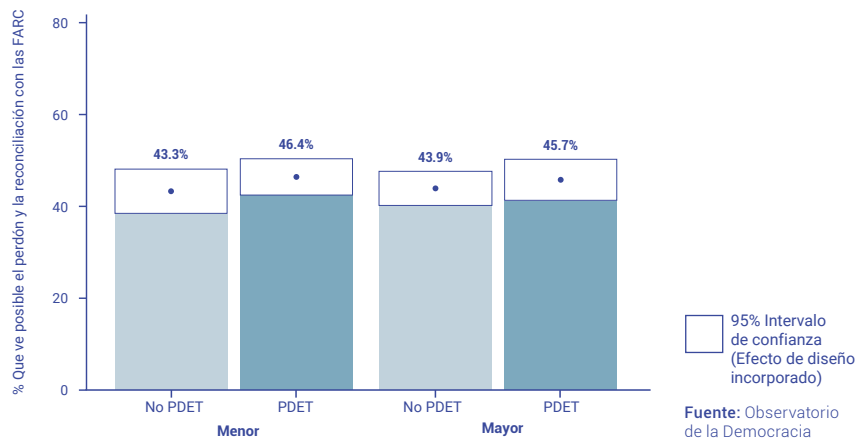
8. <https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/datos/>

3.2. Actitudes hacia el perdón y la reconciliación

El porcentaje de entrevistados del estudio especial 2019 que ve posible el perdón y la reconciliación entre los excombatientes de las FARC y los ciudadanos refleja una división en la opinión pública sobre este tema. Como lo muestra la Gráfica 16, entre el 43% y el 46% de los entrevistados ve posible el perdón y la reconciliación entre los excombatientes y los ciudadanos, y no hay diferencias estadísticamente significativas por tipo de municipio. Este resultado evidencia que la capacidad estatal del municipio y su nivel de exposición al conflicto no afecta la creencia de los entrevistados de que es posible el perdón y la reconciliación. Es importante resaltar que estas actitudes son menos favorables que las encontradas en los últimos dos estudios realizados por el Observatorio de la Democracia; el Barómetro de las Américas 2018 (muestra nacional), en el que el 51% de entrevistados veían posible el perdón y la reconciliación con las FARC, y Colombia Rural del Posconflicto de 2017, muestra especial compuesta por municipios PDET, en la que el 67% de los entrevistados respondió positivamente esta pregunta. Estas discrepancias pueden obedecer a las distintas características de cada muestra o a una posible reducción de la disposición de los colombianos al perdón y la reconciliación.

Entre el 43% y el 46% de los entrevistados ve posible el perdón y la reconciliación entre los excombatientes y los ciudadanos, y no hay diferencias estadísticamente significativas por tipo de municipio

Gráfica 16. Perdón y reconciliación con FARC



COLPAZ6A. ¿Y usted ve posible, sí o no, el perdón y la reconciliación de los ciudadanos con los excombatientes desmovilizados de las FARC?

3.3. Contribución de componentes del Acuerdo de Paz a la reconciliación

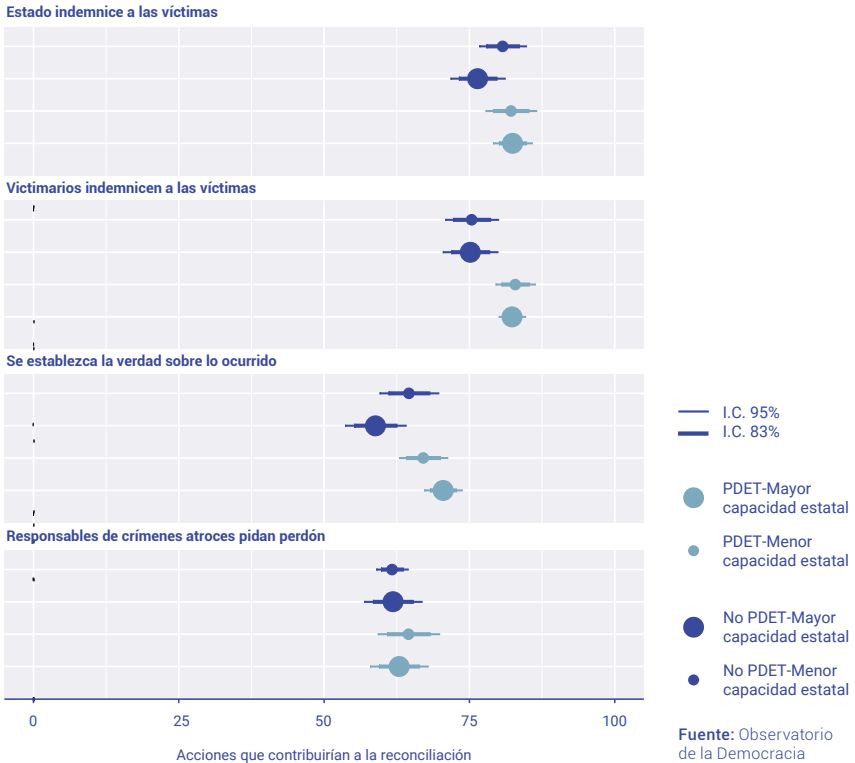
Con el fin de entender mejor las actitudes de los ciudadanos frente a la reconciliación, el Observatorio de la Democracia preguntó a los entrevistados de la Muestra Especial sus opiniones acerca de la contribución a la reconciliación de distintos aspectos contemplados en el Acuerdo de Paz. Según los entrevistados, la acción que más contribuye a la reconciliación es la indemnización a las víctimas, tanto por parte del Estado (80%) como de los victimarios (79%). En cambio, una menor proporción de entrevistados cree que contribuiría a la reconciliación el establecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto (65%) y que los responsables de crímenes atroces pidan perdón a las víctimas (63%).

Las opiniones de los entrevistados acerca de la contribución a la reconciliación de acciones como que el Estado indemnice a las víctimas o que los responsables de crímenes atroces pidan perdón, son homogéneas entre todos los tipos de municipio del estudio. En cambio, se observan algunas diferencias significativas entre los tipos de municipio en la opinión de los entrevistados respecto a la contribución a la reconciliación de acciones como la indemnización por parte de los victimarios y el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido. Por ejemplo, la Gráfica 17 muestra que en los municipios PDET, sin importar el nivel de capacidad estatal, una mayor proporción de ciudadanos considera que contribuiría a la reconciliación que los victimarios indemnicen a las víctimas (83%), en comparación con los municipios NO-PDET, en los que aproximadamente el 75% de los entrevistados cree lo mismo. De igual forma, aunque en todos los municipios la mayoría de los entrevistados considera que el establecimiento de la verdad contribuiría a la reconciliación, en los municipios PDET hay una mayor proporción de ciudadanos (7 de cada 10) que en los municipios NO-PDET con mayor capacidad estatal que así lo cree (6 de cada 10). Resulta interesante que en las zonas del país más golpeadas por la guerra la indemnización por parte de los victimarios y la verdad sobre los hechos ocurridos tengan mayor peso en la visión que tiene la población acerca de la reconciliación. Es posible que, dada la ocurrencia de una mayor cantidad de hechos victimizantes en esas zonas, sumada a una

presencia más fuerte de grupos armados, esta diferencia en la visión de reconciliación sea un reflejo de la mayor demanda por indemnización y verdad entre la población que vive en esas zonas.

Según los entrevistados, la acción que más contribuye a la reconciliación es la indemnización a las víctimas, tanto por parte del Estado [80%] como de los victimarios [79%]

Gráfica 17. Acciones que contribuirían a reconciliación



Ahora le voy a leer una serie de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios.

COLRECON19B. Que los responsables de crímenes atroces pidan perdón a las víctimas.

COLRECON19C. Que el Estado indemnice a las víctimas del conflicto armado.

COLRECON20B. Que se establezca la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

COLRECON20C. Que los victimarios indemnicen a las víctimas del conflicto armado.

3.4. Convivencia con excombatientes

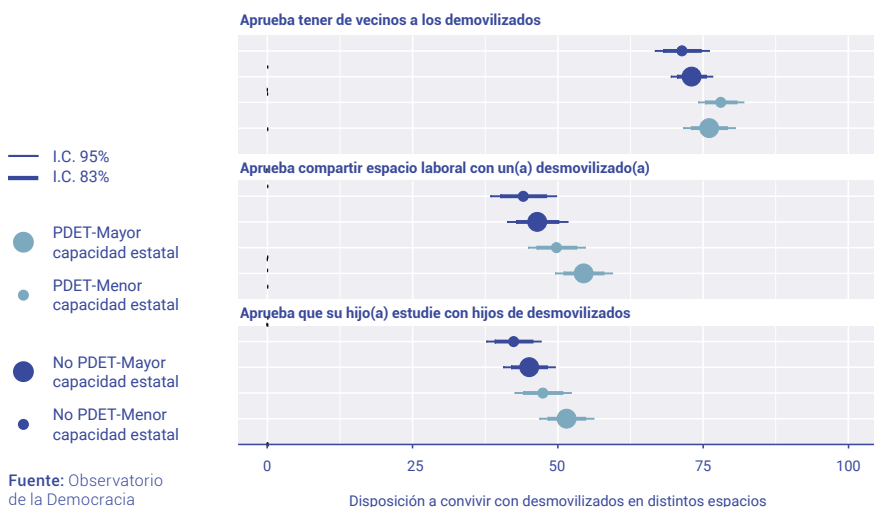
La reincorporación de los excombatientes de las FARC puede pensarse de varias formas: desde la simple coexistencia en una misma zona a la interacción en espacios más íntimos. Al plantear esas diversas posibilidades de convivencia con los desmovilizados se encontraron diferencias importantes frente a qué tan dispuestos están los entrevistados a la convivencia con los excombatientes y sus familias. Una proporción significativamente mayor de entrevistados está dispuesta a tener de vecinos a los desmovilizados (74%), en comparación a la proporción de entrevistados que aprueba compartir su espacio laboral con excombatientes (48%) o que en el colegio de sus hijos estudien hijos de desmovilizados (45%). Es decir, la disposición de los entrevistados a compartir espacios de la vida cotidiana con antiguos miembros de grupos armados tiende a reducirse a medida que se pregunta por interacciones más personales.

Hay diferencias significativas en las actitudes de convivencia de los entrevistados al comparar los municipios PDET y NO-PDET. Como se ve en la Gráfica 18, si bien la mayoría de entrevistados está dispuesto a tener como vecino a un desmovilizado de grupos armados, en los municipios PDET una proporción significativamente mayor de entrevistados aceptaría desmovilizados en su vecindario (77%), en comparación con los municipios NO-PDET (72%), sin importar su nivel de capacidad estatal. De igual forma, la aceptación de los desmovilizados como compañeros de trabajo es significativamente mayor en los municipios PDET (52%), frente a los municipios NO-PDET, tanto de menor como de mayor capacidad estatal (45%). Finalmente, en el ámbito que tiene que ver con sus hijos, los entrevistados de los municipios PDET están más dispuestos a convivir con desmovilizados o sus hijos (50%), que los entrevistados de los municipios NO-PDET con menor y mayor capacidad estatal (43%, en promedio).

Es posible que la mayor disposición de los entrevistados en municipios PDET se deba, en parte, a la exposición a la violencia que han vivido estos municipios, en comparación con los NO-PDET. Un estudio reciente en Colombia encontró que en las regiones más golpeadas por la violencia del conflicto las personas están más dispuestas a hacer sacrificios para reducir la violencia, como

convivir con desmovilizados, pese a no ser optimistas frente a los procesos de desmovilización (Fergusson *et al.*, 2018). Otro factor que podría incidir en la disposición de los entrevistados en municipios PDET, de acuerdo con la literatura que ha estudiado el tema, es la resiliencia de las víctimas, entendida como la capacidad de lidiar con la adversidad. De igual manera, la proximidad social entre las víctimas y los excombatientes también podría explicar por qué en municipios PDET hay mayor disposición a convivir con excombatientes, pues al tratarse de conocidos, vecinos, o incluso familiares, es probable que las personas estén más dispuestas a convivir con desmovilizados (Téllez, 2018; Nussio, Rettberg, & Ugarriza, 2015).

Gráfica 18. Disposición a convivir con desmovilizados en distintos espacios



COLDIS35F. Pensando en los desmovilizados de los grupos armados, por favor dígame si no tiene problema con tenerlos de vecinos.

COLRECON7N. Que en la empresa o lugar donde usted trabaje le dieran empleo a un desmovilizado o desmovilizada de las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?

COLRECON18. Que en el colegio de su hija o hijo estudien hijos de excombatientes desmovilizados de grupos armados ilegales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?

Una proporción significativamente mayor de entrevistados está **dispuesta a tener de vecinos a los desmovilizados [74%]**, en comparación a la proporción de entrevistados que **aprueba compartir su espacio laboral con excombatientes [48%]**

3.5. Salud mental y actitudes de reconciliación

En esta sección presentamos resultados de un ejercicio especial que desarrolló el Observatorio de la Democracia como parte del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto*, con el objetivo de entender los efectos psicológicos de la guerra y su incidencia sobre las actitudes de reconciliación. Esto último porque la salud mental de la población afectada por el conflicto es un tema de interés tanto en el campo de la política pública (INS, 2018) como en la academia (Moya, 2018; Moya y Carter, 2019). Además, recientemente se ha dado una discusión académica acerca del impacto de la salud mental en las actitudes de reconciliación y las preferencias políticas de las víctimas.

Por un lado, algunos estudios sugieren que ser víctima de la violencia está correlacionado con una mayor probabilidad de padecer traumas psicológicos, los cuales estarían asociados con una menor disposición a la reconciliación.⁹ En cambio, la literatura de la resiliencia resalta la capacidad de las víctimas para lidiar con la adversidad. Estudios en este campo argumentan que, tras experiencias traumáticas, las personas experimentan un proceso de crecimiento personal, denominado "crecimiento postraumático", que se manifiesta en mayor apreciación por la vida, relaciones interpersonales más cálidas e íntimas, un sentido mayor de fortaleza personal, reconocimiento de nuevas posibilidades en su vida y desarrollo espiritual.¹⁰ Aunque los estudios respecto a este tema en el contexto colombiano no son completamente comparables, ni se han medido los mecanismos psicológicos que explican la relación entre la exposición a la violencia y las actitudes de reconciliación, hay evidencia tanto a favor de la hipótesis de que los traumas psicológicos podrían afectar negativamente la disposición a la reconciliación (Fergusson *et al.*, 2018), como a favor de la resiliencia,

9. Por ejemplo, a partir de un estudio desarrollado en Israel, Canetti-Nisim *et al.* (2009) proponen un modelo de extremismo político basado en el estrés, según el cual la exposición al terrorismo, el malestar psicológico y las percepciones de amenaza frente a un ataque terrorista predicen actitudes excluyentes de los judíos hacia los palestinos.

10. En esta línea, estudios en Sierra Leona, Indonesia, Israel, Burundi, Nepal, Uganda, entre otros países, han encontrado que los traumas vinculados a la violencia se asocian positivamente con variables que podrían favorecer la reconciliación, como lo son la participación en organizaciones comunitarias (Blattman, 2009) y el comportamiento cooperativo y generoso en experimentos económicos (Bauer *et al.*, 2016).

o efecto "crecimiento postraumático" (Nussio, Rettberg, & Ugarriza, 2015; Krause, 2017; Téllez, 2018; Nussio, 2019).

Teniendo en cuenta esta discusión, el Observatorio de la Democracia desarrolló un ejercicio para medir los efectos de la victimización en el malestar psicológico y entender de qué manera la salud mental de los entrevistados incide sobre sus actitudes de reconciliación. En la encuesta del estudio especial 2019 se incluyó la traducción al español de la escala K6 de malestar psicológico inespecífico, la cual indaga por una serie de síntomas vinculados al malestar psicológico.¹¹ La escala fue desarrollada por el experto en psiquiatría epidemiológica y profesor de la escuela de medicina en la Universidad de Harvard Ronald Kessler, y ha sido reconocida internacionalmente por su brevedad, facilidad de aplicación y su confiabilidad estadística.¹² Es importante aclarar que, al ser no específica, la puntuación total de la escala K6 puede indicar el riesgo a padecer malestar psicológico, pero no especificar si se trata de uno u otro trastorno. En este sentido, esta medición difiere de la tradicionalmente usada en la literatura que estudia los efectos psicológicos de la guerra, principalmente basada en el estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Sin embargo, conscientes de esta divergencia frente a la literatura tradicional, el Observatorio de la Democracia optó por aplicar la escala K6 con el fin de estudiar el malestar psicológico y sus determinantes desde una perspectiva amplia. Además, por su brevedad y simplicidad, la escala K6 es adecuada para ser aplicada en el contexto de una encuesta, lo cual favorece la calidad de la información obtenida mediante su aplicación.

11. Para el desarrollo de la escala se adoptó la definición oficial de malestar psicológico del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (DHHS) del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con esta definición, una persona sufre de malestar psicológico si en algún momento durante el último año ha tenido un desorden mental, comportamental o emocional que sea diagnosticable según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM) y que genere deterioro funcional. El deterioro funcional se entiende como cualquier dificultad que interfiera o limite sustancialmente al menos uno de los siguientes aspectos principales de la vida: actividades cotidianas como comer, bañarse o vestirse; habilidades instrumentales de vida como mantener un hogar, manejar el dinero, hacer parte de una comunidad; la vida en familia; y el desempeño en contextos educativos (Kessler *et al.*, 2010).

12. La escala K6 ha sido traducida a más de 20 idiomas y su capacidad para detectar trastornos mentales ha sido validada en varias culturas y contextos (ver: https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/k6_scales.php). Como parte de la Encuesta Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), iniciativa de investigación internacional que busca evaluar los trastornos mentales de todo el mundo, la escala K6 fue aplicada en 28 países del mundo, incluyendo una muestra de 2381 colombianos (Kessler *et al.*, 2010).

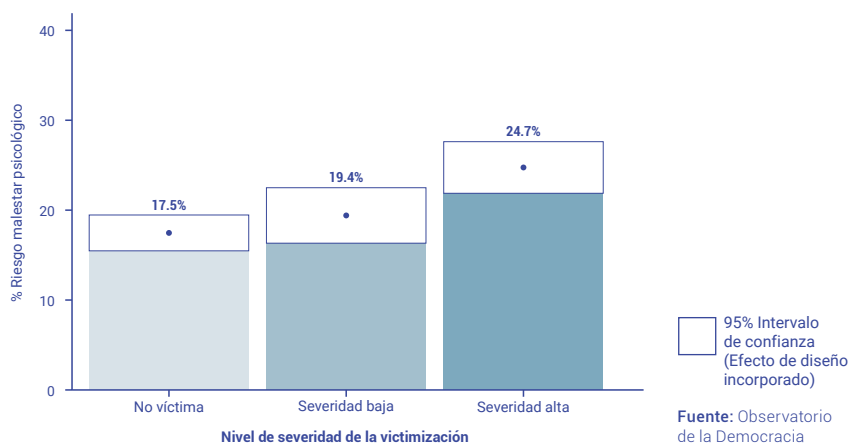
Los resultados de la escala de malestar psicológico K6 se presentan clasificando a los entrevistados según la severidad de la violencia a la que ha estado expuesta su familia, medida a través de la cantidad de hechos victimizantes reportados en la encuesta. Se clasificaron los entrevistados en tres grupos: los que no reportaron ningún hecho victimizante (no víctima); los que reportaron un hecho victimizante (severidad baja); y los que reportaron dos o más hechos victimizantes (severidad alta).¹³ En términos generales, se encontró que los síntomas del malestar psicológico aumentan a medida que los entrevistados han estado expuestos a una violencia más severa. Con base en el punto de corte de la escala K6 para detectar el riesgo de padecer malestar psicológico serio (Kessler *et al.*, 2010), la Gráfica 19 muestra que, cuando el hogar del entrevistado ha sufrido más de un hecho victimizante, el 25% de ellos está en riesgo de padecer malestar psicológico, proporción que es significativamente más alta que los casos en los que la familia solo ha vivido un hecho victimizante (19%) o ninguno (17%).

Adicionalmente, con el fin de entender con más detalles las maneras en las que la severidad de la violencia sufrida en la familia afecta la salud mental de las personas, el Observatorio de la Democracia comparó las respuestas de los entrevistados frente a los distintos síntomas de malestar psicológico por los que indaga la escala K6. La Gráfica 20 muestra la frecuencia con la que los entrevistados reportaron distintos síntomas de malestar psicológico en los últimos 30 días. Los datos se presentan desagregando por nivel de severidad de la violencia sufrida. Como lo muestra la gráfica, quienes han estado expuestos a una violencia más severa tienen mayor propensión a sentirse nerviosos (24%), inquietos o intranquilos (33%), deprimidos (20%) o que todo les costaba un gran esfuerzo (42%), en comparación con quienes reportaron uno o ningún hecho victimizante. Adicionalmente, el haber reportado al menos un hecho victimizante aumenta significativamente la proporción de entrevistados que en los últimos 30 días siempre o casi siempre se ha sentido sin esperanza (aproximadamente 28%) o deprimido (14% severidad baja; 20% severidad alta), en comparación con las personas cuya familia no ha sufrido ningún hecho victimizante (24% sin esperanza; 13% deprimido). Por último, también hay una diferencia significativa, aunque pequeña, entre los entrevistados que en el último mes se han sentido inútiles, siendo mayor cuando sus familias han estado expuestas a violencia de severidad alta (8%), en comparación con quienes no reportaron ningún hecho victimizante (6%).

13. Al igual que otros estudios sobre este tema (Moya and Carter, 2019; Moya, 2018), el punto de corte para diferenciar los entrevistados entre severidad alta y baja es la mediana en la distribución de los datos, que en este caso es un (1) hecho victimizante.

Cuando el hogar del entrevistado ha sufrido más de un **hecho victimizante**, el **25%** de ellos está en riesgo de padecer **malestar psicológico**, proporción significativamente más **alta que los casos** en los que la familia solo ha vivido un **hecho victimizante [19%] o ninguno [17%]**

Gráfica 19. Proporción de entrevistados con riesgo de malestar psicológico (escala K6), según severidad de la violencia sufrida en sus familias



COLEMOA. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia se sintió ...nervioso(a)?

COLEMOB. ...sin esperanza?

COLEMOC. ...inquieto(a) o intranquilo(a)?

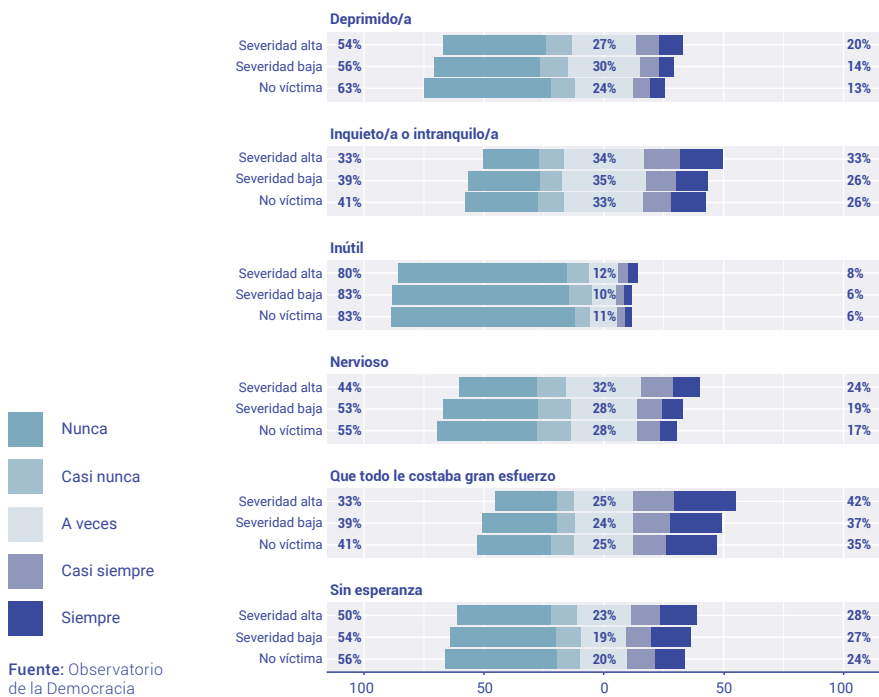
COLEMOD. ...tan deprimido(a) que nada podía animarle?

COLEMOE. ...que todo le costaba un gran esfuerzo?

COLEMOF. ...inútil?

Gráfica 20. Proporción de entrevistados con síntomas de malestar psicológico (escala K6), según severidad de la violencia sufrida en sus familias

En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia se sintió ...



Fuente: Observatorio de la Democracia

Para profundizar los resultados anteriores, el Observatorio de la Democracia hizo un ejercicio estadístico para estudiar los factores asociados al malestar psicológico mediante un modelo de regresión logístico cuya variable dependiente toma el valor de 1 cuando la puntuación del entrevistado en la escala K6 supera el punto de corte sugerido en la literatura para detectar el riesgo de padecer malestar psicológico (Kessler *et al.*, 2010). La variable de interés es el nivel de severidad de la violencia sufrida en la familia del entrevistado (no víctima, severidad baja y severidad alta). También se incluyeron otras variables que podrían afectar la probabilidad de padecer malestar psicológico: una variable dicotómica que toma el valor de 1 si al menos uno de los hechos victimizantes reportados sucedió en el último año, y otra variable dicotómica que toma el valor de 1 si el entrevistado se siente inseguro en el lugar donde vive, pensando en la posibilidad de ser víctima de un ataque o acción de un grupo armado.

También se incluyeron el género y la edad como variables de control, y dos variables dicotómicas que identifican si el municipio es PDET y si su nivel de capacidad estatal es mayor.

La Tabla 2 presenta los resultados de este ejercicio, mostrando que la probabilidad de padecer malestar psicológico aumenta cuando la familia del entrevistado ha estado expuesta a una violencia más severa, en comparación con las personas que no reportaron hechos victimizantes en sus familias. Asimismo, la tabla muestra que la probabilidad de sufrir malestar psicológico también está asociada positivamente al hecho de haber sufrido al menos un hecho victimizante en el último año. Estos resultados son consistentes con lo que se conoce en la literatura como la relación dosis-efecto, según la cual una exposición a la violencia más severa y reciente aumenta la probabilidad y la intensidad de los efectos psicológicos (Mollica *et al.*, 1998; Moya & Carter, 2019).¹⁴

Por último, es interesante que sea significativa y positiva la variable que captura la percepción de inseguridad frente a la posibilidad de un ataque de un grupo armado. Primero, porque este resultado sugiere que la probabilidad de padecer malestar psicológico no solo depende de la exposición a la violencia en términos de cantidad de hechos victimizantes reportados, sino también de las percepciones de riesgo. Además, este resultado evidencia que el malestar psicológico no solo tiene que ver con las vivencias pasadas de los individuos, sino también con las creencias de lo que pueda pasar a futuro.

Estos resultados permiten comprender de manera amplia los efectos de la violencia en el malestar psicológico, entendiendo que, además de la exposición objetiva a la violencia, las creencias personales también juegan un papel determinante en la evaluación que hacen los individuos de su propia realidad (Bar-Tal and Jacobson, 1998; Vélez *et al.*, 2016).¹⁵

14. Aunque la variable de mujer no es significativa en este modelo, es importante tener en cuenta que en la Muestra Especial existe una diferencia de género significativa, pero pequeña, en cuanto a la salud mental de los entrevistados, siendo más alta la prevalencia de síntomas de malestar psicológico entre las mujeres (18% hombres; 23% mujeres). Además, la variable mujer es significativa y positiva en varias especificaciones de modelos de regresión, pero pierde significancia estadística cuando se incluye al modelo la percepción de inseguridad frente al posible ataque de un grupo armado.

15. En los anexos del informe se incluye un ejercicio adicional que realizó el Observatorio de la Democracia para profundizar estos resultados. Se estimaron las probabilidades de padecer malestar psicológico teniendo en cuenta la interacción entre severidad de la violencia y percepción de inseguridad. Se encontró que la probabilidad de padecer malestar psicológico aumenta considerablemente cuando la violencia vivida en la familia del entrevistado converge con una sensación de inseguridad.

El malestar psicológico no solo tiene que ver con las vivencias pasadas de los individuos, sino también con las creencias de lo que pueda pasar a futuro

Tabla 2. Determinantes del riesgo de padecer malestar psicológico (modelo logit)

Variables	Riesgo de malestar psicológico
Severidad baja	
Severidad alta	+
Víctima en el último año	+
Se siente inseguro frente a ataque de grupo armado	+
Mujer	
Edad	
PDET	
Mayor capacidad estatal	
N	1,275

Si bien la escala K6 representa apenas una breve abstracción de la compleja relación entre exposición a la violencia y salud mental, los resultados presentados en los párrafos anteriores coinciden con evidencia robusta sobre este tema en Colombia, particularmente la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, según la cual la población víctima del conflicto tiene mayor riesgo de sufrir problemas y desórdenes mentales (Tamayo *et al.*, 2016). Adicionalmente, estudios en Colombia han mostrado que la salud mental de las personas no solo depende de sus experiencias directas de victimización, sino también de la violencia sufrida por otros miembros de su familia. Por ejemplo, Flink *et al.* (2013) encontraron que niños y niñas en edad de preescolar procedentes de segundas generaciones de familias desplazadas tienen mayor riesgo de presentar ansiedad, depresión, somatización, problemas de sueño, problemas de atención y comportamientos agresivos. En síntesis, la información presentada hasta aquí corrobora la teoría de que la exposición a la violencia está correlacionada con una mayor probabilidad de padecer traumas psicológicos, y en este sentido refuerza el llamado del Instituto Nacional de Salud de fortalecer el acompañamiento psicosocial a las víctimas con el fin de mitigar las consecuencias del conflicto sobre la población (INS, 2018).

Ahora bien, para explorar en qué medida los efectos psicológicos de la guerra son un obstáculo para la reconciliación, se hizo un segundo ejercicio estadístico que consiste en estudiar los factores asociados con las actitudes de los ciudadanos frente al perdón y la reconciliación. De acuerdo con el razonamiento planteado en la literatura, tras una experiencia de victimización las personas son más vulnerables a estímulos emocionales y, por ende, en el posconflicto tienen más riesgo de reforzar estereotipos que contribuyen a la polarización. Además, se argumenta que los desórdenes de salud mental influyen en la capacidad para construir relaciones sociales y agota los recursos emocionales de las personas, haciendo que se limite la capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas y generando pesimismo sobre los procesos de reconciliación (Fergusson *et al.*, 2018; Ugarriza y Nussio, 2017; Canetti-Nisim *et al.*, 2009; Mollica *et al.*, 1987; Ugarriza, 2017). Por lo anterior, sería de esperar que las experiencias de victimización y sus secuelas psicológicas se asocien negativamente con las actitudes de reconciliación.

Se definieron dos tipos de variables dependientes para aproximarnos a las actitudes de reconciliación: (i) la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación, y (ii) la disposición a convivir con desmovilizados. La creencia de que es posible el perdón y la

reconciliación se estudió con modelos logísticos en los que la variable dependiente toma el valor de 1 cuando los ciudadanos ven posible el perdón y la reconciliación con desmovilizados de las FARC. En cuanto a la disposición a convivir con excombatientes, se usaron modelos de regresión lineal en los que la variable dependiente es un índice que mide la disposición de los entrevistados a convivir con desmovilizados en sus espacios laborales y en el colegio de sus hijos.

Para cada una de las variables dependientes, la relación entre las experiencias de victimización, los síntomas de malestar psicológico y las actitudes de reconciliación se exploraron de varias formas. En el primer modelo, las variables de interés son las experiencias de victimización de los entrevistados, en una escala de 0 a 5 que mide la cantidad de hechos victimizantes que los entrevistados reportaron haber experimentado en su familia, así como la puntuación en la escala de malestar psicológico K6. También se incluyeron otras variables independientes que afectan las actitudes de reconciliación de los entrevistados, tales como el género, la percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz, la confianza interpersonal, la cercanía al Centro Democrático, dos variables dicotómicas que identifican si el municipio es PDET y si su nivel de capacidad estatal es mayor, y otras variables de control.¹⁶

La primera columna de la Tabla 3 y de la Tabla 4 muestran los resultados de este modelo para la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación y la disposición a convivir con desmovilizados, respectivamente. En ambos casos, se encontró que las actitudes de reconciliación están asociadas positivamente con las experiencias de victimización de los entrevistados, la percepción de cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz, la confianza interpersonal y el nivel educativo. Por su parte, las características de ser mujer y tener cercanía al Centro Democrático están asociadas negativamente a las actitudes de reconciliación. En cambio, la variable de malestar psicológico no es significativa.

16. El género es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el entrevistado es mujer y 0 si es hombre. La percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que los entrevistados perciben que nada de lo acordado entre el Gobierno y las FARC ha sido puesto en marcha, y 5 que todo lo acordado ha sido puesto en marcha. La confianza interpersonal se mide en una escala de 1 a 4, donde 1 indica que el entrevistado considera que la gente de su comunidad no es nada confiable, y 4 que la gente de su comunidad es muy confiable. Por último, la cercanía al Centro Democrático se mide en una escala de 1 a 7, donde 1 implica que los entrevistados no se sienten nada cercanos a este partido político, y 7 que se sienten muy cercanos al mismo. Como variables de control, se incluyeron la edad, el nivel educativo, y si es zona urbana o rural.

Las actitudes de reconciliación están asociadas positivamente con las experiencias de victimización de los entrevistados, la percepción de cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz, la confianza interpersonal y el nivel educativo

Llama la atención que en ambos modelos la variable que captura las experiencias de victimización es significativa y positiva, a la vez que no hay evidencia de que los síntomas de malestar psicológico afecten las actitudes de reconciliación. Es decir, pese a incrementar la probabilidad de padecer malestar psicológico (como se expuso anteriormente), la cantidad de hechos victimizantes sufridos en la familia de los entrevistados está asociada positivamente con sus actitudes frente a la reconciliación, no solo aumentando la probabilidad de que éstos creen que es posible el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes, sino también aumentando la disposición a compartir sus vidas cotidianas con estos últimos, tanto en sus espacios de trabajo como en el colegio de sus hijos. En principio, esta evidencia parecería contradecir la noción de que la exposición a la violencia y sus efectos en el malestar psicológico son un obstáculo para la reconciliación. Sin embargo, se requieren ejercicios estadísticos adicionales para corroborar este resultado, pues los estimadores de estos modelos podrían estar sesgados. Aunque una práctica frecuente en la literatura es incluir en la misma regresión la variable de tratamiento (severidad de la victimización) y la variable mediadora (malestar psicológico), este tipo de estimaciones no son adecuadas porque conducen a estimadores sesgados y se corre el riesgo de inducir relaciones que no existen (Acharya *et al.*, 2016).

Por esta razón, el Observatorio de la Democracia aplicó dos modelos adicionales para cada variable dependiente, en los que se conserva la especificación del modelo descrito anteriormente, pero se estudia, por separado, el efecto de la victimización y el efecto del malestar psicológico en las actitudes de reconciliación. En la segunda columna de la Tabla 3 y de la Tabla 4 se reportan los resultados de un modelo que omite la puntuación en la escala de síntomas de malestar psicológico, encontrando que el efecto de la victimización en las actitudes de reconciliación sigue siendo

significativo y positivo, tanto en la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación (Tabla 3) como en la disposición a convivir con desmovilizados (Tabla 4). Igualmente, la tercera columna de cada tabla muestra que, al omitir las experiencias de victimización del modelo, el efecto de los síntomas de malestar psicológico tampoco es significativo. Además, como se reporta en los anexos del informe, se estimaron las probabilidades de ver posible el perdón y la reconciliación para diferentes valores de puntuación en la escala de malestar psicológico K6, así como las predicciones lineales del índice de disposición a convivir con desmovilizados para distintos niveles de malestar psicológico, manteniendo las otras variables de la regresión en su valor promedio. Las gráficas presentadas en los anexos muestran que los síntomas de malestar psicológico no tienen incidencia sobre las actitudes de reconciliación.

Finalmente, el Observatorio de la Democracia hizo un análisis de mediación para evaluar si el efecto de la victimización en las actitudes de reconciliación sigue siendo positivo y significativo cuando se controla por el efecto de la salud mental en las actitudes de reconciliación. Siguiendo el método propuesto por Acharya *et al.* (2016), el ejercicio consiste en calcular el efecto directo promedio controlado (ACDE, por sus siglas en inglés) de la victimización en las actitudes de reconciliación. En otras palabras, se busca identificar si existen mecanismos distintos al malestar psicológico que expliquen el efecto de la severidad de la victimización en las actitudes de reconciliación.

Para este propósito, se partió del primer modelo presentado en las tablas, en el que se incluyen todas las variables que pueden afectar las actitudes de reconciliación, incluyendo la variable mediadora (el malestar psicológico) y la variable de tratamiento (experiencias de victimización). Luego, se creó una función "demediadora", que elimina el efecto de la variable mediadora (salud mental) en las actitudes de reconciliación. Por último, se efectuaron regresiones en las que las variables dependientes son las actitudes de reconciliación sin el efecto de la salud mental, y la variable de interés es el tratamiento (en este caso las experiencias de victimización).¹⁷ Como se reporta en la cuarta columna de la Tabla 3 y de la Tabla 4, tras controlar por el efecto de la salud mental en las actitudes de reconciliación, el efecto de la victimización sigue siendo significativo y positivo.

17. De este segundo modelo se excluyen las variables que Acharya *et al.* (2016) denominan "post tratamiento", es decir todas aquellas que podrían ser afectadas por el tratamiento, que en este caso son las experiencias de victimización. Siguiendo este criterio, solo se conservan en el modelo las variables que permanecen igual tras una experiencia de victimización: edad, género y nivel educativo. En todo caso, el Observatorio exploró varias especificaciones del modelo y sus resultados permanecen.

Esto quiere decir que, independientemente de las secuelas psicológicas de la guerra, existen otros mecanismos que explican por qué las experiencias de victimización inciden de manera positiva en la probabilidad de que los entrevistados vean posible el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes, y en la disposición a compartir espacios de su vida cotidiana con estos últimos.¹⁸

Tabla 3. Determinantes de actitudes favorables frente al perdón y la reconciliación

Variables	Modelos			
	(1) Todas las variables	(2) Sin puntuación K6	(3) Sin victimización	(4) acde
Victimización	+	+	omitida	+
Puntuación en escala de malestar psicológico (K6)		omitida		omitida
Mujer	-	-	-	-
Percepción cumplimiento Acuerdo de Paz	+	+	+	omitida
Confianza interpersonal	+	+	+	omitida
Cercanía al Centro Democrático	-	-		omitida
Edad	+	+	+	+
Nivel educativo	+	+	+	+
Zona urbana				-

18. Es importante tener en cuenta que uno de los supuestos del modelo es que no hay variables omitidas que expliquen el efecto de la violencia y de la salud mental en las actitudes de reconciliación (Acharya et al, 2016). Este supuesto puede no ser realista, pues es muy probable que el efecto de la victimización en las actitudes de reconciliación pueda explicarse a través de mecanismos que no hayan sido capturados por el estudio.

PDET				
Mayor capacidad estatal				
N	3,430	3,517	3,430	3,788

Tabla 4. Determinantes de actitudes favorables hacia la convivencia con los excombatientes desmovilizados de las FARC

Variables	Modelos			
	(1) Todas las variables	(2) Sin puntuación K6	(3) Sin victimización	(4) acde
Victimización	+	+	omitida	+
Puntuación en escala de malestar psicológico (K6)		omitida		omitida
Mujer	-	-	-	-
Percepción cumplimiento Acuerdo de Paz		+		omitida
Confianza interpersonal	+	+	+	omitida
Cercanía al Centro Democrático	-	-	-	omitida
Edad				
Nivel educativo	+	+	+	+
Zona urbana				
PDET	+	+	+	+
Mayor capacidad estatal				
N	3,504	3,603	3,504	3,910

En síntesis, el ejercicio presentado en esta sección permite concluir que, si bien la severidad de la victimización vivida por las familias de los entrevistados aumenta la probabilidad de que éstos sufran malestar psicológico, los resultados indican que los síntomas de malestar psicológico no necesariamente se traducen en estereotipos que contribuyan a la polarización y generen pesimismo sobre los procesos de reconciliación. Tampoco hay evidencia de que el malestar psicológico limite la capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas. Por el contrario, la Tabla 3 y la Tabla 4 muestran que la exposición a la violencia está asociada con actitudes más positivas frente a la reconciliación. Pese a las secuelas psicológicas de la violencia, la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación y la disposición a convivir con desmovilizados aumentan a medida que las familias de los entrevistados han sido víctimas de una violencia más severa.

No hay evidencia de que el malestar psicológico limite la capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas

La pregunta es, entonces, ¿por qué los entrevistados del estudio que han sufrido una violencia más severa tienen actitudes más favorables hacia la reconciliación, a pesar de tener mayor probabilidad de sufrir síntomas de malestar psicológico? Desde la teoría del “crecimiento postraumático”, podríamos decir que las víctimas de violencia más severa crecieron a nivel personal, y que este crecimiento se manifiesta en su apreciación por la vida, relaciones interpersonales más cálidas e íntimas, su sentido de fortaleza personal, el reconocimiento de nuevas posibilidades en su vida y desarrollo espiritual. Si bien es razonable pensar que este crecimiento individual favorezca la construcción de una sociedad reconciliada, descrita en la psicología social como una en la que hay “relaciones positivas y confiables entre antiguos adversarios, quienes gozan de identidades sociales seguras e interactúan en un ambiente social equitativo” (Nadler y Shnabel, 2015), sería precipitado confirmar esta hipótesis sin estudios más especializados del campo de la psicología que estudien y midan los procesos de crecimiento personal, y analicen

con mayor profundidad de qué manera ese crecimiento personal efectivamente se traduce en actitudes más favorables hacia la reconciliación.

Sin embargo, como se describió al inicio de esta sección, la severidad de la violencia aumenta la prevalencia de varios síntomas de malestar psicológico, tales como nerviosismo, intranquilidad, desesperanza, depresión y la sensación de que todo cuesta un gran esfuerzo (véase Gráfica 19). En este sentido, afirmar que los entrevistados de la Muestra Especial han experimentado un proceso de crecimiento postraumático podría ser irresponsable, pues desconocería el malestar de las víctimas y desatendería el llamado del Instituto Nacional de Salud de fortalecer el acompañamiento psicosocial a las víctimas con el fin de mitigar las consecuencias del conflicto sobre la población (INS, 2018).

La severidad de la violencia aumenta la prevalencia de varios síntomas de malestar psicológico, tales como nerviosismo, intranquilidad, desesperanza, depresión y la sensación de que todo cuesta un gran esfuerzo

En cambio, si interpretamos los síntomas de malestar psicológico como una manifestación de la adversidad que se deriva de experiencias previas de victimización, los análisis presentados en esta sección parecerían apuntar más hacia la teoría de la resiliencia. En este campo, la literatura argumenta que, en vez de sufrir persistentemente y alimentar sentimientos de odio hacia los victimarios, las víctimas de la violencia desarrollan mecanismos para afrontar el estrés emocional, como por ejemplo la mayor participación en organizaciones sociales, sin que esto implique que se haya dado un proceso de crecimiento postraumático (Nussio, 2019; Nussio, Rettberg & Ugarriza, 2015).

Desde esta perspectiva, actitudes más favorables hacia la reconciliación tras experiencias de violencia severa podrían ser una manifestación de resiliencia en los entrevistados de la Muestra Especial 2019, pues estas actitudes indican que, a pesar de estar padeciendo las consecuencias de la violencia, inclusive en su salud mental, las víctimas creen significativamente más que otros colombianos que sí es posible perdonar a los excombatientes desmovilizados de las FARC, y están más dispuestas a aceptar que éstos compartan su vecindario, sus lugares de trabajo, e incluso la educación de sus hijos.

Estas podrían ser buenas noticias para el país, pues la literatura señala que la resiliencia favorece los procesos de recuperación tras una guerra, pues se manifiesta de distintas formas, a veces inesperadas, y es más común de lo que se piensa. La resiliencia podría traducirse en reglas informales y prácticas sociales que se describen bajo el concepto de “paz del día a día”, entendida como la habilidad de comunidades divididas de evitar el tema que los divide en encuentros cotidianos, enfocándose, en cambio, en asuntos de interés común. Desde esta perspectiva, la resiliencia puede interpretarse como una suerte de capital social “de abajo hacia arriba”, que es pacífico y contribuye al desescalamiento del conflicto (Bonanno, 2004; Mac Ginty, 2014). En el contexto colombiano, Nussio (2019) muestra resultados consistentes con este razonamiento, al comparar los niveles de participación en organizaciones sociales entre personas que han vivido distintos tipos de violencia. El autor encuentra que las experiencias de victimización están asociadas positivamente con la participación en organizaciones sociales e interpreta este resultado a la luz de una teoría que denomina en inglés *individual coping*, que podríamos traducir como “enfrentamiento individual”, según la cual las víctimas de la violencia buscan apoyo y participación para lidiar con el estrés emocional, independientemente de la fuente de la victimización (crimen o conflicto armado) (Nussio, 2019). En todo caso, se requieren análisis más detallados, idealmente complementados con información cualitativa, para entender por qué los entrevistados del estudio que han sufrido una violencia más severa tienen actitudes más favorables hacia la reconciliación, a pesar de tener mayor probabilidad de sufrir síntomas de malestar psicológico.

También, es importante tener en cuenta que, además de la severidad de la victimización, hay otros factores que inciden de manera positiva y significativa en las actitudes de reconciliación de los entrevistados. Las tablas muestran que los modelos son consistentes al comparar varias especificaciones, pues la omisión de una u otra variable en estas regresiones (victimización o síntomas de malestar psicológico)

no tiende a alterar ni la significancia ni el signo de las otras variables independientes.¹⁹ Asimismo, al comparar las variables que tienen un efecto sobre las actitudes de reconciliación, medidas como la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación, o como la disposición a convivir con desmovilizados, se observa que el efecto de las variables de género, confianza interpersonal y nivel educativo son consistentes. Es decir, en ambas tablas el género tiene un efecto negativo, mientras que la confianza interpersonal y el nivel educativo afectan de manera significativa y positiva tanto la probabilidad de creer que es posible el perdón y la reconciliación, como la disposición a convivir con desmovilizados. En cambio, la edad afecta únicamente la probabilidad de creer que es posible el perdón y la reconciliación, y no es significativa en ningún modelo de la Tabla 4, en los que se estudian los factores asociados con la disposición a la convivencia con desmovilizados.

Igualmente, llama la atención que la variable dicotómica que captura si un municipio es PDET tiene un efecto significativo y positivo únicamente en las actitudes hacia la convivencia con desmovilizados, y no es significativa en los modelos que estudian la probabilidad de ver posible el perdón y la reconciliación. Como se expuso en la sección anterior, es posible que la mayor disposición de los entrevistados en municipios PDET se deba, en parte, a la proximidad social entre las víctimas y los excombatientes, pues al tratarse de conocidos, vecinos, o incluso familiares, es probable que las personas estén más dispuestas a convivir con desmovilizados (Téllez 2018; Nussio, Rettberg & Ugarriza, 2015). También es posible que en las regiones más golpeadas por la violencia del conflicto las personas estén más dispuestas a hacer sacrificios para reducir la violencia, como convivir con desmovilizados, pese a no ser optimistas frente a los procesos de reconciliación (Fergusson *et al.*, 2018). En todo caso, se requieren estudios más detallados para entender por qué en municipios PDET las personas están más dispuestas a convivir con desmovilizados, a pesar de que la probabilidad de creer en la posibilidad de perdón y reconciliación sea similar entre municipios PDET y NO-PDET.

19. Las únicas excepciones son la cercanía al Centro Democrático, que deja de ser significativa cuando se omiten las experiencias de victimización del modelo cuya variable dependiente es la creencia frente al perdón y la reconciliación (Tabla 3, columna 3); y la percepción del cumplimiento del Acuerdo de Paz, que deja de ser significativa en el modelo que estudia la disposición a la convivencia con excombatientes omitiendo las experiencias de victimización (Tabla 4, columna 3).

Es posible que la **mayor disposición** de los entrevistados en municipios PDET se deba, en parte, a la **proximidad social entre las víctimas y los excombatientes**, pues al tratarse de conocidos, vecinos, o incluso familiares, es probable que las **personas estén más dispuestas a convivir con desmovilizados**

3.6. Conclusiones

Los resultados presentados en este capítulo permiten llegar a varias conclusiones con respecto a las actitudes de los colombianos frente a la reconciliación. Al igual que en estudios anteriores, es evidente una división en la opinión pública sobre este tema. En promedio, entre el 43% y el 46% de los entrevistados ve posible el perdón y la reconciliación entre los excombatientes y los ciudadanos, y no hay diferencias estadísticamente significativas por tipo de municipio. En cuanto a las acciones que contribuyen a la reconciliación, se encontró que la indemnización a las víctimas, tanto por parte del Estado como de los victimarios, es la acción que la mayor cantidad de entrevistados considera que contribuiría a la reconciliación (8 de cada 10). También, se encontró que, en comparación con los municipios NO-PDET, en los municipios PDET la indemnización por parte de los victimarios y la verdad sobre los hechos ocurridos tienen mayor peso en la visión que tiene la población acerca de la reconciliación. En este tipo de municipios, una mayor proporción de ciudadanos considera que contribuiría a la reconciliación que los victimarios indemnicen a las víctimas (8 de cada 10) y que se establezca la verdad sobre los hechos ocurridos (7 de cada 10), en comparación con los municipios NO-PDET, en los que aproximadamente el 75% de los entrevistados cree que la indemnización por parte de los victimarios contribuiría a la reconciliación, y los municipios NO-PDET con mayor capacidad estatal, en los que 6 de cada 10 entrevistados cree que contribuiría el establecimiento de la verdad.

Asimismo, el capítulo mostró que la disposición de los entrevistados a compartir espacios de la vida cotidiana con antiguos miembros de grupos armados tiende a reducirse a medida que se pregunta por interacciones más personales; mientras que la mayoría está dispuesta a ser vecino de un excombatiente (74%), menos de la mitad aprobaría que en la empresa o lugar donde trabaja le dieran empleo a un desmovilizado (48%) o que en el colegio de su hija o hijo estudien hijos de personas que hicieron parte de grupos armados ilegales (45%). Al comparar entre los diferentes tipos de municipio de la muestra, se encontró que los niveles de exposición a la violencia inciden positivamente en la disposición de los entrevistados a convivir con desmovilizados, pues en los municipios PDET una proporción significativamente mayor de entrevistados aceptaría

desmovilizados en su vecindario (77%), en su espacio de trabajo (52%) o en el colegio de sus hijos (50%). Este resultado se comprobó estadísticamente a través de modelos de regresión en los que una variable dicotómica que captura si un municipio es PDET tiene un efecto significativo y positivo en las actitudes hacia la convivencia con desmovilizados.

Por último, presentamos resultados de un ejercicio especial que desarrolló el Observatorio de la Democracia como parte del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto*, con el objetivo de entender los efectos psicológicos de la guerra y su incidencia sobre las actitudes de reconciliación. Por un lado, se encontró que la severidad de la victimización vivida en las familias de los entrevistados afecta negativamente su salud mental, particularmente aumentando la prevalencia de síntomas de malestar psicológico como nerviosismo, intranquilidad, desesperanza, depresión y la sensación de que todo cuesta un gran esfuerzo. Sin embargo, los resultados indican que los síntomas de malestar psicológico no necesariamente se traducen en estereotipos que contribuyan a la polarización y generen pesimismo sobre los procesos de reconciliación. Tampoco hay evidencia de que el malestar psicológico limite la capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas. Por el contrario, se encontró que la exposición a la violencia está asociada con actitudes más positivas frente a la reconciliación. Pese a las secuelas psicológicas de la violencia, la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación, y la disposición a convivir con desmovilizados aumentan a medida que las familias de los entrevistados han sido víctimas de una violencia más severa.

Pese a las secuelas psicológicas de la violencia, la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación, y la disposición a convivir con desmovilizados aumentan a medida que las familias de los entrevistados han sido víctimas de una violencia más severa

Notas



4. Desempeño estatal y posacuerdo

4.1. Introducción

Tras la finalización de un conflicto armado, una de las prioridades gubernamentales debe ser aumentar la capacidad institucional en las zonas en las que ha sido débil o inexistente. El caso colombiano no es la excepción. Después de cinco décadas de confrontación armada entre el Estado colombiano y las FARC-EP, en muchos territorios afectados por la guerra la presencia de las instituciones públicas es muy escasa o nula. Dada esta situación, en el Acuerdo de Paz se contempló aumentar la presencia de las instituciones públicas y mejorar la provisión de bienes y servicios en las zonas históricamente afectadas por el conflicto. Estos esfuerzos deberían aumentar la legitimidad del Estado a lo largo del territorio nacional.

Dado el interés de este estudio de evaluar la relación entre variaciones en exposición al conflicto y capacidad estatal en las opiniones de los colombianos, en este capítulo el Observatorio de la Democracia explora las percepciones de los entrevistados sobre el desempeño del Estado con relación a varios temas que resultan centrales en el contexto de la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. El primero de ellos es el de seguridad, el segundo tiene que ver con justicia, el tercero con derechos humanos y el último con la situación de los líderes sociales y las acciones del Estado para protegerlos.

En la siguiente sección se presentan las percepciones de los entrevistados acerca de la seguridad del país y en el lugar de su residencia, así como los agentes que garantizan la seguridad. Luego, la tercera sección aborda el tema de justicia, y en la última sección se discuten las percepciones acerca de la situación de seguridad de los líderes sociales. Estas son dimensiones de la capacidad estatal que inciden directamente en la posibilidad de construir una paz estable y duradera.

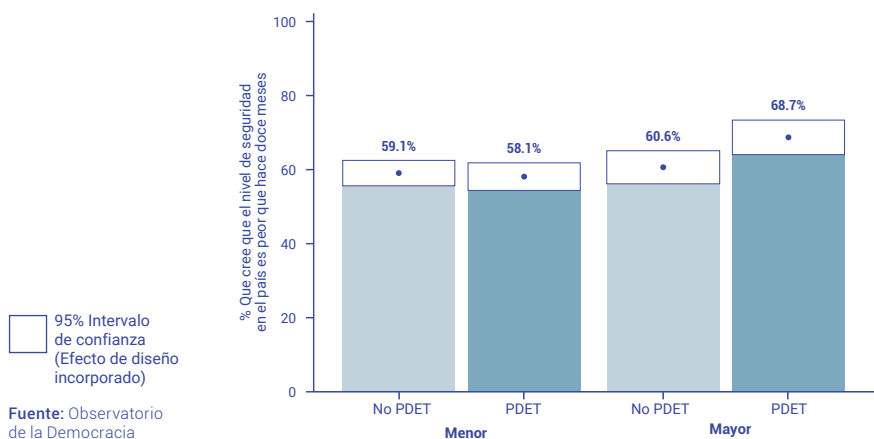
4.2. Seguridad

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el Observatorio de la Democracia ha indagado en sus estudios por las expectativas de los ciudadanos frente a la implementación del Acuerdo en materia de seguridad, y por los agentes que garantizaban la seguridad en el lugar de residencia de los entrevistados antes del Acuerdo y los que la garantizan en la actualidad. En 2019 preguntamos adicionalmente por las percepciones de los entrevistados sobre el cambio en la situación de seguridad del país. Empezamos presentando las percepciones generales sobre seguridad y luego pasamos a los agentes que garantizan seguridad.

Como se presentó en el segundo capítulo de este informe, la implementación del Acuerdo de Paz ha generado diversas expectativas en la mayoría de entrevistados del estudio. En cuanto a la seguridad en el municipio, 6 de cada 10 entrevistados, independientemente del tipo de municipio, esperan que la implementación de lo acordado traiga mejoras en este tema (véase Gráfica 11). Sin embargo, estas expectativas contrastan con las percepciones de los entrevistados respecto a la situación de seguridad. Por ejemplo, al preguntar por la situación de seguridad del país en el último año, la Gráfica 21 muestra que la mayoría de entrevistados considera que en la actualidad el nivel de seguridad del país es peor que hace doce meses (en promedio 6 de cada 10), siendo los municipios PDET de mayor capacidad estatal donde una mayor proporción de entrevistados así lo percibe (68.7%), en comparación con el resto de municipios. El Observatorio de la Democracia también indagó por la percepción de los entrevistados respecto a la situación de seguridad en el lugar de residencia. Como lo muestra la Gráfica 22, entre el 40% y 47% de los entrevistados en los distintos tipos de municipio del estudio se sienten inseguros en su barrio o vereda, pensando en la posibilidad de ser víctima de un ataque o acción de grupos armados. Este resultado evidencia la necesidad de que el Estado colombiano amplíe sus esfuerzos para garantizar la seguridad de tal forma que la población se sienta protegida de la amenaza de los actores armados ilegales que aún existen.

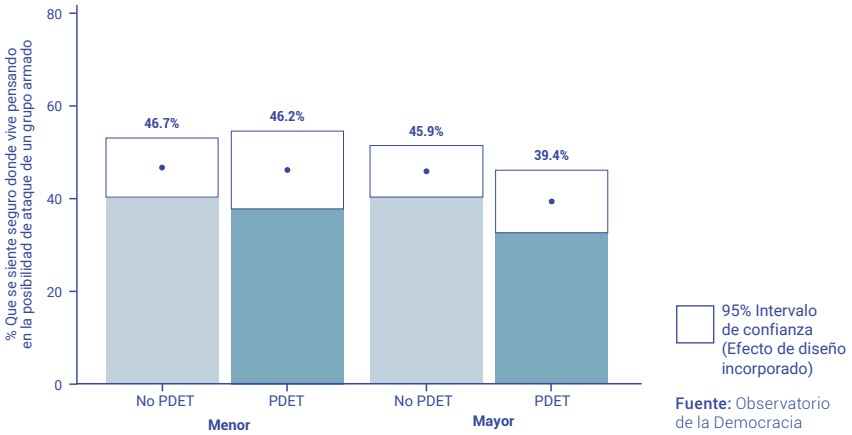
Entre el **40%** y **47%** de los entrevistados en los distintos tipos de municipio del estudio **se sienten inseguros en su barrio o vereda, pensando en la posibilidad de ser víctima de un ataque o acción de grupos armados.**

Gráfica 21. Percepción de seguridad en el último año



COLSEG. ¿Considera usted que el nivel de seguridad en el país es mejor, igual o peor que hace doce meses?

Gráfica 22. Percepción de seguridad en el lugar de residencia ante la posibilidad de ataque armado



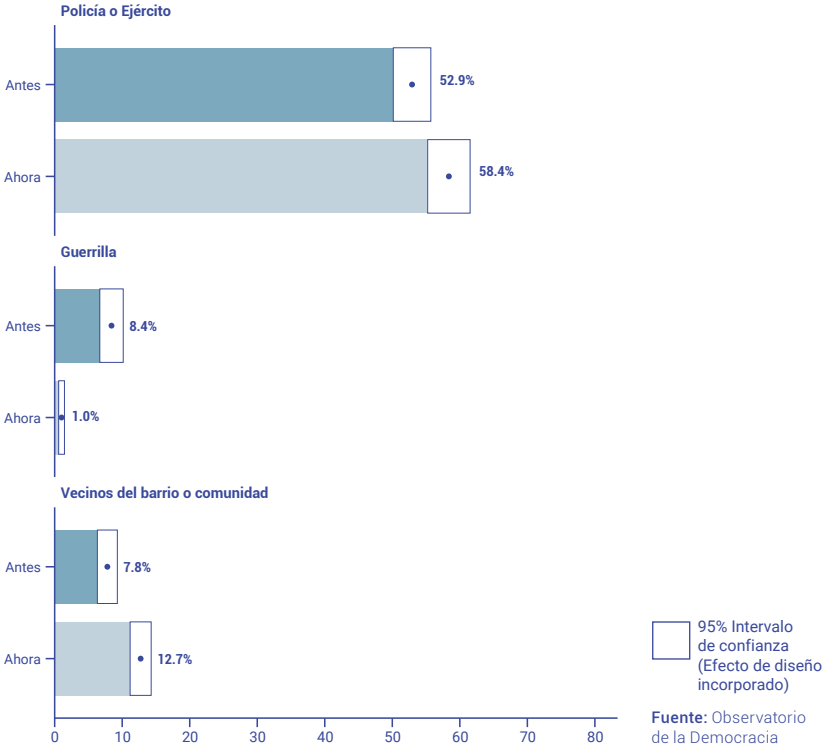
AOJ11X. Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un ataque o acción de un grupo armado, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?

Teniendo en cuenta las percepciones de los entrevistados sobre la situación de seguridad del país y en su lugar de residencia, el Observatorio de la Democracia preguntó qué agentes garantizaban la seguridad antes de la firma del Acuerdo y los que la garantizan actualmente. La Gráfica 23 muestra que en los municipios del estudio se evidencia un cambio significativo en la percepción de los entrevistados respecto a los agentes que garantizan la seguridad en el lugar donde viven antes y después de la firma del Acuerdo de Paz. En particular, aumentó significativamente la proporción de entrevistados que percibe que la Policía o el Ejército garantiza la seguridad, pasando del 52.9% antes de la firma del Acuerdo, al 58.4% en la actualidad. La proporción de entrevistados que perciben a sus vecinos del barrio o comunidad como garantes de seguridad también creció, pasando del 7.8% antes del Acuerdo al 12.7% en la actualidad. Por último, disminuyó casi por completo la proporción de entrevistados que percibe a la guerrilla como garante de seguridad, pasando del 8.4% antes del Acuerdo, al 1% en la actualidad.

En particular, aumentó significativamente la proporción de entrevistados que percibe que la Policía o el Ejército garantiza la seguridad, pasando del 52.9% antes de la firma del Acuerdo, al 58.4% en la actualidad

Llama la atención que, si se desagrega por tipo de municipio, no hay diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de entrevistados que cree que en la actualidad la Policía o el Ejército son los garantes de la seguridad en su barrio o vereda (Gráfica 24). Es decir, independientemente del nivel de exposición a la violencia y la capacidad estatal del municipio, aproximadamente 6 de cada 10 entrevistados percibe a la fuerza pública como garante de la seguridad local.

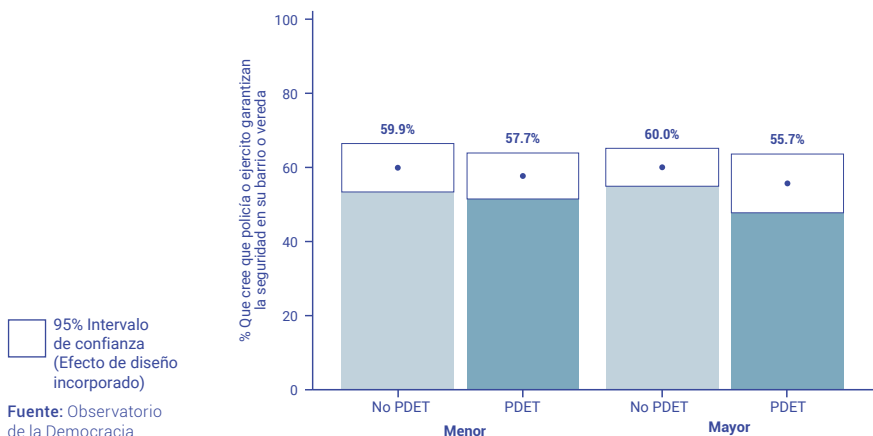
Gráfica 23. Grupo que garantizaba la seguridad en el lugar de residencia antes y después del Acuerdo de Paz



COLAOJ21BN. Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantizaba la seguridad en el lugar donde usted vivía antes de la firma del Acuerdo de Paz.

COLAOJ21A. Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantiza la seguridad en el lugar donde vive.

Gráfica 24. Policía o militares como garantes de seguridad en la actualidad



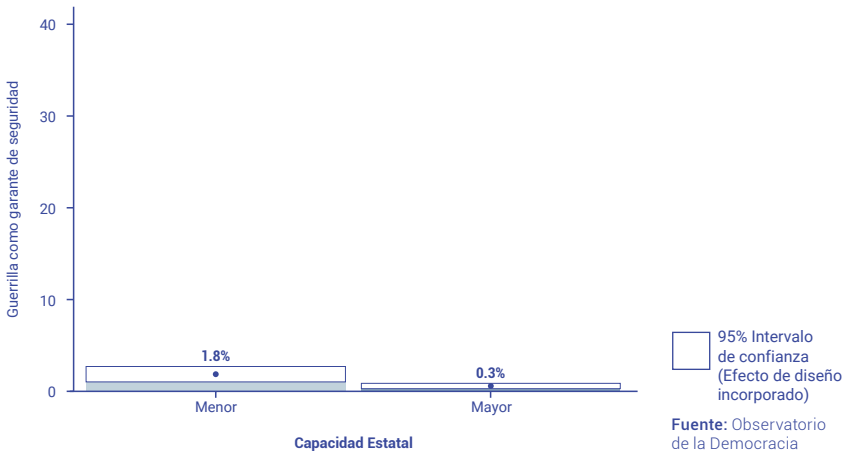
COLAOJ21A. Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantiza la seguridad en el lugar donde vive.

Pese al incremento en la percepción de que la fuerza pública garantiza la seguridad local, todavía 4 de cada 10 entrevistados no la perciben como un garante de seguridad. Además, el aumento de 5.5 puntos porcentuales, en la percepción de que la fuerza pública garantiza la seguridad después del Acuerdo de Paz, no coincide con la disminución observada de 7.4 puntos porcentuales en la proporción de entrevistados que percibía a la guerrilla como garante de la seguridad. Esto sugiere que la fuerza pública no ha incrementado su presencia al ritmo necesario para compensar el papel de garante de seguridad que dejó de tener la guerrilla. De igual forma, la Gráfica 23 muestra que, posiblemente, el aumento en la proporción de entrevistados que perciben a sus vecinos como garantes de seguridad se deba a que los ciudadanos se han visto en la necesidad de llenar el vacío de seguridad tras la salida de la guerrilla de las FARC en sus territorios.

Por último, si bien es una buena noticia la disminución en la proporción de entrevistados que actualmente percibe a la guerrilla como garante de seguridad, es importante entender mejor por qué algunos entrevistados todavía afirman que en su municipio la guerrilla garantiza la seguridad. El Observatorio de la Democracia comparó los agentes que garantizan la seguridad en la actualidad entre los distintos tipos de municipio incluidos en este estudio

y encontró que la capacidad estatal incide sobre la percepción de los entrevistados de que la guerrilla garantiza la seguridad. La Gráfica 25 muestra que, mientras en los municipios con menor capacidad estatal esta proporción es de 2 de cada 100, en los municipios con mayor capacidad estatal prácticamente ninguno de los entrevistados (0.3%) percibe a la guerrilla como un garante de seguridad. Este resultado advierte sobre la importancia de que el Estado colombiano llene vacíos institucionales en regiones donde la capacidad estatal es menor y en donde la guerrilla ha sido un regulador del orden local.

Gráfica 25. Guerrilla como garante de seguridad



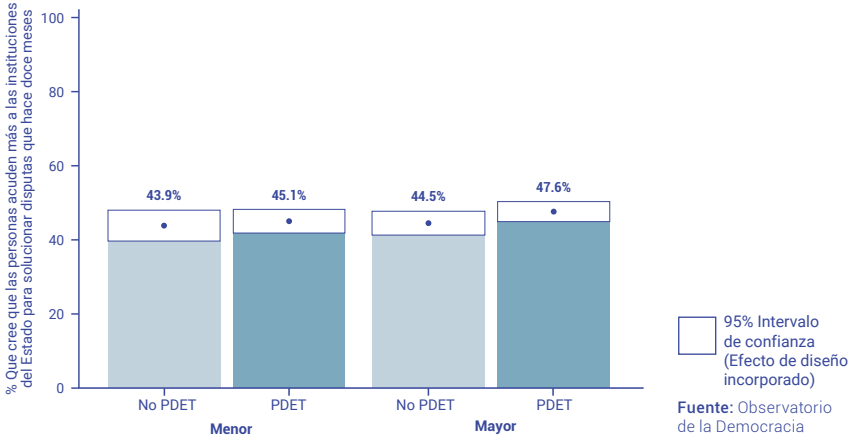
COLAOJ21A. Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantiza la seguridad en el lugar donde vive.

4.3. Resolución de conflictos y justicia

Tras la salida de las FARC de muchas zonas del país, se espera que más ciudadanos recurran a agentes estatales para gestionar sus diferencias con otras personas. Por esta razón, el Observatorio de la Democracia preguntó a los entrevistados su percepción sobre la frecuencia con la que los ciudadanos recurren a las instituciones del Estado para resolver disputas. La Gráfica 26 muestra que, en promedio, 4 de cada 10 entrevistados creen que hoy en día las personas acuden con más frecuencia al Estado para resolver disputas con sus vecinos que un año atrás. Frente a esta pregunta, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de municipio incluidos en el estudio especial 2019.

En promedio, 4 de cada 10 entrevistados creen que hoy en día las personas acuden con más frecuencia al Estado para resolver disputas con sus vecinos que un año atrás

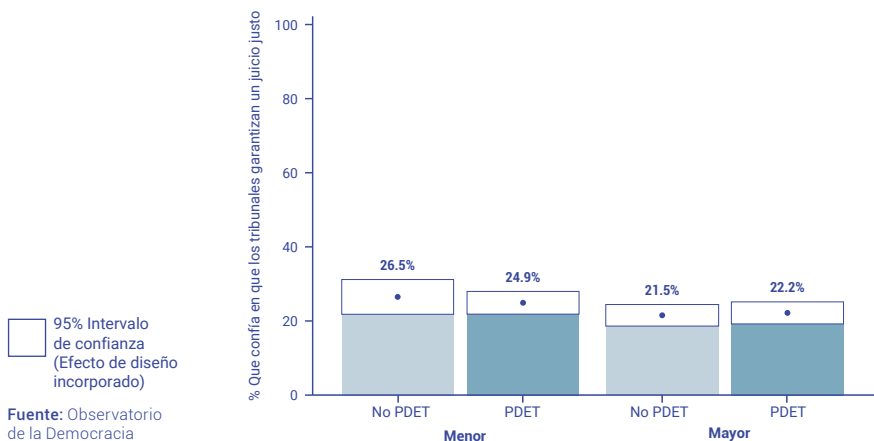
Gráfica 26. Percepción sobre el aumento del uso de las instituciones del Estado para resolver disputas en el último año



COLINSTGOB12. En comparación con hace 12 meses, hoy las personas acuden con más frecuencia a las instituciones del Estado para resolver una disputa con algún vecino. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

El Observatorio de la Democracia también preguntó a los entrevistados hasta qué punto creen que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo. En promedio, solo 2 de cada 10 entrevistados confía en la acción de los tribunales (Gráfica 27). Sin embargo, en los municipios con menor capacidad estatal, sin importar el nivel de exposición a la violencia, hay una mayor proporción de entrevistados que confía en las decisiones del sistema judicial (25.7%), en comparación con la proporción que así lo hace en los municipios con mayor capacidad estatal (21.8%). Este resultado muestra que, aunque en todos los tipos de municipio el nivel de confianza en las decisiones del sistema judicial es bajo, en los municipios en los que hay una presencia del Estado más débil los habitantes tienden a confiar un poco más.

Gráfica 27. Confianza en la efectividad de la justicia

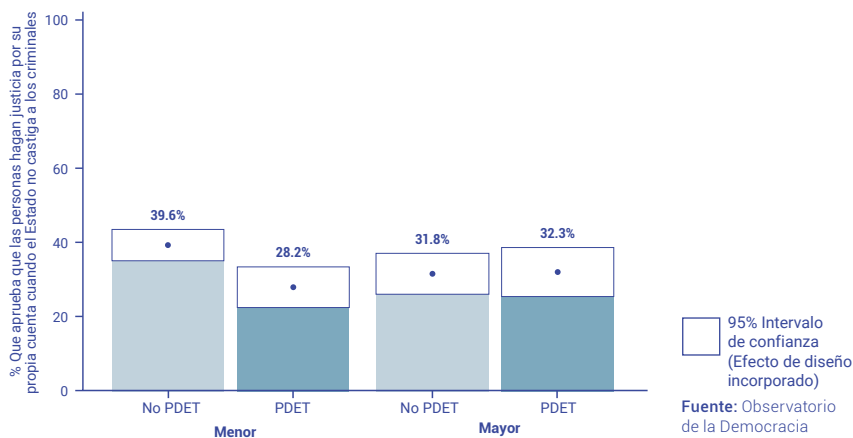


B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo?

Finalmente, para conocer las implicaciones de la desconfianza en el sistema judicial, el Observatorio de la Democracia preguntó a los entrevistados hasta qué punto aprueban que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales. La Gráfica 28 muestra que, en promedio, 3 de cada 10 entrevistados en el estudio *Colombia, un país más allá del conflicto* aprueban la justicia por mano propia. Al comparar los distintos tipos de municipio, se encuentra que en los municipios NO-PDET de menor capacidad estatal un porcentaje significativamente mayor de entrevistados (39.6%) aprueba la justicia por cuenta propia. En los otros tipos de municipio este porcentaje no supera el 32%.

En los municipios **NO-PDET de menor capacidad estatal** un porcentaje **significativamente mayor de entrevistados [39.6%] aprueba la justicia por cuenta propia.** En los otros tipos de municipio este porcentaje **no supera el 32%**

Gráfica 28. Aprobación de que las personas hagan justicia por su propia cuenta



E16. Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?

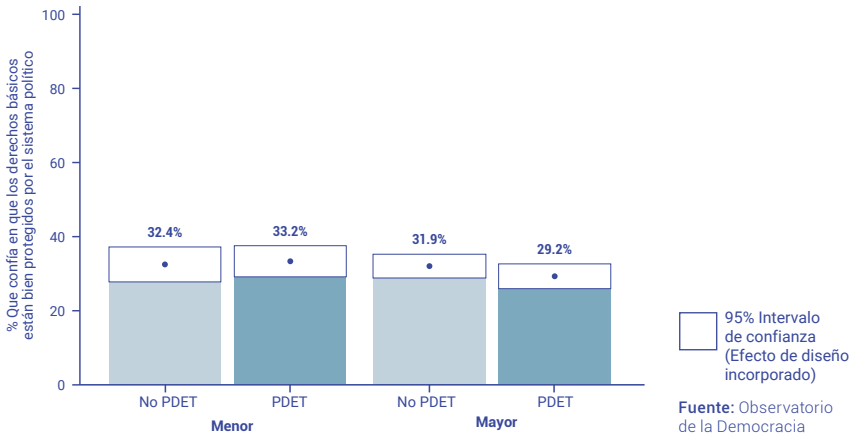
4.4. Derechos humanos y líderes sociales

La última dimensión relacionada con la capacidad estatal incluida en el estudio Muestra Especial 2019 tiene que ver con la percepción de los entrevistados frente a la protección y el respeto de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Este aspecto resulta importante porque un elemento transversal en los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo de Paz es la garantía de los derechos humanos (OACNUDH, 2019).

En primer lugar, el Observatorio de la Democracia preguntó a los entrevistados hasta qué punto creen que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político colombiano. La Gráfica 29 muestra que, independientemente del tipo de municipio, apenas 3 de cada 10 creen que nuestro sistema político protege bien los derechos básicos de los ciudadanos.

Independientemente del tipo de municipio, apenas 3 de cada 10 creen que nuestro sistema político protege bien los derechos básicos de los ciudadanos

Gráfica 29. Confianza en el sistema político como protector de derechos básicos

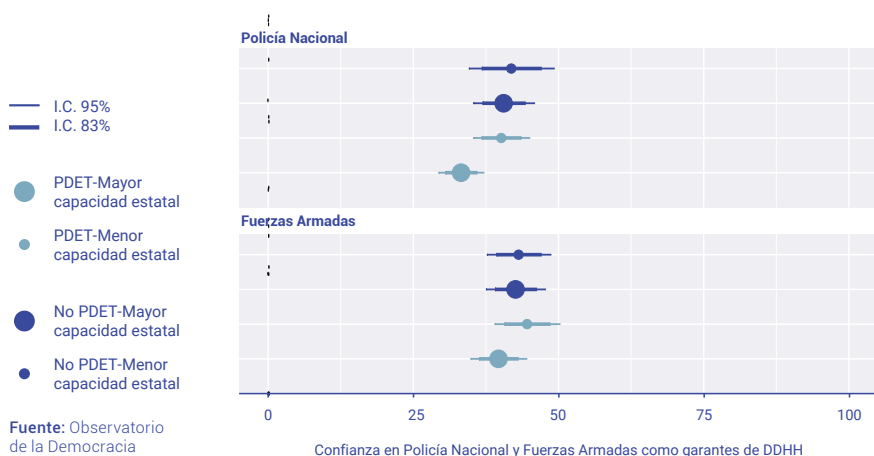


B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político colombiano?

Con el fin de entender mejor la percepción de los entrevistados frente a la protección de derechos por parte del Estado, el Observatorio de la Democracia preguntó también por la creencia en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos de los colombianos. Un primer resultado que llama la atención es que tan solo 4 de cada 10 entrevistados creen que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos de los colombianos (Gráfica 30). Sin embargo, al desagregar por tipo de municipio se encuentran diferencias significativas. La Gráfica 30 muestra que en los municipios PDET de mayor capacidad estatal la proporción de entrevistados que cree que la Policía Nacional respeta los derechos humanos de los colombianos es menor (33.2%), en comparación a la proporción que así lo hace en el resto de municipios (40.9% en promedio). En el caso de las Fuerzas Armadas no hay diferencias significativas entre tipos de municipio

Tan solo 4 de cada 10 entrevistados creen que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos de los colombianos

Gráfica 30. Confianza en Policía Nacional y Fuerzas Armadas como garantes de derechos humanos



B3POLX. ¿Hasta qué punto cree que la Policía Nacional respeta los derechos humanos de los colombianos hoy en día?

B3MILX. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas colombianas respetan los derechos humanos de los colombianos hoy en día?

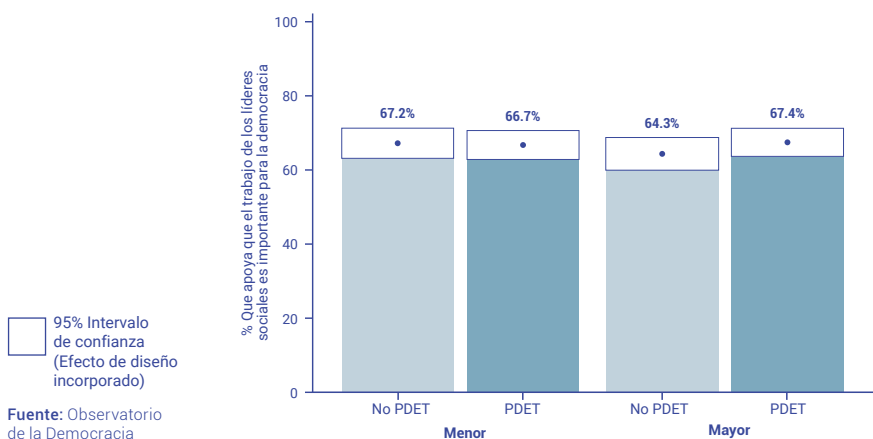
Mas allá de que el Estado y sus agentes garanticen los derechos humanos de toda la población, en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz aparece un reto enorme y es la protección de los derechos e integridad de las personas que representan a las comunidades donde se están poniendo en marcha algunos de los compromisos contenidos en el Acuerdo. Ese es el caso particular de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.²⁰ La vulnerabilidad de los líderes sociales se ha convertido en un tema de interés público a nivel nacional e internacional porque, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz, entre noviembre de 2016 y julio de 2019 han sido asesinados 623 líderes sociales y defensores de derechos humanos (INDEPAZ, 2019). Recientemente, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia alertaba de los altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente contra líderes sociales e indígenas (OACNUDH, 2020).

En este contexto, para conocer la percepción de los ciudadanos frente a la situación de los líderes sociales, el Observatorio de la Democracia incluyó por primera vez en su encuesta preguntas relacionadas con las percepciones de los entrevistados respecto a la importancia del trabajo de los líderes sociales para la democracia colombiana, su situación de seguridad y el compromiso del Estado para protegerlos. Como lo muestra la Gráfica 31, la mayoría de entrevistados del estudio (entre el 64.3% y 67.4%), sin importar el tipo de municipio al que pertenecen, considera que el trabajo que realizan los líderes sociales es importante para la democracia colombiana. No obstante, llama la atención que aproximadamente 4 de cada 10 entrevistados no cree o es indiferente ante la importancia de la labor de los líderes sociales para el sistema democrático nacional.

20. Se adoptó la conceptualización de líder social propuesta por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según la cual los líderes sociales son individuos que "actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación" (OACNUDH, s.f).

La mayoría de entrevistados del estudio [entre el 64.3% y 67.4%], sin importar el tipo de municipio al que pertenecen, considera que el trabajo que realizan los líderes sociales es importante para la democracia colombiana

Gráfica 31. Importancia del trabajo de los líderes sociales para la democracia



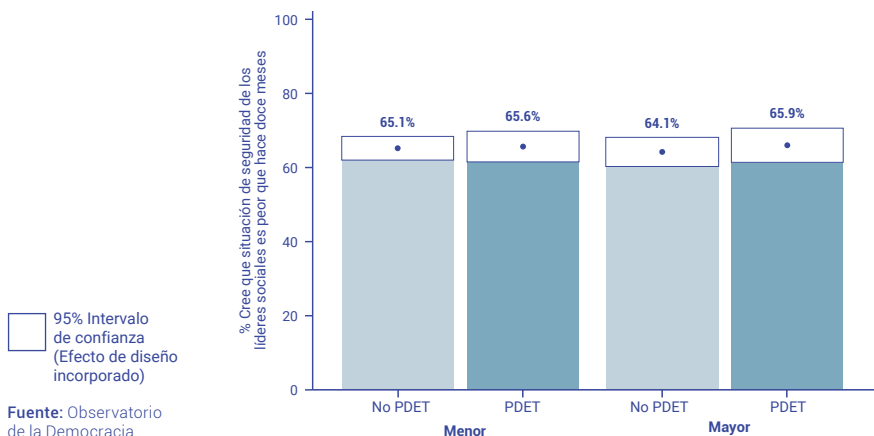
COLLIDI1. El trabajo de los líderes sociales es importante para la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el trabajo de los líderes sociales para los entrevistados, el Observatorio de la Democracia quiso conocer cómo perciben los ciudadanos la situación de seguridad de estos. Para este propósito, se preguntó a los entrevistados si consideran que la situación de seguridad de los líderes sociales es mejor, igual o peor que hace doce meses. En la Gráfica 32 se observa que 6 de cada 10 entrevistados considera

que la situación de seguridad de los líderes sociales ha empeorado en el último año. Además, llama la atención que esta proporción no se ve afectada por el nivel de exposición a la violencia y la capacidad estatal de cada población. La percepción de los entrevistados de que la seguridad de los líderes ha empeorado en el último año es consistente con las cifras oficiales al respecto, pues de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, los asesinatos de defensores de derechos humanos en el país incrementaron cerca del 50% en comparación a las cifras registradas en 2018 (OACNUDH, 2020).

6 de cada 10 entrevistados considera que la situación de seguridad de los líderes sociales ha empeorado en el último año. Esta proporción no se ve afectada por el nivel de exposición a la violencia y la capacidad estatal de cada población

Gráfica 32. Percepción frente a seguridad de los líderes sociales en el último año



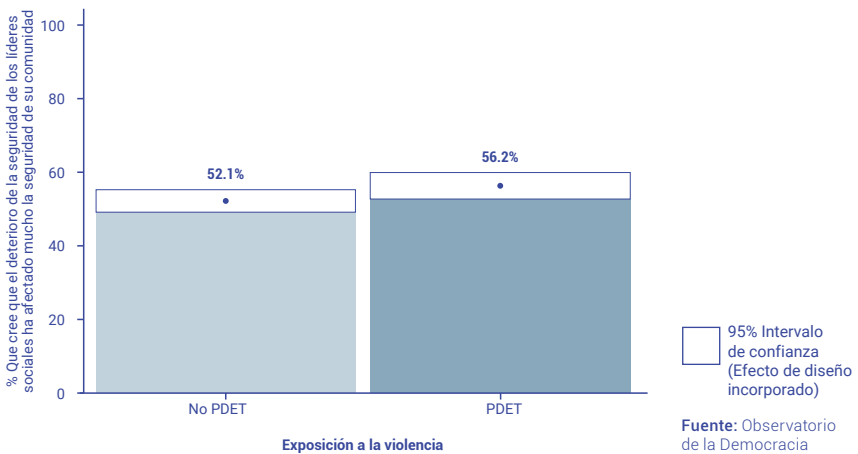
COLLIDS. ¿Considera usted que la situación de seguridad de los líderes sociales es mejor, igual o peor que hace doce meses?

El Observatorio de la Democracia también exploró la percepción de los entrevistados frente a las consecuencias que ha traído el deterioro de la seguridad de los líderes sociales en sus comunidades. La Gráfica 33 muestra que más de la mitad (54%) de los entrevistados considera que el deterioro de la seguridad de los líderes sociales ha afectado mucho la seguridad de su comunidad. Al comparar este resultado entre municipios con distinto nivel de exposición a la violencia, se encontró que en los municipios PDET una proporción significativamente mayor de entrevistados (56.2%) percibe que la seguridad de su comunidad se ha visto afectada por el deterioro en la seguridad de los líderes, en comparación con la proporción que así lo percibe en los municipios NO-PDET (52.1%) (Gráfica 33).²¹ Es posible que esta diferencia, aunque pequeña, se deba al hecho de que hay más líderes sociales en municipios PDET que en los NO-PDET. La literatura académica que ha estudiado los efectos de la guerra en el tejido social ha identificado que las personas más expuestas a la violencia tienden a incrementar su participación social, vinculándose a más grupos locales cívicos y sociales, o asumiendo roles de liderazgo en sus comunidades (Bauer *et al.*, 2016).

21. Esta diferencia es significativa al 90%.

En los **municipios PDET** una proporción significativamente mayor de entrevistados (**56.2%**) percibe que **la seguridad de su comunidad se ha visto afectada por el deterioro en la seguridad de los líderes**, en comparación con la proporción que así lo percibe en los **municipios NO-PDET** (**52.1%**)

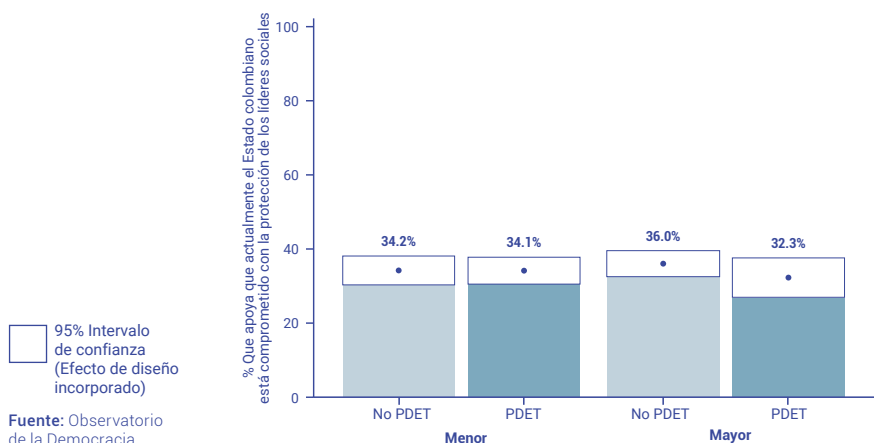
Gráfica 33. Percepción frente a las consecuencias de la seguridad de los líderes sociales en su comunidad



COLLIDS2. ¿Usted diría que el deterioro de la situación de seguridad de los líderes sociales ha afectado mucho, algo, poco o nada la seguridad de las personas de su comunidad?

En cuanto a la percepción de compromiso por parte del Estado con la protección de los líderes sociales, el Observatorio de la Democracia encontró que, en promedio, tan solo 3 de cada 10 entrevistados, sin importar el tipo de municipio, creen que el Estado colombiano está comprometido con la seguridad de los líderes (Gráfica 34). Esta percepción es consistente con las denuncias que han hecho organizaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la crítica situación de inseguridad de los líderes sociales en Colombia (Instituto Kroc, 2019; OACNUDH, 2020).

Gráfica 34. Opinión frente al compromiso del Estado con la seguridad de los líderes sociales



COLLID2. Actualmente el Estado colombiano está comprometido con la protección de los líderes sociales. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

Para cerrar, llama la atención que las opiniones y percepciones de los entrevistados con relación al tema de los líderes sociales tiendan a ser similares entre los tipos de municipio del estudio especial 2019. La única excepción es la percepción de que la situación de seguridad de los líderes afecta a sus comunidades, que es levemente más alta en los municipios PDET (56.2%), que en los NO-PDET (52.1%). Quizá, la homogeneidad en las percepciones respecto a la importancia del trabajo de los líderes sociales para la democracia colombiana, el deterioro de la situación de seguridad de los líderes sociales en el último año y el compromiso del Estado con la protección de los

líderes sociales se deban al cubrimiento que han hecho los medios de comunicación de la situación de seguridad de los líderes sociales en el país. De acuerdo con Clawson y Oxley (2008), los medios de comunicación tienen la capacidad de afectar la opinión pública de los ciudadanos y su proceso de toma de decisiones, posicionando determinados temas en la agenda de intereses de los ciudadanos. Así, es posible pensar que el manejo que le han dado los medios de comunicación al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos haga que los entrevistados piensen en esa problemática de manera parecida, independientemente del contexto en el que viven.

Es posible que el manejo que le han dado los medios de comunicación al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos haga que los entrevistados piensen en esa problemática de manera parecida, independientemente del contexto en el que viven

4.5. Conclusiones

La información presentada en este capítulo permite llegar a varias conclusiones respecto al desempeño del Estado en los municipios que hacen parte del estudio especial 2019. En términos generales, es evidente que fortalecer la capacidad del Estado debe ser una prioridad en esta fase de posacuerdo, particularmente en cuanto a la seguridad de los ciudadanos, la justicia y la protección de los derechos humanos.

La percepción de la Policía y el Ejército como garantes de seguridad incrementó después de la firma del Acuerdo de Paz, ahora 6 de cada 10 entrevistados perciben a la fuerza pública como un garante de su seguridad. Además, la percepción de la guerrilla como garante de seguridad prácticamente desapareció, pasando de 8.4%, antes del Acuerdo, a 1% en la actualidad. Estos resultados sugieren que, tras la firma del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano ganó presencia en muchos territorios a través de la Policía y el Ejército. Sin embargo, la tarea de garantizar la seguridad de los ciudadanos está lejos de cumplirse pues la mayoría de entrevistados considera que el nivel de seguridad del país es peor que hace 12 meses, y la mitad de los entrevistados se sienten inseguros ante la posibilidad de ser víctimas de un ataque perpetrado por grupos armados.

En cuanto al sistema judicial, es desalentador que, al preguntar a los entrevistados hasta qué punto creen que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo, solo 2 de cada 10 entrevistados respondieron afirmativamente. Sumado a lo anterior, una proporción similar de entrevistados del estudio *Colombia, un país más allá del conflicto* (3 de cada 10) aprueba que las personas busquen justicia por medios diferentes a los institucionales cuando el Estado no castiga a los criminales. Posiblemente, los bajos niveles de confianza en el sistema judicial inciden en las percepciones de los ciudadanos respecto a las formas adecuadas de impartir justicia. Pese a esta desconfianza en la justicia, es importante resaltar que 4 de cada 10 entrevistados creen que hoy en día las personas acuden con más frecuencia al Estado para resolver disputas con sus vecinos.

Por último, el estudio también encontró desafíos importantes en materia de protección de derechos humanos. Apenas 3 de cada 10 entrevistados en todos los municipios del estudio creen que

los derechos básicos de los ciudadanos están bien protegidos por el sistema político nacional, y la mayoría percibe que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no respetan los derechos humanos de los colombianos. En cuanto a la situación de los líderes sociales, los resultados del estudio especial 2019 muestran que la mayoría de entrevistados percibe que, aunque el trabajo que realizan los líderes es importante para la democracia colombiana, la situación de seguridad de éstos ha empeorado en los últimos 12 meses y el Estado no está comprometido con garantizar la seguridad de los líderes. Además, aproximadamente la mitad de los entrevistados cree que el deterioro de la situación de seguridad de los líderes sociales afecta a su comunidad, siendo esta percepción un poco más alta en los municipios PDET.

Desde el punto de vista de seguridad, justicia y derechos humanos, las percepciones de los ciudadanos sobre el desempeño de las instituciones del Estado colombiano son tremendamente negativas. Pese a que las Fuerzas Armadas han ganado terreno en muchos territorios, los ciudadanos residentes en los cuatro tipos de municipio incluidos en el estudio especial 2019, se sienten inseguros, confían poco en las decisiones del sistema judicial y en la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos en general y los de los líderes sociales en particular. Es importante que la fuerza pública fortalezca su presencia en las regiones y construya una relación de confianza de tal forma que los ciudadanos se sientan protegidos por el Estado y perciban que sus derechos básicos son garantizados. Igualmente es necesario que el sistema de justicia se fortalezca y se acerque a unas comunidades que desconfían profundamente de su efectividad.

En cuanto al sistema judicial, es desalentador que, al preguntar a los entrevistados hasta qué punto creen que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo, solo 2 de cada 10 entrevistados respondieron afirmativamente

Notas



5. Conclusiones generales

Los resultados que el Observatorio de la Democracia presentó en este informe permiten llegar a tres conclusiones importantes. En primer lugar, los resultados en relación a victimización y severidad de la violencia validan empíricamente el diseño de la Muestra Especial 2019. En segundo lugar, al comparar las opiniones y actitudes de los entrevistados entre los distintos tipos de municipio estudiados, la pertinencia del diseño del estudio especial 2019 es evidente, pues la variación en los niveles de exposición a la violencia y la capacidad estatal inciden de manera significativa sobre las opiniones, expectativas y actitudes de los entrevistados frente a los temas de paz y reconciliación. Por último, la tercera conclusión del estudio es que fortalecer la capacidad del Estado debe ser una prioridad en esta fase de posacuerdo en todo el territorio nacional, particularmente en cuanto a la seguridad de los ciudadanos, justicia y protección de los derechos humanos, y la implementación del Acuerdo de Paz. En los siguientes párrafos se desarrollan estos puntos.

La primera conclusión del informe es que los resultados en el tema de victimización validan empíricamente el diseño de la Muestra Especial 2019. Como se explicó al inicio, el diseño del estudio especial 2019 hace énfasis en dos de los principales retos que ha afrontado Colombia a lo largo de su historia: la violencia política y la capacidad estatal. Por lo anterior, en el diseño muestral se capturaron distintos escenarios que se desprenden de intersectar la incidencia del conflicto y la capacidad estatal, con el fin de estudiar hasta qué punto las variaciones en estos factores afectan las opiniones y comportamientos políticos y sociales de los colombianos.

En este sentido, la información presentada en el primer capítulo evidencia que, en efecto, los habitantes de los municipios PDET han estado más expuestos a la violencia. Esto último no solo porque la victimización por conflicto armado y la severidad de la violencia son más altas en los municipios PDET, en comparación con los NO-PDET, sino también porque la dinámica del conflicto armado en Colombia varía dependiendo de la capacidad estatal de cada municipio. Como se documentó en el primer capítulo del informe, una mayor proporción de entrevistados en los municipios PDET ha sido víctima del conflicto en algún momento de su vida (7 de cada 10), en comparación con la proporción de víctimas en los municipios NO-PDET (5 de cada 10). Además, los habitantes de los municipios PDET experimentaron una violencia más severa que los habitantes de los NO-PDET. En promedio, la mitad de entrevistados en los municipios PDET reportó haber sido víctima de dos o más hechos victimizantes durante el conflicto armado, mientras que en los municipios NO-PDET esta proporción desciende a la tercera parte.

Por otro lado, al intersectar la incidencia del conflicto y la capacidad estatal se encuentra que, si bien la guerrilla tenía presencia en todos los tipos de municipio, la intensidad de su control parece que disminuía en aquellos con mayor capacidad estatal, tanto PDET como NO-PDET. Por lo tanto, en los municipios PDET de menor capacidad estatal la proporción de entrevistados que reportó ser víctima de la guerrilla (49.3%) es mayor que en el resto de los municipios y que en la muestra nacional de 2018 (44.9%). En este orden de ideas, es posible pensar que la convergencia entre hacer parte de los municipios PDET y tener menor capacidad estatal hacía que el territorio fuera más vulnerable ante la presencia regional y las acciones de la guerrilla y de los actores armados ilegales en general.

En promedio, la mitad de entrevistados en los municipios PDET reportó haber sido víctima de dos o más hechos victimizantes durante el conflicto armado, mientras que en los municipios NO-PDET esta proporción desciende a la tercera parte

La segunda conclusión de este informe es que la exposición a la violencia y la capacidad estatal inciden de manera significativa en las opiniones y actitudes de los colombianos frente a la paz y la reconciliación. Esto último porque encontramos variaciones importantes entre los distintos tipos de municipio del estudio en las respuestas de los entrevistados a preguntas de la encuesta relacionadas con el Acuerdo de Paz y la reconciliación con los excombatientes de grupos armados. En particular, aunque los municipios PDET de menor capacidad estatal han sido más vulnerables a las dinámicas de la guerra, en este tipo de municipios la población tiende a tener percepciones y actitudes más positivas frente al posconflicto y la reconciliación.

Como se documentó a lo largo del segundo y tercer capítulo de este informe, el apoyo a la salida negociada es significativamente más alto (82.4%) en los municipios más expuesto a la violencia y de menor capacidad estatal, en comparación con los municipios con mayor capacidad estatal, sin importar el nivel de exposición a la violencia (75% en promedio). Igualmente, mientras que en los municipios PDET de menor capacidad, la mayoría de los entrevistados (6 de cada 10) apoya el Acuerdo de Paz, en el resto de los municipios aproximadamente la mitad de los entrevistados lo apoya. En cuanto al respaldo a los componentes específicos del Acuerdo de Paz, vemos que los municipios más expuestos a la violencia y de menor capacidad estatal apoyan más la implementación de los PDET (77%) que los municipios menos expuestos a la violencia y con mayor capacidad estatal (71%). Asimismo, en el caso de las curules para las regiones más afectadas por el conflicto, los entrevistados de los municipios NO-PDET de mayor capacidad estatal apoyan significativamente menos esta política (68%), en comparación con los entrevistados en el resto de los municipios (75%). Finalmente, en los municipios PDET de menor capacidad estatal hay un respaldo significativamente más alto -aunque no mayoritario- a la participación política de las FARC (28%), que en los otros tipos de municipio.

El apoyo a la salida negociada es significativamente más alto [82.4%] en los municipios más expuesto a la violencia y de menor capacidad estatal, en comparación con los municipios con mayor capacidad estatal, sin importar el nivel de exposición a la violencia [75% en promedio]

Más aún, al comparar las expectativas de los entrevistados entre los distintos tipos de municipio del estudio, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los municipios PDET de menor capacidad estatal y el resto de los municipios, particularmente respecto a los temas de seguridad y situación económica del municipio. Mientras en los municipios PDET de menor capacidad estatal el 61% de entrevistados espera que la implementación del Acuerdo mejore la seguridad y el 55% espera que mejore la situación económica, en el resto de los municipios una menor proporción de entrevistados espera lo mismo frente a estos dos temas (55% y 49%, respectivamente). A su vez, mientras en los municipios PDET de menor capacidad estatal 4 de cada 10 entrevistados percibe que el Presidente Iván Duque contribuye al cumplimiento de lo pactado, en los municipios PDET de mayor capacidad estatal 3 de cada 10 así lo perciben.

Por otra parte, también encontramos diferencias entre los distintos municipios en la disposición de los entrevistados a convivir con excombatientes desmovilizados de las FARC en diferentes espacios, como el vecindario, el trabajo y el colegio de los hijos. En este caso, la capacidad estatal no tiene un papel relevante, pues en comparación con los municipios NO-PDET, tanto de menor como de mayor capacidad estatal, los entrevistados en los municipios PDET están significativamente más dispuestos a compartir sus espacios de la vida cotidiana con excombatientes. En los municipios PDET, una proporción significativamente mayor de entrevistados aceptaría desmovilizados en su vecindario (77%), en comparación con los municipios NO-PDET (72%), sin importar su nivel de capacidad estatal. De igual forma, la aceptación de los desmovilizados como compañeros de trabajo es significativamente mayor en los municipios PDET (52%), frente a los municipios NO-PDET, tanto de menor como de mayor capacidad estatal (45%). Finalmente, en el ámbito que tiene que ver con sus hijos, los entrevistados de los municipios PDET están más dispuestos a convivir con desmovilizados o sus hijos (50%), que los entrevistados de los municipios NO-PDET con menor y mayor capacidad estatal (43%, en promedio).

Una proporción significativamente mayor de entrevistados **aceptaría desmovilizados en su vecindario [77%]**, en comparación con los municipios **NO-PDET [72%]**, sin importar su nivel de capacidad estatal

Los resultados presentados en este informe parecerían indicar que la vulnerabilidad de la población frente a la violencia del conflicto armado incide positivamente en sus percepciones y actitudes frente a la paz. En informes de años anteriores se ha argumentado que la mayor exposición a la violencia se traduce en actitudes más favorables frente a las medidas que conducen a una paz negociada, posiblemente debido a la necesidad de terminar con el riesgo permanente de ser víctimas del conflicto (ver: Ávila *et al.*, 2017). Otro factor que podría incidir en la disposición de los entrevistados en municipios PDET es la resiliencia de las víctimas, entendida como la capacidad de lidiar con la adversidad. La literatura en este campo argumenta que, en vez de sufrir persistentemente y alimentar sentimientos de odio hacia los victimarios, las víctimas de la violencia desarrollan mecanismos para afrontar el estrés emocional, como por ejemplo la mayor participación en organizaciones sociales y el mayor apoyo a las negociaciones de paz (Nussio, 2019; Nussio, Rettberg & Ugarriza, 2015).

Aunque se requieren estudios más detallados para entender los mecanismos que explican la relación entre exposición a la violencia, capacidad estatal y opiniones y actitudes frente a la paz y la reconciliación, este informe presentó resultados de un ejercicio especial que apunta en la dirección de la literatura de la resiliencia. Con el objetivo de entender los efectos psicológicos de la guerra y su incidencia sobre las actitudes de reconciliación, el Observatorio de la Democracia incluyó en la encuesta la traducción al español de la escala K6 de malestar psicológico inespecífico, la cual indaga por una serie de síntomas vinculados al malestar psicológico.

Se encontró que la severidad de la victimización vivida en las familias de los entrevistados afecta negativamente su salud mental, particularmente aumentando la prevalencia de síntomas de malestar psicológico como nerviosismo, intranquilidad, desesperanza, depresión y la sensación de que todo cuesta un gran esfuerzo. Sin embargo, los resultados indican que los síntomas de malestar psicológico no se traducen en estereotipos que contribuyan a la polarización y generen pesimismo sobre los procesos de reconciliación. Tampoco hay evidencia de que el malestar psicológico limite la capacidad de las víctimas para interactuar con los victimarios en actividades cotidianas. Por el contrario, se encontró que la exposición a la violencia está asociada con actitudes más positivas frente a la reconciliación. Pese a las secuelas psicológicas de la violencia, la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación y la disposición a convivir con desmovilizados aumentan a medida que las familias de los entrevistados han sido víctimas de una violencia más severa.

Finalmente, la tercera conclusión principal de este informe es que, independientemente del nivel de exposición a la violencia y de la capacidad estatal del municipio, el fortalecimiento de la capacidad estatal es un reto importante para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El estudio especial 2019 encontró que en todos los municipios del estudio, sin importar los niveles de exposición al conflicto y capacidad estatal, hay evidentes desafíos en aspectos de la capacidad estatal que inciden en la posibilidad de que Colombia sea un país pacífico. Como se describe en los siguientes párrafos, es necesario que el país avance en temas de seguridad, justicia, garantía de derechos básicos, y la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en 2016.

**Es necesario que el país
avance en temas de
seguridad, justicia, garantía
de derechos básicos, y
la implementación del
Acuerdo de Paz firmado
entre el Gobierno nacional
y las FARC-EP en 2016**

En materia de seguridad, es importante resaltar que el estudio *Colombia, un país más allá del conflicto* identificó algunos cambios positivos tras la firma del Acuerdo de Paz. Por un lado, al comparar los niveles de victimización histórica y en el último año entre los municipios PDET y NO-PDET, es claro que la firma del Acuerdo desdibujó la brecha de victimización histórica entre municipios PDET (7 de cada 10) y NO-PDET (5 de cada 10), homogenizando la victimización en el último año al 10% en todos los tipos de municipio de la muestra. Otra buena noticia es que la percepción de la Policía y el Ejército como garantes de seguridad incrementó después de la firma del Acuerdo de Paz, pasando del 52.9% antes de la firma del Acuerdo, al 58.4% en la actualidad. Además, la percepción de la guerrilla como garante de seguridad prácticamente desapareció, pasando del 8.4% antes del acuerdo al 1% en la actualidad.

Pese a los avances descritos en el párrafo anterior, el estudio especial 2019 también evidenció desafíos importantes en materia de seguridad. Por un lado, es preocupante que la población en los municipios de la Muestra Especial 2019 siga estando expuesta a la violencia del conflicto armado, pues tres años después de la firma del Acuerdo de Paz el 10% de los entrevistados reportó algún caso de victimización durante el último año. Además, la mayoría de entrevistados considera que la seguridad del país se ha deteriorado en los últimos 12 meses, y todavía hay entrevistados que no perciben a la fuerza pública como un garante de seguridad (4 de cada 10). También es importante resaltar que la mitad de los entrevistados se sienten inseguros ante la posibilidad de ser víctimas de un ataque perpetrado por grupos armados en todos los tipos de municipio. Más aún, el informe encontró que la percepción de inseguridad incide negativamente en la salud mental de los entrevistados, aumentando la prevalencia de síntomas de malestar psicológico como nerviosismo, desesperanza, intranquilidad, depresión, entre otros. Estos resultados advierten la necesidad de que el Estado colombiano haga esfuerzos por fortalecer su capacidad estatal de tal forma que se garantice la seguridad de los ciudadanos y disminuya la percepción de inseguridad.

La percepción de inseguridad incide negativamente en la salud mental de los entrevistados, aumentando la prevalencia de síntomas de malestar psicológico como nerviosismo, desesperanza, intranquilidad, depresión, entre otros

Los resultados del estudio Muestra Especial 2019 son igualmente desalentadores si se tiene en cuenta la percepción de los entrevistados acerca de la protección de derechos humanos. Apenas 3 de cada 10 entrevistados en todos los municipios del estudio creen que los derechos básicos de los ciudadanos están bien protegidos por el sistema político nacional, y la mayoría percibe que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no respetan los derechos humanos de los colombianos. En cuanto a la situación de los líderes sociales, los resultados del estudio especial 2019 muestran que la mayoría de entrevistados en todos los municipios del estudio percibe que, aunque el trabajo que realizan los líderes es importante para la democracia colombiana, la situación de seguridad de éstos ha empeorado en los últimos 12 meses y el Estado no está comprometido con garantizar la seguridad de los líderes. Además, aproximadamente la mitad de los entrevistados percibe que el deterioro de la situación de seguridad de los líderes sociales afecta a su comunidad.

El estudio especial 2019 también identificó retos importantes en el tema de justicia. Al preguntar a los entrevistados hasta qué punto creen que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo, en promedio solo 2 de cada 10 entrevistados respondieron que confía en los juicios de los tribunales. Sumado a lo anterior, una proporción similar de entrevistados del estudio *Colombia*,

un país más allá del conflicto (3 de cada 10) aprueba que las personas busquen justicia por medios diferentes a los institucionales cuando el Estado no castiga a los criminales. No obstante, parecería que la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial tiende a mejorar, pues 4 de cada 10 entrevistados creen que hoy en día las personas acuden con más frecuencia al Estado para resolver disputas con sus vecinos, y no hay diferencias estadísticamente significativas al comparar entre los tipos de municipio del estudio Muestra Especial 2019.

Otro frente importante en el que la capacidad estatal debe fortalecerse tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Esto último porque la mayoría de entrevistados tiene altas expectativas con respecto a las mejoras que traerá la implementación del Acuerdo, siendo el acceso a la tierra por parte de los campesinos (64%) y la seguridad local (57%) los temas que más expectativas generan entre los entrevistados. Sin embargo, las expectativas frente a estos temas contrastan con la opinión de los entrevistados acerca del estado del cumplimiento del Acuerdo, dado que solo 1 de cada 10 entrevistados considera que se están cumpliendo la mayoría de los puntos acordados, sin importar el tipo de municipio. Además, apenas 4 de cada 10 entrevistados consideran que el Presidente Duque contribuye a la implementación del Acuerdo.

La mayoría de entrevistados tiene altas expectativas con respecto a las mejoras que traerá la implementación del Acuerdo, siendo el acceso a la tierra por parte de los campesinos [64%] y la seguridad local [57%] los temas que más expectativas generan entre los entrevistados

Para cerrar, este informe pone en evidencia la importancia de estudiar el contexto colombiano de posacuerdo desde una perspectiva amplia, entendiendo que la intersección entre exposición a la violencia y capacidad estatal incide no solamente en las dinámicas de guerra que vivieron los distintos territorios, sino también en las opiniones, expectativas y actitudes de los habitantes frente a la paz y la reconciliación. Además, el informe mostró que, pese a las diferencias encontradas, los municipios estudiados se parecen en muchos temas que evidencian desafíos importantes para el país en términos de capacidad estatal. Así, vemos que hay un país más allá del más afectado por el conflicto, que es vulnerable y que requiere de mucha atención. Desde esta perspectiva, el estudio *Colombia, un país más allá del conflicto* hace una contribución importante para el país en esta fase de posacuerdo, al complejizar el análisis de la opinión pública frente a la paz y la reconciliación, y al señalar algunos de los principales desafíos que enfrenta el país, en términos de capacidad estatal, para la construcción de una paz estable y duradera.

Notas



Referencias

Acharya, A., Blackwell, M., & Sen, M. (2016). Explaining Causal Findings Without Bias: Detecting and Assessing Direct Effects. *American Political Science Review*, 110(3), 512-529. <https://doi.org/10.1017/S0003055416000216>

Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (2016). Colombia. <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). (2020). Articulación reincorporación – PDET. Colombia. <http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/PDET/PDET%20-%20General%20-%20Enero.pdf>

Angulo, M., Ortiz, A. & Pantoja, S. (2014). Análisis de las percepciones de los colombianos sobre el proceso de paz y el posacuerdo desde una perspectiva de género. *Colombia Internacional*. No.80. <http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint80.2014.07>

Ávila, C., García-Sánchez, M., Gaviria, A., & Plata, J. (2017). Colombia Rural Posconflicto. Paz, Posconflicto y Reconciliación. Observatorio de la Democracia. Universidad de los Andes. <https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/datos/>

Ávila, C., García-Sánchez, M., & Gaviria, A. (2018). Paz, Posconflicto y Reconciliación. Observatorio de la Democracia. Universidad de los Andes. <https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/datos/>

Balcells, L. (2012) The Consequences of Victimization on Political Identities: Evidence from Spain. *Politics & Society* 40(3): 311–347.

Bauer, M., Blattman, C., Chytilová, J., Henrich, J., Miguel, E., & Mitts, T. (2016). Can War Foster Cooperation? *Journal of Economic Perspectives*, 30(3), 249-274. <https://doi.org/10.1257/jep.30.3.249>

Bonanno, G. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events? *American Psychologist*, 59(1), 20-28. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20>

Canetti-Nisim, D., Halperin, E., Sharvit, K., & Hobfoll, S. (2009). A New Stress-Based Model of Political Extremism: Personal Exposure to Terrorism, Psychological Distress, and Exclusionist Political Attitudes. *Journal of Conflict Resolution*, 53(3), 363-389. <https://doi.org/10.1177/0022002709333296>

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 192.

Clawson, R., & Oxley, M. (2008). Mass Media. Public Opinion. Democratic Ideals, Democratic Practices. 76-92. Washington: CQ Press.

Comisión Colombiana de Juristas. (2007). Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Bogotá: Opciones Gráficas Editores Ltda.

Duque, T. (2017). El Congreso del No. La Silla Nacional. 30 de noviembre de 2017. Colombia: La Silla Vacía. <https://lasillavacia.com/el-congreso-del-no-63711>

Flink, I., Restrepo, M., Blanco, D., Ortegón, M., Enríquez, C., Beirens, T., & Raat, H. (2013). Mental health of internally displaced preschool children: A cross-sectional study conducted in Bogotá, Colombia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48(6), 917-926. <https://doi.org/10.1007/s00127-012-0611-9>

García-Sánchez, M., y Plata, J. (2020f). Between Conflict and Democracy. Understanding Popular Support for FARC's Political Involvement.

Goldstein H., & Healy, M. (1998). The Graphical Presentation of a Collection of Means, *Journal of the Royal Statistical Society*, Vol. 158, No. 1, 175-177.

Grossman, G., Manekin, D., & Miodownik, D. (2015). The Political Legacies of Combat: Attitudes Toward War and Peace Among Israeli Ex-Combatants. *International Organization* 69(4): 981-1009. <https://doi.org/10.1017/S002081831500020X>

Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ). (2019). Informe líderes y defensores de DDHH asesinados al 26 de julio de 2019. Colombia. <http://www.indepaz.org.co/informe-lideres-y-defensores-de-ddhh-asesinados-al-26-de-julio-de-2019/>

Instituto Kroc. (2019). Informe 3. Estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz de Colombia 2 años de implementación. Diciembre 2016 – Diciembre 2018. University of Notre Dame: Keough School of Global Affairs. https://kroc.nd.edu/assets/321729/190523_informe_3_final_final.pdf

Instituto Nacional de Salud – INS (2018). Efectos del conflicto armado en la salud mental de las víctimas. Noveno informe técnico ONS / No. 2 - 2017. https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/publicaciones%20alternas/boletin11_saludMental/recomendaciones.html

Knezevic, A. (2008). Overlapping Confidence Intervals and Statistical Significance. Cornell Statistical Consulting Unit.

Liendo, N., & Braithwaite, J. (2018). Determinants of Colombian attitudes toward the peace process. *Conflict Management and Peace Science*, 35(6), 622-636. <https://doi.org/10.1177/0738894218787783>

Mac, R. (2014). Everyday peace: Bottom-up and local agency in conflict-affected societies. *Security Dialogue*, 45(6), 548-564. <https://doi.org/10.1177/0967010614550899>

Mollica, R., McInnes, K., Pool, C., & Tor, S. (1998). Dose-effect relationships of trauma to symptoms of depression and post-traumatic stress disorder among Cambodian survivors of mass violence. *British Journal of Psychiatry*, 173(6), 482-488. <https://doi.org/10.1192/bjp.173.6.482>

Nadler, A., & Shnabel, N. (2015). "Intergroup Reconciliation: Instrumental and Socio-Emotional Processes and the Needs-Based Model". *European Review of Social Psychology* (26) 1: 93-125. <https://doi.org/10.1080/10463283.2015.1106712>

Nussio, E., & Ugarriza, J. E. (2013). Are Insurgents Any Different from Counterinsurgents? A Systematic Integration and Validation of Motivational Studies from Colombia. *ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2311442>

Nussio, E., Rettberg, A., & Ugarriza, J. E. (2015). Victims, Nonvictims and Their Opinions on Transitional Justice: Findings from the Colombian Case. *International Journal of Transitional Justice*, 9(2), 336-354. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijv006>

Nussio, E. (2019). Can Crime Foster Social Participation as Conflict Can?. *Social Science Quarterly*, 100(3), 653-665. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12607>

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2019). Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año

2018. <https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe-anual-colombia-2018-ESP.pdf>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (s.f.). Sobre los defensores de los derechos humanos. <https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/defender.aspx>

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2020). Situación de los derechos humanos en Colombia. Consejo de Derechos Humanos. <https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2019-ES-2.pdf>

Tamayo, N., Rincón, C, de Santacruz, C., Bautista, N., Collazos, J., & Gómez–Restrepo, C. (2016). Problemas mentales, trastornos del afecto y de ansiedad en la población desplazada por la violencia en Colombia, resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45, 113-118. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.09.004>

Ugarriza, J., & Nussio, E. (2017). The Effect of Perspective-Giving on Postconflict Reconciliation. An Experimental Approach: The Effect of Perspective-Giving. *Political Psychology*, 38(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/pops.12324>

Fergusson, L., Hiller, T., Ibáñez, A. M., & Moya, A. (2018). Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación (Reconciliation once Conflict Ends in Colombia. The Role of Violence, Social and Political Participation, and the State on Attitudes towards Reconciliation). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3285483>

Moya, A. (2018). Violence, psychological trauma, and risk attitudes: Evidence from victims of violence in Colombia. *Journal of Development Economics*, 131, 15-27. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.11.001>

Moya, A., & Carter, M. R. (2019). Violence and the formation of hopelessness: Evidence from internally displaced persons in Colombia. *World Development*, 113, 100-115. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.015>

Kessler, R. C., Green, J. G., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Bromet, E., Cuitan, M., Furukawa, T. A., Gureje, O., Hinkov, H., Hu, C.-Y., Lara, C., Lee, S., Mneimneh, Z., Myer, L., Oakley-Browne, M., Posada-Villa, J., Sagar, R., Viana, M. C., & Zaslavsky, A. M. (2010). Screening for serious mental illness in the general population with the K6 screening scale: Results from the WHO World Mental Health (WMH) survey initiative. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 19(S1), 4-22. <https://doi.org/10.1002/mpr.310>

Krause, D. (2017). Who wants peace? - The role of exposure to violence in explaining public support for negotiated agreements : A quantitative analysis of the Colombian peace agreement referendum in 2016 (Dissertation). <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-325130>

Tellez, J. F. (2018). Worlds Apart: Conflict Exposure and Preferences for Peace. *Journal of Conflict Resolution*, 002200271877582. <https://doi.org/10.1177/0022002718775825>

Bar-Tal, D., & Jacobson, D. (1998). A Psychological Perspective on Security. *Applied Psychology*, 47(1), 59-71. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1998.tb00013.x>

Vélez, M. A., Trujillo, C. A., Moros, L., & Forero, C. (2016). Prosocial Behavior and Subjective Insecurity in Violent Contexts: Field Experiments. *PLOS ONE*, 11(7), e0158878. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158878>

Anexos

Modelos de regresión

Tabla A.1. Estimación de modelo de actitudes favorables a la participación política de las FARC (modelo logit), Muestra Especial 2019

Esta tabla presenta las salidas de los ejercicios estadísticos realizados por el Observatorio de la Democracia con la base de datos de la Muestra Especial de 2019, para estudiar los factores asociados a las actitudes frente a la participación política de excombatientes desmovilizados de las FARC. Se estimó una regresión (modelo logit) donde la variable dependiente es la respuesta de los entrevistados frente a la pregunta de hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo con que los excombatientes desmovilizados de las FARC presenten candidatos a elecciones.

La tabla presenta los coeficientes y los errores estándar (entre paréntesis). Además, para cada variable, la tabla señala con uno (*), dos (**) o tres asteriscos (***) el nivel de significancia estadística de la variable, al 90%, 95% o 99%, respectivamente.

	Apoyo a la participación política de las FARC
Víctima	0.039 (0.031)
Cercanía al Centro Democrático	-0.042 (0.021)*
Tolerancia política	0.198 (0.018)***
Apoyo a la democracia	0.115 (0.026)***
PDET	0.107 (0.097)
Mayor capacidad estatal	-0.171 (0.092)*
Edad	0.020 (0.003)***
Mujer	-0.518 (0.083)***

Nivel educativo	0.192 (0.060)***
Zona urbana	-0.110 (0.091)
Constante	-3.358 (0.274)***
N	3,666

Tabla A.2. Estimación de modelo de probabilidad de padecer malestar psicológico (modelo logit), Muestra Especial 2019

Esta tabla presenta los resultados de una estimación estadística realizada por el Observatorio de la Democracia con la base de datos de la Muestra Especial de 2019, para estudiar los factores asociados al riesgo de padecer malestar psicológico. Se estimó un modelo logit donde la variable dependiente es dicotómica, tomando el valor de 1 cuando la puntuación del entrevistado en la escala K6 supera el punto de corte a partir del cual se considera está en riesgo de padecer malestar psicológico (Kessler, 2010). La tabla presenta los coeficientes y los errores estándar (entre paréntesis). Además, para cada variable, la tabla señala con uno (*), dos (**) o tres asteriscos (***) el nivel de significancia estadística de la variable, al 90%, 95% o 99%, respectivamente.

	Riesgo de padecer malestar psicológico
Severidad baja	0.166 (0.68)
Severidad alta	0.503 (2.95)**
Víctima en el último año	0.608 (2.62)*
Se siente inseguro (ataque grupo armado)	0.519 (3.04)**
Mujer	0.225 (1.55)
Edad	0.008 (1.59)
PDET	-0.175 (1.13)

Mayor capacidad estatal	0.212 (1.39)
Constante	-2.515 (8.00)**
N	1,275

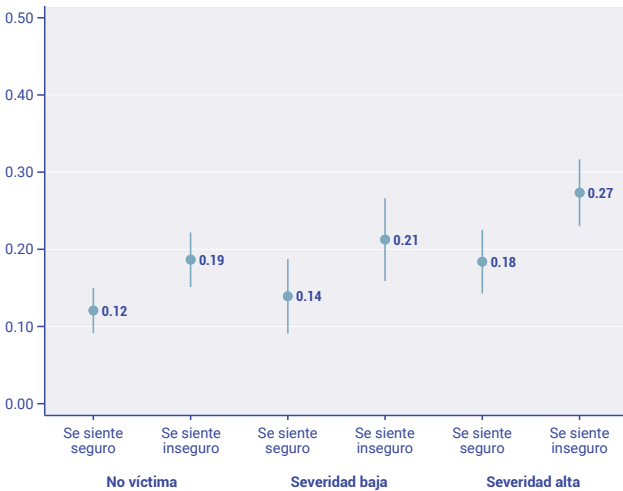
A partir de esta regresión, se analizó la interacción entre hechos victimizantes en el hogar y percepción de inseguridad. Para diferentes valores de las variables independientes de interés (severidad de la victimización y percepción de inseguridad frente a la posibilidad de un ataque de un grupo armado), se estimaron las probabilidades de padecer malestar psicológico, ajustando las demás variables a sus valores medios. En la gráfica se muestran estas probabilidades esperadas con su intervalo de confianza del 95%.

La Gráfica 35 indica que la probabilidad de padecer malestar psicológico aumenta considerablemente cuando la violencia vivida en la familia del entrevistado converge con una sensación de inseguridad. Por ejemplo, en comparación con una persona que no reportó hechos victimizantes en su familia, y que se siente segura en el lugar donde vive frente a la posibilidad de un ataque de un grupo armado, la probabilidad de sufrir malestar psicológico (12%) es 15 puntos porcentuales más alta cuando la familia del entrevistado ha vivido al menos 2 hechos victimizantes (severidad alta) y además se siente inseguro en el lugar donde vive (27%). Asimismo, si comparamos la probabilidad de padecer malestar psicológico entre los entrevistados cuya familia ha estado expuesta a una violencia de severidad alta, encontramos que la percepción de inseguridad en el lugar donde vive aumenta significativamente el riesgo de padecer malestar psicológico. La probabilidad pasa del 18% cuando el entrevistado se siente seguro, al 27% cuando se siente inseguro.

En todo caso, es importante interpretar los resultados de este ejercicio con cautela, entendiendo que las relaciones entre las variables son asociaciones que no necesariamente implican causalidad. Esto último porque la percepción de inseguridad puede ser en sí misma un efecto del malestar psicológico, y no una causa. De acuerdo con el modelo de extremismo político basado en el estrés, propuesto por Canetti-Nisim et al. (2009), las experiencias traumáticas pueden conducir a un estado en el que la percepción de amenaza es alta. En este sentido, el malestar psicológico sería la causa de la percepción de inseguridad, y no al revés. Siguiendo este razonamiento, es posible que la percepción de inseguridad de

los entrevistados de la Muestra Especial frente a posibles ataques de grupos armados sea, en alguna medida, la manifestación de una secuela psicológica de sus experiencias previas de victimización. Sin embargo, esto no implica que la percepción de inseguridad deje de ser una potencial causa del malestar psicológico que sea relevante tener en cuenta. Además, la Gráfica 35 muestra que, aun entre los entrevistados de la Muestra Especial que no reportaron hechos victimizantes, el riesgo de padecer malestar psicológico es significativamente más alto cuando se sienten inseguros en el lugar donde viven frente a posibles ataques de grupos armados.²²

Gráfica 35. Probabilidad de padecer malestar psicológico (escala K6), según severidad de la violencia sufrida en sus familias y percepción de inseguridad frente a ataque de un grupo armado



Fuente: Observatorio de la Democracia

22. El Observatorio de la Democracia corroboró estos resultados a través de un análisis de mediación. El ejercicio consiste en calcular el efecto directo promedio controlado (ACDE, por sus siglas en inglés) de la percepción de inseguridad en la salud mental. Al ser controlado, quiere decir que se tiene en cuenta el efecto que pueden tener las experiencias de victimización en las percepciones de inseguridad. El ACDE es, en otras palabras, la manera en la que la sensación de inseguridad de los entrevistados de la Muestra Especial afecta su salud mental, independientemente del efecto de la victimización en su salud mental. Siguiendo el método propuesto por Acharya *et al.* (2016), se encontró que, tras controlar por el efecto de la victimización en la salud mental, el efecto de la percepción de inseguridad sigue siendo significativo y positivo. Esto quiere decir que, independientemente de las experiencias de victimización de los entrevistados del estudio, sus percepciones de inseguridad inciden de manera significativa en su salud mental.

Tabla A.3. Estimación de modelos de actitudes favorables al perdón y la reconciliación entre ciudadanos y excombatientes de las FARC (logit) , Muestra Especial 2019

Esta tabla presenta los resultados de los ejercicios estadísticos realizados por el Observatorio de la Democracia con la base de datos de la Muestra Especial de 2019, para estudiar los factores asociados a las actitudes de reconciliación entendidas como la creencia de que es posible el perdón y la reconciliación. La tabla presenta los coeficientes y los errores estándar (entre paréntesis). Además, para cada variable, la tabla señala con uno (*), dos (**) o tres asteriscos (***) el nivel de significancia estadística de la variable, al 90%, 95% y 99%, respectivamente.

Se estimaron cuatro modelos de regresión. En el primer modelo, las variables de interés son las experiencias de victimización de los entrevistados, en una escala de 0 a 5 que mide la cantidad de hechos victimizantes que los entrevistados reportaron haber experimentado en su familia, así como la puntuación en la escala de malestar psicológico K6. También se incluyeron otras variables independientes que afectan las actitudes de reconciliación de los entrevistados, tales como el género, la percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz, la confianza interpersonal, la cercanía al Centro Democrático, dos variables dicotómicas que identifican si el municipio es PDET y si su nivel de capacidad estatal es mayor, y otras variables de control.²³ En la segunda columna se reportan los resultados de un modelo que omite la puntuación en la escala de síntomas de malestar psicológico, y la tercera columna presenta el mismo modelo pero esta vez omitiendo las experiencias de victimización. Por último, la cuarta columna presenta los resultados de un ejercicio de mediación. Siguiendo el método propuesto por Acharya et al. (2016), el ejercicio consiste en calcular el efecto directo promedio controlado (ACDE, por sus siglas en inglés) de la victimización en las actitudes de reconciliación. En otras palabras, se busca identificar si existen mecanismos distintos al malestar psicológico que expliquen el efecto de la severidad de la victimización en las actitudes de reconciliación.

23. El género es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el entrevistado es mujer y 0 si es hombre. La percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que los entrevistados perciben que nada de lo acordado entre el Gobierno y las FARC ha sido puesto en marcha, y 5 que todo lo acordado ha sido puesto en marcha. La confianza interpersonal se mide en una escala de 1 a 4, donde 1 indica que el entrevistado considera que la gente de su comunidad no es nada confiable, y 4 que la gente de su comunidad es muy confiable. Por último, la cercanía al Centro Democrático se mide en una escala de 1 a 7, donde 1 implica que los entrevistados no se sienten nada cercanos a este partido político, y 7 que se sienten muy cercanos al mismo. Como variables de control, se incluyeron la edad, el nivel educativo, y si es zona urbana o rural.

Tras controlar por el efecto de la salud mental en las actitudes de reconciliación, el efecto de la victimización sigue siendo significativo y positivo. Se encontró que, independientemente de las secuelas psicológicas de la guerra, existen otros mecanismos que explican por qué las experiencias de victimización inciden de manera positiva en la probabilidad de que los entrevistados vean posible el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes.²⁴

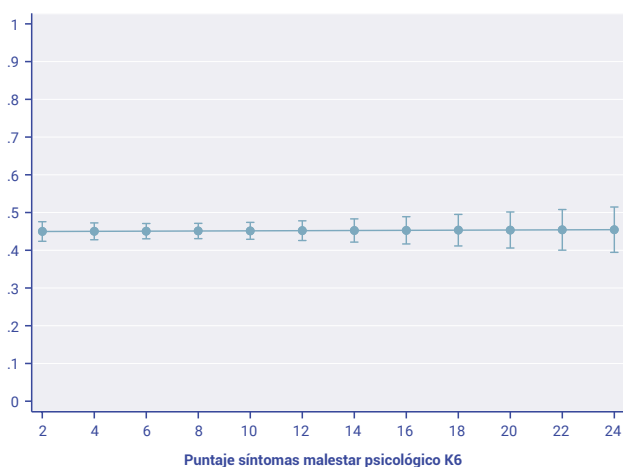
	(1)	(2)	(3)	(4)
Victimización	0.071 (2.54)*	0.070 (2.62)*		0.017 (2.72)**
Puntuación en escala malestar psicológico (K6)	-0.002 (0.20)		0.001 (0.13)	
Mujer	-0.447 (5.57)**	-0.454 (6.11)**	-0.453 (5.65)**	-0.115 (6.93)**
Percepción cumplimiento Acuerdo de Paz	0.256 (7.75)**	0.260 (7.89)**	0.256 (7.76)**	
Confianza interpersonal	0.177 (4.76)**	0.184 (5.03)**	0.174 (4.67)**	
Cercanía al Centro Democrático	-0.039 (2.01)*	-0.041 (2.17)*	-0.038 (1.96)	
Edad	0.018 (5.57)**	0.018 (5.58)**	0.018 (5.59)**	0.005 (6.71)**
Nivel educativo	0.400 (6.03)**	0.399 (6.08)**	0.400 (6.03)**	0.085 (6.24)**
Zona urbana	-0.100 (1.23)	-0.098 (1.19)	-0.095 (1.16)	-0.037 (2.10)*
PDET	0.071 (0.79)	0.086 (0.97)	0.099 (1.11)	0.018 (0.83)
Mayor capacidad estatal	0.080 (0.89)	0.082 (0.92)	0.072 (0.80)	0.002 (0.09)
Constante	-2.514 (9.59)**	-2.557 (10.12)**	-2.450 (9.43)**	0.155 (3.44)**
N	3,430	3,517	3,430	3,788

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$

24. Es importante tener en cuenta que uno de los supuestos del modelo es que no hay variables omitidas que expliquen el efecto de la violencia y de la salud mental en las actitudes de reconciliación (Acharya *et al.*, 2016). Este supuesto puede no ser realista, pues es muy probable que el efecto de la victimización en las actitudes de reconciliación pueda explicarse a través de mecanismos que no hayan sido capturados por el estudio.

Como se reporta en la primera y tercera columna de la tabla, en ningún modelo es significativa la variable de malestar psicológico. Para ilustrar este resultado, a partir del tercer modelo se estimaron las probabilidades de ver posible el perdón y la reconciliación para diferentes valores de puntuación en la escala de malestar psicológico K6, manteniendo las otras variables de la regresión en su valor promedio. Como lo muestra la Gráfica 36, para todos los valores de la escala de malestar psicológico K6 el coeficiente se ubica entre 0.4 y 0.5. En otras palabras, estos resultados indican que los síntomas de malestar psicológico no tienen incidencia sobre las actitudes hacia el perdón y la reconciliación.²⁵

Gráfica 36. Efectos del malestar psicológico (escala K6) sobre las actitudes hacia el perdón y la reconciliación



Fuente: Observatorio de la Democracia

25. En las gráficas se muestran las predicciones con su intervalo de confianza del 95%.

Tabla A.4. Estimación de modelos de actitudes favorables a la convivencia con excombatientes (regresión lineal), Muestra Especial 2019

Esta tabla presenta las salidas de los ejercicios estadísticos realizados por el Observatorio de la Democracia con la base de datos de la Muestra Especial de 2019, para estudiar los factores asociados a las actitudes de reconciliación entendidas como la disposición a convivir con desmovilizados. La tabla presenta los coeficientes y los errores estándar (entre paréntesis). Además, para cada variable, la tabla señala con uno (*), dos (**) o tres asteriscos (***) el nivel de significancia estadística de la variable, al 90%, 95% y 99%, respectivamente.

Se estimaron cuatro regresiones lineales. En el primer modelo, las variables de interés son las experiencias de victimización de los entrevistados, en una escala de 0 a 5 que mide la cantidad de hechos victimizantes que los entrevistados reportaron haber experimentado en su familia, así como la puntuación en la escala de malestar psicológico K6. También se incluyeron otras variables independientes que afectan las actitudes de reconciliación de los entrevistados, tales como el género, la percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz, la confianza interpersonal, la cercanía al Centro Democrático, dos variables dicotómicas que identifican si el municipio es PDET y si su nivel de capacidad estatal es mayor, y otras variables de control.²⁶ En la segunda columna se reportan los resultados de un modelo que omite la puntuación en la escala de síntomas de malestar psicológico, y la tercera columna presenta el mismo modelo pero esta vez omitiendo las experiencias de victimización. Por último, la cuarta columna presenta los resultados de un ejercicio de mediación. Siguiendo el método propuesto por Acharya *et al.* (2016), el ejercicio consiste en calcular el efecto directo promedio controlado (ACDE, por sus siglas en inglés) de la victimización en la disposición a convivir con excombatientes. En otras palabras, se busca identificar si existen mecanismos distintos al malestar psicológico que expliquen el efecto de la severidad de la victimización en la disposición a convivir con excombatientes.

26. El género es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el entrevistado es mujer y 0 si es hombre. La percepción de cumplimiento del Acuerdo de Paz se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que los entrevistados perciben que nada de lo acordado entre el Gobierno y las FARC ha sido puesto en marcha, y 5 que todo lo acordado ha sido puesto en marcha. La confianza interpersonal se mide en una escala de 1 a 4, donde 1 indica que el entrevistado considera que la gente de su comunidad no es nada confiable, y 4 que la gente de su comunidad es muy confiable. Por último, la cercanía al Centro Democrático se mide en una escala de 1 a 7, donde 1 implica que los entrevistados no se sienten nada cercanos a este partido político, y 7 que se sienten muy cercanos al mismo. Como variables de control, se incluyeron la edad, el nivel educativo, y si es zona urbana o rural.

Tras controlar por el efecto de la salud mental en las actitudes de reconciliación, el efecto de la victimización sigue siendo significativo y positivo. Se encontró que, independientemente de las secuelas psicológicas de la guerra, existen otros mecanismos que explican por qué las experiencias de victimización inciden de manera positiva en la disposición a convivir con excombatientes.²⁷

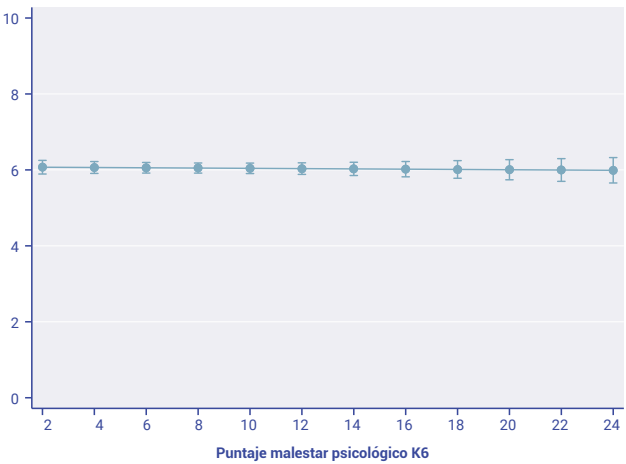
	(1)	(2)	(3)	(4)
Victimización	0.164 (4.63)**	0.159 (4.44)**		0.152 (4.26)**
Puntuación en escala malestar psicológico (K6)	-0.009 (0.97)		-0.004 (0.38)	
Mujer	-0.633 (6.35)**	-0.688 (6.92)**	-0.650 (6.65)**	-0.731 (7.84)**
Percepción cumplimiento Acuerdo de Paz	0.105 (1.91)	0.114 (2.06)*	0.107 (1.93)	
Confianza interpersonal	0.230 (4.35)**	0.233 (4.40)**	0.224 (4.21)**	
Cercanía al Centro Democrático	-0.111 (4.25)**	-0.111 (4.24)**	-0.109 (4.15)**	
Edad	0.000 (0.01)	-0.001 (0.27)	0.000 (0.12)	0.001 (0.19)
Nivel educativo	0.810 (8.65)**	0.816 (9.08)**	0.813 (8.58)**	0.877 (10.57)**
Zona urbana	-0.019 (0.15)	-0.000 (0.00)	-0.009 (0.07)	-0.072 (0.53)
PDET	0.349 (2.34)*	0.356 (2.34)*	0.417 (2.71)**	0.332 (2.14)*
Mayor capacidad estatal	0.194 (1.22)	0.203 (1.26)	0.177 (1.10)	0.190 (1.16)
Constante	3.853 (11.04)**	3.770 (11.19)**	3.988 (11.56)**	4.316 (16.46)**
R2	0.09	0.09	0.08	0.08
N	3,504	3,603	3,504	3,910

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$

27. Es importante tener en cuenta que uno de los supuestos del modelo es que no hay variables omitidas que expliquen el efecto de la violencia y de la salud mental en las actitudes de reconciliación (Acharya *et al.*, 2016). Este supuesto puede no ser realista, pues es muy probable que el efecto de la victimización en las actitudes de reconciliación pueda explicarse a través de mecanismos que no hayan sido capturados por el estudio.

Como se reporta en la primera y tercera columna de la tabla, en ningún modelo es significativa la variable de malestar psicológico. Para ilustrar este resultado, a partir del tercer modelo se estimaron las predicciones lineales del índice de disposición a convivir con desmovilizados para distintos niveles de malestar psicológico, manteniendo las otras variables de la regresión en su valor promedio. Como lo muestra la Gráfica 37, para todos los valores de la escala de malestar psicológico K6 el coeficiente se ubica alrededor de 6 en una escala de 1 a 10, donde 10 indica que aprueba firmemente la convivencia con excombatientes. En otras palabras, estos resultados indican que los síntomas de malestar psicológico no tienen incidencia sobre la disposición a la convivencia con excombatientes.²⁸

Gráfica 37. Efectos del malestar psicológico (escala K6) sobre la disposición hacia la convivencia con excombatientes



Fuente: Observatorio de la Democracia

28. En las gráficas se muestran las predicciones lineales con su intervalo de confianza del 95%.

Notas



Cuestionario Colombia, un país más allá del conflicto

<p>COLSEG. ¿Considera usted que el nivel de seguridad en el país es mejor, igual o peor que hace doce meses?</p> <p>(1) Mejor (2) Igual (3) Peor</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	
---	--

<p>PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Colombia?</p> <p>(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a) (3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	
--	--

<p>COLLIDS. ¿Considera usted que la situación de seguridad de los líderes sociales es mejor, igual o peor que hace doce meses?</p> <p>(1) Mejor [Pasa a IDIO2] (2) Igual [Pasa a IDIO2] (3) Peor [Sigue]</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a IDIO2]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a IDIO2]</p>	
--	--

<p>COLLIDS2. ¿Usted diría que el deterioro de la situación de seguridad de los líderes sociales ha afectado mucho, algo, poco o nada la seguridad de las personas de su comunidad?</p> <p>(1) Mucho (2) Algo (3) Poco (4) Nada</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	
--	--

Las siguientes preguntas se refieren a cómo se ha sentido en los últimos 30 días. Para cada pregunta, por favor dígame con qué frecuencia ha tenido estos sentimientos. **[Repetir “siempre,” “Casi siempre,” “a veces,” “casi nunca” o “nunca” para ayudar al entrevistado]**

	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi Nunca	Nunca	No sabe [NO LEER]	No responde [NO LEER]
COLEMOA. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia se sintió ...nervioso(a)?	1	2	3	4	5	888888	988888
COLEMOB. ...sin esperanza?	1	2	3	4	5	888888	988888
COLEMOC. ...inquieto(a) o intranquilo(a)?	1	2	3	4	5	888888	988888
COLEMOD. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia se sintió ...tan deprimido(a) que nada podía animarle?	1	2	3	4	5	888888	988888

COLEMOE ...que todo le costaba un gran esfuerzo?	1	2	3	4	5	888888	988888
COLEMOF . En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia se sintió ... inútil?	1	2	3	4	5	888888	988888

AOJ11 . Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a) ?	
(1) Muy seguro(a) (2) Algo seguro(a) (3) Algo inseguro(a) (4) Muy inseguro(a) (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]	

AOJ11X . Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un ataque o acción de un grupo armado, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?	
(1) Muy seguro(a) (2) Algo seguro(a) (3) Algo inseguro(a) (4) Muy inseguro(a) (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]	

CUESTIONARIO A

COLAOJ21A . Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantiza la seguridad en el lugar donde vive [Leer alternativas. Marcar sólo una respuesta] [NOTA DE PROGRAMACIÓN: ALEATORIZAR ORDEN DE APARICIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTUANDO LAS QUE NO SE LEEN]	
(1) Vecinos de su barrio o comunidad	
(2) Pandillas	
(3) Policía o militares	
(4) Crimen organizado y narcotraficantes	
(5) Personas pertenecientes a su familia	
(6) Delincuentes comunes	
(7) Guerrilla	
(8) Las BACRIM	
(9) Seguridad privada o celadores	
(10) [NO LEER] Otros	
(11) [NO LEER] Ninguno	
(888888) No sabe [NO LEER]	
(988888) No responde [NO LEER]	
(999999) Inaplicable [NO LEER]	

<p>COLAOJ21BN. Ahora voy a mencionarle algunos grupos y le voy a pedir que me indique cuál de ellos garantizaba la seguridad en el lugar donde usted vivía antes de la firma del Acuerdo de Paz [Leer alternativas. Marcar sólo una respuesta] [NOTA DE PROGRAMACIÓN: ALEATORIZAR ORDEN DE APARICIÓN DE LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTUANDO LAS QUE NO SE LEEN]</p> <p>(1) Vecinos de su barrio o comunidad (2) Pandillas (3) Policía o militares (4) Crimen organizado y narcotraficantes (5) Personas pertenecientes a su familia (6) Delincuentes comunes (7) Guerrilla (8) Las BACRIM (9) Seguridad privada o celadores (10) [NO LEER] Otros (11) [NO LEER] Ninguno (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	
--	--

<p>WC1. ¿Usted ha perdido algún miembro de su familia o pariente cercano a consecuencia del conflicto armado? O ¿tiene un familiar desaparecido por el conflicto?</p> <p>(1) Sí [Sigue] (2) No [Pasa a WC3] (888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a WC3] (988888) No responde [NO LEER] [Pasa a WC3]</p>	
<p>WC1T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	
<p>WC3. ¿Por razones del conflicto algún miembro de su familia tuvo que irse del país?</p> <p>(1) Sí [Sigue] (2) No [Pasa a WC2] (888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a WC2] (988888) No responde [NO LEER] [Pasa a WC2]</p>	
<p>WC3T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	

<p>WC2. ¿Y algún miembro de su familia tuvo que refugiarse o abandonar su lugar de vivienda por razones del conflicto?</p> <p>(1) Sí [Sigue] (2) No [Pasa a COLWC8]</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a COLWC8]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a COLWC8]</p>	
<p>WC2T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	
<p>COLWC8. ¿Y algún miembro de su familia fue víctima de un secuestro?</p> <p>(1) Sí [Sigue] (2) No [Pasa a COLWC9]</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a COLWC9]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a COLWC9]</p>	
<p>COLWC8T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	
<p>COLWC9. ¿Por razones del conflicto armado algún miembro de su familia fue despojado de su tierra?</p> <p>(1) Sí [Sigue]</p> <p>(2) No [Pasa a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WCT o COLWCT. De lo contrario, pasa a COLPAZ6A]</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WC o COLWC. De lo contrario, pasa a COLPAZ6A]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a INSTRUCCIONES COLWC4 si respondió SI en al menos una WC o COLWC. De lo contrario, pasa a COLPAZ6A]</p>	
<p>COLWC9T. ¿Esto sucedió en los últimos 12 meses?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER] (999999) Inaplicable [NO LEER]</p>	

[PREGUNTAR SI CONTESTARON “SI” A WC1T, WC2T, WC3T, COLWC8T, o COLWC9T]

¿Qué grupo o grupos fueron responsables de estos hechos? **[NO LEER LAS ALTERNATIVAS. EL ENCUESTADO PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN. ANOTAR TODAS LAS OPCIONES MENCIONADAS O (888888) No sabe (988888) No responde]**

	Sí	No	No sabe [NO LEER]	No responde [NO LEER]	Inaplicable (no fue víctima) [NO LEER]
COLWC4A. La guerrilla	1	2	888888	988888	999999
COLWC4B. Los paramilitares	1	2	888888	988888	999999
COLWC4D. El ejército	1	2	888888	988888	999999

COLWC4E. La policía	1	2	888888	988888	999999
COLWC4G. BACRIM (Bandas criminales)	1	2	888888	988888	999999
COLWC4C. Ex paramilitares que se han reagrupado	1	2	888888	988888	999999
COLWC4F. Otro	1	2	888888	988888	999999

<p>COLG18. ¿Cuál es la pena máxima en años para un excombatiente desmovilizado de las FARC que se acoja a la Justicia Especial de Paz? [ANOTAR NÚMERO EXACTO. REPETIR SOLO UNA VEZ SI EL ENTREVISTADO NO RESPONDE.]</p> <p>_____</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	
<p>COLG110. ¿Su municipio hace parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, también conocidos como PDETs?</p> <p>(1) Si (2) No</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	
<p>COLG111. ¿La creación de 16 curules para las zonas más afectadas por el conflicto hace parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz con las FARC?</p> <p>(1) Si (2) No</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p>	

[ENTREGAR TARJETA “B” AL ENTREVISTADO]

<p>B0. En esta tarjeta hay una escalera con escalones numerados del uno al siete, en la cual 1 es el escalón más bajo y significa NADA y el 7 el escalón más alto y significa MUCHO. Por ejemplo, si yo le preguntara hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un puntaje de 1. Si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver televisión? Léame el número.</p> <p>[Asegúrese que el entrevistado entienda correctamente].</p>									
1	2	3	4	5	6	7	888888	988888	
Nada						Mucho		No sabe [NO LEER]	No responde [NO LEER]

[Anotar un número 1-7, 888888 = No sabe, 988888= No responde]

Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número.

B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de Colombia garantizan un juicio justo? [Sondee: Si usted cree que los tribunales no garantizan para <u>nada</u> la justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan <u>mucho</u> la justicia, escoja el número 7 o escoja un puntaje intermedio]	
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de Colombia?	
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político colombiano?	

[PREGUNTAR ALEATÓRIAMENTE 2 DE LAS PREGUNTAS]

[Seguir utilizando tarjeta "B"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

COLB60N. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)?	
--	--

CUESTIONARIO A

[Seguir utilizando tarjeta "B"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

B3POLX. ¿Hasta qué punto cree que la Policía Nacional respeta los derechos humanos de los colombianos hoy en día?	
--	--

CUESTIONARIO B

[Seguir utilizando tarjeta "B"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

B3MILX. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas colombianas respetan los derechos humanos de los colombianos hoy en día?	
---	--

Y siempre usando la misma tarjeta,

[Anotar un número 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde]

COLPROPAZ1B. El gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz. ¿Hasta qué punto apoya usted este acuerdo de paz?	
---	--

COLPACTPR. ¿Desde su punto de vista ¿qué tanto de lo acordado entre el gobierno y las FARC en el acuerdo de paz ha sido puesto en marcha? [Leer opciones] (1) Nada de lo acordado (2) Menos de la mitad (3) La mitad de lo acordado (4) Más de la mitad (5) Todo lo acordado (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]	
---	--

CUESTIONARIO A

[Seguir utilizando tarjeta "B"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

Ahora le voy a leer un par de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios.

[Anotar 1-7, (888888) No sabe, (988888) No responde, (999999) Inaplicable]

COLRECON19B. Que los responsables de crímenes atroces pidan perdón a las víctimas.	
COLRECON19C. Que el Estado indemnice a las víctimas del conflicto armado.	

CUESTIONARIO B

[Seguir utilizando tarjeta "B"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

Ahora le voy a leer un par de acciones y quiero que me diga si usted cree que ellas contribuirían nada o contribuirían mucho para que se dé la reconciliación entre las víctimas del conflicto armado y sus victimarios.

[Anotar 1-7, (888888) No sabe, (988888) No responde, (999999) Inaplicable]

COLRECON20B. Que se establezca la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.	
COLRECON20C. Que los victimarios indemnicen a las víctimas del conflicto armado.	

[Seguir utilizando Tarjeta "B"]

Cambiando de tema, y pensando en los partidos políticos en Colombia, ¿qué tan cercano políticamente se siente a...

[ALEATORIZAR ORDEN DE LOS PARTIDOS]

[Anotar 1-7, (888888) No sabe, (988888) No responde]

COLVB27B. El Centro Democrático?	
---	--

<p>COLPROPAZ16. El 2 de octubre de 2016 se realizó un plebiscito para ratificar los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC. ¿Qué hizo usted ese día?</p> <p>[ALEATORIZAR ORDEN DE OPCIONES] [Leer opciones]</p> <p>Votó por el Sí</p> <p>Votó por el No</p> <p>No fue a votar</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER]</p>	
--	--

Utilizando de nuevo esta tarjeta, donde 1 significa "nada" y 7 significa "mucho" quisiera que me dijera **qué tanto están contribuyendo** los siguientes actores al cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC

COLPAZ30A. El presidente Iván Duque	
COLPAZ30B. Los excomandantes de las FARC	
COLPAZ30C. Los exguerrilleros rasos de las FARC	

[RECOGER TARJETA "B"]

<p>COLPAZ6A. ¿Y usted ve posible, sí o no, el perdón y la reconciliación de los ciudadanos con los excombatientes desmovilizados de las FARC?</p> <p>(1) Sí (2) No (888888) No sabe [NO LEER] (988888) No responde [NO LEER]</p> <p>(999999) Inaplicable [NO LEER]</p>
--

[ENTREGAR TARJETA "C" AL ENTREVISTADO]

Ahora, vamos a usar una escalera en donde el número 1 representa "muy en desacuerdo" y el número 7 representa "muy de acuerdo". Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio.

1	2	3	4	5	6	7	888888	988888
Muy en desacuerdo acuerdo						Muy de	No sabe [NO LEER]	No responde [NO LEER]

[Anotar un número 1-7, 888888 = No sabe, 988888= No responde]

Le voy a leer algunas frases. Por favor dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.

ING4. Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

COLINSTGOB12. En comparación con hace 12 meses, hoy las personas acuden con más frecuencia a las instituciones del Estado para resolver una disputa con algún vecino. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

[Seguir utilizando Tarjeta "C"]

Pensando en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, ¿hasta qué punto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

[Anotar 1-7, (888888) No sabe, (988888) No responde, (999999) Inaplicable]

[ALEATORIZAR ORDEN DE LAS PREGUNTAS COLPROPAZ13C-M]

COLPROPAZ13C. La implementación del acuerdo fortalecerá la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPROPAZ13J. La implementación del acuerdo mejorará la seguridad en su municipio. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPROPAZ13K. La implementación del acuerdo mejorará la situación económica de su municipio. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

COLPROPAZ13M. La implementación del acuerdo mejorará el acceso de los campesinos a la tierra. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?

CUESTIONARIO A

[Seguir utilizando tarjeta "C"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

COLLID1. El trabajo de los líderes sociales es importante para la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

CUESTIONARIO B

[Seguir utilizando tarjeta "C"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

COLLID2. Actualmente el Estado colombiano está comprometido con la protección de los líderes sociales. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?	
--	--

	Negociación	Uso de la fuerza militar	[No leer] Ambas	No sabe [NO LEER]	No responde [NO LEER]
COLPAZ1A. De las siguientes opciones para solucionar el conflicto con la guerrilla, ¿cuál cree que es la mejor? [Leer alternativas]	1	2	3	888888	988888

Retomemos la escala de 1 a 7, donde el 1 significa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo".

En la mesa de negociación de La Habana, el Gobierno y las FARC llegaron a varios acuerdos. Quisiera que me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con...

COLPACT22. Que se implementen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las regiones más afectadas por el conflicto. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	
---	--

COLPACT19N. Que se desarrollen programas de sustitución de cultivos para enfrentar la producción de drogas en el país ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	
--	--

[Seguir utilizando Tarjeta "C"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

Ahora, pensando en la Justicia Especial para la Paz creada en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, quisiera pedirle su opinión sobre las siguientes afirmaciones.

COLPACT18A. La Justicia Especial para la Paz contempla privación de la libertad sin cárcel a desmovilizados de las FARC que confiesen sus crímenes. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	
--	--

[ENTREGAR TARJETA "D" AL ENTREVISTADO]

Ahora vamos a cambiar a otra tarjeta. Esta nueva tarjeta tiene una escala del 1 a 10, el 1 indica que usted desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría las siguientes situaciones...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	888888 No sabe [NO LEER]	988888 No responde [NO LEER]
Desaprueba firmemente					Aprueba firmemente						

CUESTIONARIO ALEATORIO

[Anotar 1-10, 888888= No sabe, 988888 = No responde]

E16. Que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba?	
---	--

Ahora quisiera que me dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría las siguientes situaciones, utilizando la misma tarjeta.

[Anotar 1-10, (888888) No sabe, (988888) No responde, (999999) Inaplicable]

COLRECON18. Que en el colegio de su hija o hijo estudien hijos de excombatientes desmovilizados de grupos armados ilegales. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?	
COLRECON7N. Que en la empresa o lugar donde usted trabaje le dieran empleo a un desmovilizado o desmovilizada de las FARC. ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba esta situación?	

[RECOGER TARJETA "D"]

<p>COLDIS35F. Pensando en los desmovilizados de los grupos armados, por favor dígame si... [Leer alternativas]</p> <p>(1) No los quiere de vecinos</p> <p>(0) No tiene problema con tenerlos de vecinos</p> <p>(888888) No sabe [NO LEER]</p> <p>(988888) No responde [NO LEER]</p>	
---	--

[ENTREGAR TARJETA "C"]

[Anotar 1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999 = Inaplicable]

Usando nuevamente esta escala de 1 a 7, donde el 1 significa "muy en desacuerdo" y 7 "muy de acuerdo".

En la mesa de negociación de La Habana, el Gobierno y las FARC llegaron a varios acuerdos. Quisiera que me dijera hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con...

COLPACT8. Que se reserven curules del Congreso para las regiones más afectadas por el conflicto armado, con el fin de que estas regiones tengan mayor representación en el Congreso. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	
COLESPA2AN. Que los excombatientes desmovilizados de las FARC presenten candidatos a elecciones. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?	

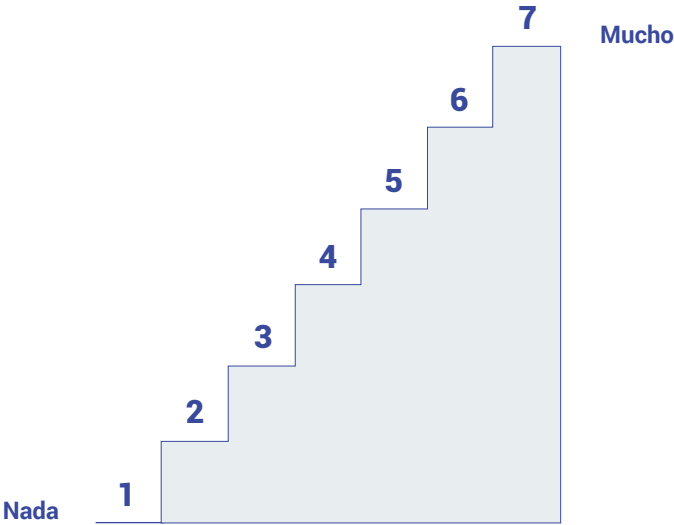
[Sólo para cuestionarios NO electrónicos: Usar tarjeta "ED" como apoyo. NO mostrar la tarjeta al encuestado]

ED. ¿Cuál fue el último año de educación que usted completó o aprobó?

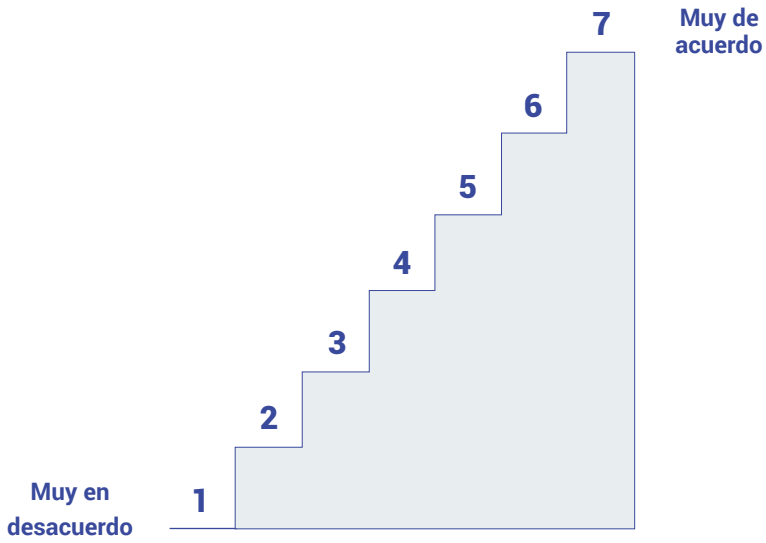
_____ Año de _____ (primaria, secundaria, universitaria, superior no universitaria) = _____ años total **[Usar tabla a continuación para el código]**

	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Ninguno	0						
Primaria	1	2	3	4	5		
Secundaria	6	7	8	9	10	11	
Universitaria	12	13	14	15	16	17	18+
Superior no universitaria	12	13	14	15			
No sabe [NO LEER]	888888						
No responde [NO LEER]	988888						

Tarjeta B



Tarjeta C



Tarjeta D

